

27ª REUNION — 7ª SESION EXTRAORDINARIA — 9/10 DE MARZO DE 1988

**Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,  
doctor VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ,  
del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor EDISON OTERO, y el señor vicepresidente segundo  
del Honorable Senado, doctor JORGE D. SOLANA**

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRON

**SENADORES PRESENTES:**

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
AMOEDO, Julio A.  
BENÍTEZ, Alfredo L.  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BRASESCO, Luis A. J.  
BRAVO, Leopoldo  
BRAVO HERRERA, Horacio F.  
BRITOS, Oraldo N.  
CONCHEZ, Pedro A.  
DE LA RÚA, Fernando  
DEL VILLAR, Manuel  
FALSONE, José A.  
GASS, Adolfo  
GENOUD, José  
GIL, Francisco  
GROSSO, Edgardo Roger M.  
GURDULICH de CORREA, Liliana I.  
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.  
JUÁREZ, Carlos Arturo  
LAFFERRIERE, Ricardo E.  
LEÓN, Luis A.  
MALHARRO de TORRES, Margarita  
MARTIARENA, José H.

MAUHUM, Fernando H.  
MAZZUCCO, Faustino M.  
MENEM, Eduardo  
MOLINA, Pedro E.  
MURGUÍA, Edgardo P. V.  
NÁPOLI, Antonio O.  
OTERO, Edison  
RIVAS, Olijela del Valle  
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.  
ROMERO, Juan C.  
ROMERO FERIS, José A.  
RUBEO, Luis  
SAADI, Ramón Eduardo  
SALIM, Luis  
SOLANA, Jorge D.  
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito  
TRILLA, Juan  
VELÁZQUEZ, Héctor J.  
VIDAL, Manuel D.

**AUSENTES, CON AVISO**

NIEVES, Rogelio J.  
SÁNCHEZ, Libardo N.  
SAPAG, Elías

## SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente del Honorable Senado el señor senador por Río Negro, doctor Antonio O. Nápoli, procede al izamiento de la bandera nacional. (Pág. 2480.)
2. En virtud del dictamen de la Comisión de Acuerdos, se pasa a sesión secreta. (Pág. 2480.)
3. Asuntos entrados:
  - I. Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 2480.)
  - II. Mensajes del Poder Ejecutivo por los que se solicitan acuerdos. (Pág. 2481.)
  - III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano (S.-105-124/88). (Pág. 2481.)
  - IV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de Sede entre el gobierno de la República Argentina y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (S.-105-147/88). (Pág. 2484.)
  - V. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (S.-105-148/88). (Pág. 2488.)
  - VI. Mensaje del Poder Ejecutivo sobre Utilización del Asbesto en Condiciones de Seguridad y Recomendación sobre la Utilización del Asbesto en Condiciones de Seguridad (S.-105-149/88). (Pág. 2494.)
  - VII. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (S.-105-150/88). (Pág. 2505.)
  - VIII. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 2510.)
  - IX. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 2511.)
4. Moción de preferencia formulada por el señor senador Nápoli para tratar en la próxima semana el proyecto de ley en revisión por el que se prorroga la ley 23.466 sobre beneficios a derechohabientes de personas desaparecidas (C.D.-105-76/88). (Se aprueba.) (Pág. 2511.)
5. Asuntos entrados:
  - IX. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Continuación.) (Pág. 2511.)
  - X. Comunicaciones de señores senadores. (Página 2514.)

XI. Comunicaciones oficiales. (Pág. 2515.)

XII. Dictámenes de comisiones. (Pág. 2516.)

6. Moción de preferencia formulada por el señor senador de la Rúa para tratar en la próxima sesión pública el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías en el proyecto de ley del que es autor por el que se prohíbe y sanciona todo tipo de actos discriminatorios (S.-105-452/87). Se aprueba. (Pág. 2517.)
7. Asuntos entrados:
  - XIII. Peticiones particulares. (Pág. 2517.)
  - XIV. Proyecto de comunicación del señor senador de la Rúa por el que se solicita se declare de interés nacional la Fiesta de la Pachamama a celebrarse en El Aguilar, Jujuy (S.-105-464/88). (Pág. 2518.)
  - XV. Proyecto de comunicación del señor senador Britos y otros señores senadores por el que se solicitan informes respecto del conflicto suscitado con el personal del Tribunal de Cuentas de la Nación (S.-105-467/88). (Pág. 2518.)
  - XVI. Proyecto de comunicación del señor senador Rubeo por el que se solicitan informes respecto de las actividades del Banco Hipotecario Nacional (S.-105-468/88). (Pág. 2519.)
  - XVII. Proyecto de ley del señor senador del Villar por el que se transfiere en donación un inmueble perteneciente a Enco-tel a la Municipalidad de Chofila, Chubut (S.-105-469/88). (Pág. 2520.)
  - XVIII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Nieves y Rodríguez Saá por el que se solicita la inclusión en sesiones extraordinarias del proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica un artículo de la ley 17.500 de explotación de los recursos del mar territorial argentino (S.-105-470/88). (Pág. 2521.)
  - XIX. Proyecto de resolución del señor senador Rodríguez Saá y otros señores senadores por el que se invita al señor ministro de Defensa a informar sobre la situación de las fuerzas armadas (S.-105-471/88). (Pág. 2522.)
  - XX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicita la incorporación de la industria tabacalera dentro de las exenciones impositivas de la ley 23.549 (S.-105-474/88). (Página 2522.)
  - XXI. Proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita se declare en estado de emergencia social,

económica y agropecuaria el departamento de Capayán, Catamarca. (S.-105-475/88.) (Pág. 2523.)

- XXII. Proyecto de resolución del señor senador Gass por el que se repudia el atentado terrorista perpetrado contra un avión de la República de Corea. (S.-105-476/88.) (Pág. 2524.)
- XXIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicita la liberación del precio del azúcar y del alcohol de melaza. (S.-105-477/88.) (Página 2524.)
- XXIV. Proyecto de declaración del señor senador Solari Yrigoyen por el que se expresa preocupación por actos que perturban los comicios paraguayos. (S.-105-478/88.) (Pág. 2525.)
- XXV. Proyecto de resolución del señor senador Jiménez Montilla por el que se solicitan informes respecto a la circulación de billetes falsos. (S.-105-479/88.) (Página 2526.)
- XXVI. Proyecto de ley de la señora senadora Rivas por el que se modifican diversos artículos de la ley 19.134, de adopción. (S.-105-480/88.) (Pág. 2527.)
- XXVII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Britos y Murguía por el que se solicitan informes respecto a la transferencia de fondos al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (S.-105-481/88.) (Pág. 2529.)
- XXVIII. Proyecto de resolución del señor senador Lafferrière y otros señores senadores por el que se instituye la distinción "El Senado de la Nación al Mérito Argentino". (S.-105-482/88.) (Pág. 2529.)
- XXIX. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes respecto a las negociaciones entre el Estado nacional y la empresa SAS por la venta de Aerolíneas Argentinas. (S.-105-483/88.) (Pág. 2530.)
- XXX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes respecto a la aplicación y antecedentes del decreto 183/88. (S.-105-485/88.) (Pág. 2531.)
- XXXI. Proyecto de resolución del señor senador Jiménez Montilla por el que se solicitan informes respecto a la adjudicación del gasoducto Neuquén-Buenos Aires. (S.-105-486/88.) (Pág. 2531.)

- XXXII. Proyecto de ley del señor senador Lafferrière por el que se establece un programa de capacitación práctica en empresas para estudiantes de los niveles medio y superior. (S.-105-487/88.) (Página 2532.)
- XXXIII. Proyecto de resolución de los señores senadores Bravo y Gil por el que se invita al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto a informar sobre las maniobras militares de Gran Bretaña en las islas Malvinas. (S.-105-488/88.) (Página 2534.)
- XXXIV. Proyecto de comunicación del señor senador Solari Yrigoyen por el que se solicitan informes acerca de la situación de los estudios para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Frey, Chubut. (S.-105-489/88.) (Pág. 2534.)
- XXXV. Proyecto de declaración del señor senador Gass por el que se expresa repudio ante las maniobras militares dispuestas por Gran Bretaña en el Atlántico Sur. (S.-105-491/88.) (Pág. 2535.)
- XXXVI. Proyecto de declaración del señor senador Lafferrière por el que se expresa repudio ante las maniobras dispuestas por Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Atlántico sur. (S.-105-492/88.) (Página 2535.)
- XXXVII. Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que se solicita la rehabilitación de la aduana de tercera categoría de Santo Tomé, Corrientes. (S.-105-493/88.) (Pág. 2536.)
- XXXVIII. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes sobre la aplicación de la ley 23.300 sobre rebajas en los precios de los pasajes para periodistas. (S. 105-494/88.) (Pág. 2530.)
- XXXIX. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicita la reglamentación de la ley 23.109 sobre beneficios a ex combatientes de las islas Malvinas. (S.-105-495/88.) (Pág. 2537.)
- XL. Proyecto de resolución de los señores senadores Bravo y Gil por el que se dispone la reedición de la obra "Facundo o Civilización y Barbarie" de Domingo F. Sarmiento por la Imprenta del Congreso de la Nación. (S.105-496/88.) (Pág. 2537.)
- XLI. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicita la reimplantación del subsidio por desempleo a cargo de las cajas de asignaciones familiares (S.-105-497/88.) (Pág. 2538.)

- XLII. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se repudia la falta de reglamentación de la ley 23.472, de creación del Fondo de Garantía de los Créditos Laborales. (S. 105/498/88.) (Pág. 2538.)
- XLIII. Proyecto de resolución de los señores senadores Sánchez y Menem por el que se repudia la realización de maniobras militares en el Atlántico Sur por parte del Reino Unido. (S. 105-499/88.) (Pág. 2538.)
- XLIV. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes sobre el financiamiento del sistema previsional (S. 105-500/88.) (Página 2539.)
- XLV. Proyecto de declaración del señor senador Solari Yrigoyen por el que se repudia la decisión del gobierno británico de realizar maniobras en el Atlántico Sur. (S.-105-501/88.) (Pág. 2540.)
- XLVI. Proyecto de comunicación de los señores senadores Sánchez y Menem por el que se solicitan informes sobre un supuesto asentamiento chileno en Villa Las Estrellas, en la zona antártica. (S.-105-502/88.) (Pág. 2541.)
- XLVII. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes sobre el no reconocimiento del presidente de Panamá por parte del Poder Ejecutivo. (S. 105-503/88.) (Página 2543.)
- XLVIII. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes sobre la posición argentina en la investigación de la supuesta violación de derechos humanos en Cuba. (S. 105-504/88.) (Pág. 2544.)
- XLIX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan informes sobre el funcionamiento de los institutos de menores. (S.105-505/88.) (Pág. 2544.)
- L. Proyecto de ley de los señores senadores Romero Feris y Aguirre Lanari sobre sistema nacional de obras sociales. (S. (S.-105-506/88.) (Pág. 2545.)
- LI. Proyecto de comunicación de los señores senadores Romero Feris y Aguirre Lanari por el que se solicita la inclusión del proyecto de ley de obras sociales en el temario de las sesiones extraordinarias. (S.-105-507/88.) (Pág. 2550.)
- LII. Proyecto de comunicación del señor senador Berhongaray por el que se solicita el otorgamiento de créditos a productores agropecuarios afectados por incendios. (S.-105-508/88.) (Pág. 2551.)
- LIII. Proyecto de ley del señor senador Brasesco de asociaciones sindicales (S.-105-509/88.) (Pág. 2552.)
- LIV. Proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez Saá por el que se solicita el establecimiento de un servicio ferroviario permanente entre Buenos Aires y Villa Dolores, Córdoba (S.-105-510/88.) (Pág. 2561.)
- LV. Proyecto de comunicación del señor senador Jiménez Montilla por el que se solicita una ambulancia para el Sindicato Municipal de Famaillá, Tucumán (S.-105-511/88.) (Pág. 2561.)
- LVI. Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez por el que se solicita la adopción de medidas tendientes a mantener la asistencia crediticia brindada por el Banco Hipotecario Nacional a sectores de ingresos medios (S.-105-512/88.) (Página 2562.)
- LVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan informes sobre la situación del Hospital Neuropsiquiátrico José Borda (S.-105-513/88.) (Pág. 2563.)
- LVIII. Proyecto de resolución del señor senador Brasesco por el que se dispone la creación de una comisión especial bicameral redactora del proyecto de Código del Niño (S.-105-514/88.) (Pág. 2563.)
- LIX. Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez por el que se solicita la construcción de un puente internacional sobre el río Uruguay, en Misiones (S.-105-515/88.) (Pág. 2564.)
- LX. Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez por el que se solicita la pavimentación de diversos tramos de la ruta nacional 14 en la provincia de Misiones (S.-105-516/88.) (Pág. 2564.)
- LXI. Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez por el que se solicita la pavimentación de la ruta nacional 103 entre Oberá y Alba Posse, Misiones (S.-105-517/88.) (Pág. 2564.)
- LXII. Proyecto de ley de los señores senadores Sapag y Solana por el que se modifica el Código de Minería (S.-105-518/88.) (Pág. 2565.)
- LXIII. Proyecto de ley de los señores senadores Sapag y Solana por el que se modifica la ley 23.291 (cesión de tierras a la pro-

- vincia del Neuquén (S.-105-519/83). (Pág. 2571.)
- LXIV. Proyecto de ley de los señores senadores Sapag y Solana por el que se modifica la ley 23.290 (límites del Parque Nacional Nahuel Huapi) (S.-105-520/88). (Pág. 2572.)
- LXV. Proyecto de ley del señor senador Sapag por el que se modifica la ley 21.608, de promoción industrial (S.-105-521/88). (Pág. 2573.)
- LXVI. Proyecto de comunicación de los señores senadores Britos y Murguía por el que se solicitan informes sobre las gestiones realizadas a fin de impedir maniobras militares inglesas en el Atlántico Sur (S.-105-522/88). (Pág. 2575.)
- LXVII. Proyecto de ley del señor senador Nápoli por el que se declara de interés nacional la construcción de una planta de tratamiento integral de aguas cloacales en Bariloche (S.-105-524/88). (Pág. 2576.)
- LXVIII. Proyecto de ley del señor senador Berhongaray por el que se modifica la ley 20.655 en lo relativo al uso y control de estimulantes en el deporte (S.-105-525/88). (Pág. 2576.)
- LXIX. Proyecto de comunicación del señor senador Berhongaray por el que se solicita la reglamentación de la ley 20.655 (uso y control de estupefacientes) (S.-105-526/88). (Pág. 2577.)
- LXX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicita la adopción de medidas para promocionar el uso del alcohol etílico (S.-105-527/88). (Pág. 2578.)
- LXXI. Proyecto de declaración del señor senador Brasesco por el que se solicita el apoyo de la Subsecretaría de la Mujer a la Policía Federal en los casos de mujeres golpeadas (S.-105-528/88). (Pág. 2579.)
- LXXII. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes sobre la constitución de una empresa mixta en Encotel (S.-105-530/88). (Pág. 2580.)
- LXXIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Rivas por el que se repudian las maniobras militares británicas en el Atlántico Sur (S.-105-531/88). (Página 2580.)
- LXXIV. Proyecto de resolución de los señores senadores Saadi y Amoedo por el que se crea una comisión investigadora de presuntas irregularidades en la adjudicación de licencias de radiodifusión (S.-105-532/88). (Pág. 2581.)
8. A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones, el texto elaborado por las comisiones de Industria, de Agricultura y Ganadería y de Economías Regionales, sobre el proyecto de ley en revisión por el cual se regula la actividad vitivinícola nacional (C.D.-105-78/88). (Pág. 2586.)
9. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Solari Yrigoyen, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, por manifestaciones vertidas en el recinto en la sesión en minoría del 16 de diciembre del año próximo pasado. (Pág. 2599.)
10. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Saadi por los términos de un proyecto de comunicación de los señores senadores por la provincia de Córdoba a raíz del conflicto suscitado entre Telcelor S.A., Canal 12, privado de la provincia de Córdoba, y la provincia de Catamarca. (Pág. 2603.)
11. A moción del señor senador Gass se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución del que es autor, por el que se repudia el atentado terrorista del que fuera objeto un avión perteneciente a la línea aérea de la República de Corea del Sur (S.-105-476/88). (Pág. 2605.)
12. Moción de sobre tablas formulada por el señor senador Menem para aprobar en una sola resolución las aspiraciones de distintos señores senadores vinculadas con el repudio de las maniobras militares inglesas en el Atlántico Sur. Moción del señor senador Gass para que los señores senadores Menem y Berhongaray se aboquen a la redacción de un proyecto que sintetice los presentados sobre este tema. Se aprueba. (Pág. 2605.)
13. Moción de preferencia formulada por el señor senador Brasesco para considerar en la próxima sesión con dictamen de comisión o sin él, el proyecto de declaración del que es autor por el que se solicita que la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia preste asesoramiento y apoyo a la Policía Federal en todo lo relacionado con su intervención en caso de mujeres golpeadas y se constituya una comisión especial en el Senado de la Nación a tal efecto. Se aprueba. (Pág. 2608.)
14. A pedido del señor senador Saadi se resuelve recomendar pronto despacho a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comunicaciones para el proyecto de comunicación del que es autor junto con el señor senador Amoedo por el cual se constituye una comisión investigadora de las presuntas irregularidades en la adjudicación de licencias de radio y televisión. (Pág. 2609.)
15. A moción del señor senador Nápoli se considera sobre tablas y se aprueba la insistencia del Senado de la Nación en el proyecto de ley en revisión sobre feriados nacionales (C.D.-105-77/88). (Página 2609.)
16. Manifestaciones del señor senador Gass sobre la posición de la República Oriental del Uruguay respecto de las maniobras militares inglesas en el Atlántico Sur. (Pág. 2612.)

17. A moción del señor senador Britos se inicia la consideración sobre tablas del proyecto de ley del que es autor junto con otros señores senadores sobre asociaciones sindicales (S.-105-536/88). (Pág. 2612).

18. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado. (Página 2639.)

II. Inserciones. (Pág. 2643.)

—En Buenos Aires, a las 19 y 52 del miércoles 9 de marzo de 1988:

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.

### I

#### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Río Negro, doctor Antonio O. Nápoli, por haber sido el autor de la iniciativa de colocar el mástil con la bandera en el recinto, a izarla; en lo sucesivo se hará por estricto orden alfabético.

—Puesto de pie todos los presentes, el señor senador Antonio O. Nápoli procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

### 2

#### SESION SECRETA

Sr. Presidente. — A continuación, en virtud del dictamen de la Comisión de Acuerdos, se pasa a sesión secreta.

—Son las 19 y 54.

—A las 20.

Sr. Presidente. — Continúa la sesión pública.

### 3

#### ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

### I

#### Comunicaciones de la Presidencia de la Nación

Decreto del 30 de diciembre de 1987, por el que se dejan sin efecto los decretos 1.023/87, de designación del señor senador Brasesco como observador en el seminario "Normas nacionales e internacionales del trabajo para los países de América latina", realizado en Montevideo, Uruguay, y 1.076/87, de designación del señor

senador Amoedo, para asistir al simposio sobre "Deuda Externa Latinoamericana", realizado en Brasilia, Brasil. (D.P.-1.137/87.) (A sus antecedentes.)

—Decreto del 7 de enero de 1988, por el que se designa a tres agentes para que viajen a Uruguay, como adelanto del viaje del señor presidente del Honorable Senado a esa República par tratar temas relacionados con los países sudamericanos. (D.P.-288.) (A sus antecedentes.)

—Decreto de la misma fecha, por el que se designa al señor senador Jiménez Montilla en el cargo de presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, en remplazo del señor senador Nieves. (D.P.-688.) (A sus antecedentes.)

—Decreto del 13 de enero de 1988, por el que se designa al señor senador Brasesco para que viaje a Santo Domingo, República Dominicana, para completar informes sobre programas relacionados con el trabajo de la mujer en su carácter de ama de casa. (D.P.-13/88.) (A sus antecedentes.)

—Decreto del 14 de enero de 1988, por el que se adhiere al sentimiento de pesar causado por la desaparición física del ex senador nacional don Felipe Abdala. (D.P.-14/88.) (A sus antecedentes.)

—Decreto del 27 de enero de 1988, por el que se designa al señor senador Rodríguez Saá para integrar la comitiva oficial del señor presidente de la Nación en su viaje al reino de España. (D.P.-45/88.) (A sus antecedentes.)

—Decreto del 10 de febrero de 1988 por el que se designa al señor senador Berhongaray para que viaje a La Habana, Cuba, entre el 15 y el 28 de febrero del mismo año, para participar en la "Conferencia Internacional Problemática de Software". (D.P.-76/88.) (A sus antecedentes.)

—Decreto del 12 de febrero de 1988, por el que se designa al señor senador Nápoli y al secretario coordinador doctor Luis Caero, para acompañar al señor presidente del Honorable Senado a la ceremonia de asunción del mando presidencial en la República de Corea (D.P.-86/88.) (A sus antecedentes.)

—Decreto del 15 de febrero de 1988, por el que se adhiere al sentimiento de pesar causado por la desaparición física del secretario de Turismo de la Presidencia de la Nación y diputado nacional electo don Francisco Manrique. (D.P.-87/88.) (A sus antecedentes.)

—Decreto del 16 de febrero de 1988, por el que se aceptan las donaciones sin cargo efectuadas por los pintores don José A. Usandivaras y don Julián Gustavo Trigo, de las obras de su producción realizadas al óleo y tituladas "Capilla Vallista" y "Dos Banderas", respectivamente. (D.P.-188/88.) (A sus antecedentes.)

—Decreto de la misma fecha por el que se designa al señor Aguirre Lanari como integrante de la Comisión Especial creada en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales en relación a conflictos interprovinciales (D.P.-89/88.) (A sus antecedentes.)

—Decreto del 18 de febrero de 1988, por el que se expresa el beneplácito, la adhesión a la realización de la II Exposición de Industria Argentina, a desarrollarse en La Paz, Bolivia, del 14 al 31 de mayo del mismo año, organizada por la Cámara Latinoamericana de Co-

consideración de una insistencia, no de un proyecto concreto de tratamiento sobre tablas.

**Sr. Mauhum.** — Justamente en el tratamiento sobre tablas resolveremos la devolución. De lo contrario, no sé en qué forma se puede hacer. La Presidencia resolverá.

**Sr. Presidente.** — Es una resolución de insistencia. De cualquier modo, no hay inconveniente en comenzar en primer término con el tratamiento sobre tablas.

Se va a votar el tratamiento sobre tablas.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Gil.** — Por unanimidad.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar la insistencia.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobada la insistencia. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

## 16

### MANIFESTACIONES

**Sr. Gass.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por la provincia de Buenos Aires.

**Sr. Gass.** — Deseo dar a la Cámara una brevísima información.

Hace pocos momentos el señor senador por Corrientes habló de la hermandad latinoamericana respecto al problema de las Malvinas. El señor canciller, quien está informando a la Cámara de Diputados, acaba de referirse a la posición de la República Oriental del Uruguay. Dijo que "Las autoridades uruguayas argumentaron que encontrándose en conflicto el Reino Unido y la Argentina, autorizar este sobrevuelo hacia las Malvinas implicaría alejarse de la neutralidad comprometida, por lo que lo único posible es el retorno de ese avión a Londres. Al mismo tiempo, la República Oriental del Uruguay reitera la soberanía argentina sobre las islas Malvinas". (*Aplausos.*)

## 17

### ASOCIACIONES SINDICALES

**Sr. Presidente.** — En consideración el proyecto de ley sobre asociaciones profesionales.

Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena.** — La Presidencia ha dicho que vamos a tratar un proyecto sobre asociaciones profesionales que está en Secretaría.

Quiero que se me diga qué proyecto es éste, si es el que viene en revisión de la Cámara de Diputados, si es el proyecto que ha presentado el señor senador Brasesco, del cual nos ha hecho llegar copia hace dos días, o si es algún otro proyecto distinto.

**Sr. Presidente.** — Es un proyecto que suscribe por unanimidad la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

**Sr. Martiarena.** — ¿Significa eso que ha retirado su proyecto el señor senador Brasesco y lo ha reemplazado por éste?

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Brasesco.** — Exactamente, señor senador Martiarena.

Al ponerse en tratamiento este proyecto iba a pedir el uso de la palabra para dejar sin efecto la presentación del que fui autor recogiendo inquietudes de senadores justicialistas, de senadores de partidos provinciales y de otros sectores porque no era de mi exclusiva autoría sino que lo presentaba como antecedente de todo lo que se había hecho en el hipotético caso de no arribar a un proyecto de consenso, como ha ocurrido ahora.

Habiendo un proyecto de consenso, el suscriptor por el señor senador que habla no tiene significación parlamentaria e histórica alguna y oportunamente, cuando se apruebe el tratamiento del que fue presentado por los miembros de la comisión presentes en la reunión efectuada en la misma, solicitaré que se retire, con autorización del cuerpo, dicho proyecto.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Juárez.** — Señor presidente, me acabo de informar, por las expresiones vertidas por el señor senador Brasesco a solicitud del señor senador Martiarena, que lo que está por entrar a consideración del cuerpo es un nuevo proyecto cuyas conclusiones se han obtenido por consenso. Si esto es así, considero que debe quedar en claro, a los efectos de la validez institucional del debate que se va a producir, que no se trata de un proyecto que ha venido acá, a la Cámara de origen, modificado por la Cámara de Diputados, sino que se va a tratar un nuevo proyecto de ley.

Y si es que se va a tratar un nuevo proyecto de ley al que se ha arribado por consenso de las distintas bancadas, lo cual mucho me complace, quiero puntualizar que es indispensable que se especifique previamente que éste es un nuevo proyecto de ley y que, por lo tanto, para ser tra-

tado se necesita incuestionablemente que se realice una votación para su consideración sobre tablas. Formulo esta apreciación para que esto tenga absoluto rigor institucional.

**Sr. Berhongaray.** — Así es, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Señor presidente: vamos a estar de acuerdo con el compañero senador por Santiago del Estero. Pero previamente quiero hacer una introducción, ya que ésta es una vieja aspiración del movimiento obrero que nosotros, a través de los tiempos, hemos venido planteando.

El movimiento obrero, a través de la CGT, estaba preocupado porque dentro de un gobierno constitucional no podía contar con un instrumento tan importante como una ley de asociaciones profesionales. Estábamos preocupados porque a través de los tiempos —como dije antes— siempre habíamos encontrado una respuesta en este aspecto. Esa respuesta se dio ya en 1919, hace casi setenta años, durante el primer gobierno que llegó mediante el voto popular: el de don Hipólito Yrigoyen.

En aquellos tiempos, cuando se pretendía dejar de lado una oligarquía que explotaba a los trabajadores, en su primer mensaje don Hipólito Yrigoyen nos señalaba claramente para qué servía este proyecto.

Decía: "Ha llegado la hora de incorporar a la legislación general una ley de organización gremial, lo exige así el desarrollo adquirido por el país en sus múltiples actividades. Por otra parte, las leyes de conciliación y arbitraje, y de contrato colectivo de trabajo no serán todo lo eficaces sin la existencia previa de una ley básica, como es la de asociaciones".

Quiero hacer esta introducción, señor presidente, para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto, ya que como bien lo expresaron otros señores senadores, no se trata ya del proyecto cuya iniciativa me corresponde. Y al dejar esta paternidad, quiero aclarar que lo hago en nombre de Yrigoyen y de Perón, artífices de la norma.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena.** — Señor presidente: me veo obligado a precisar los fundamentos de mi posición, que es diferente y distinta de la que se encuentra en este momento a consideración de este cuerpo.

La historia de este proyecto de asociaciones profesionales desde el advenimiento del régimen republicano, luego de la dictadura, es ya

de larga data: cuatro años han pasado. Después del fracaso del intento del Poder Ejecutivo nacional que fuera rechazado inicialmente por este Senado fueron varias las iniciativas destinadas a concretar este viejo anhelo de los trabajadores argentinos de contar con una legislación que regule su derecho a la asociación gremial.

Entre esas iniciativas estuvo la del señor senador Britos que fue motivo en este recinto de un tratamiento profundo y extenso, en el que todos los sectores vertieron sus opiniones y se llegó a un texto aprobado prácticamente por unanimidad, ya que las modificaciones introducidas luego del debate fueron aprobadas sin inconvenientes.

Este proyecto pasó a la Cámara de Diputados, que fue remisa en considerarlo. Debo referirme a una situación política gremial; el momento en que el presidente de la República estima que debe convocar para ejercer el ministerio de Trabajo de la Nación a un gremialista, el señor Carlos Alderete. Fue entonces cuando se redactaron las leyes que quedaron denominadas con el nombre de "paquete laboral". Este comprendía la aprobación del Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo, de la ley sobre convenciones colectivas, de la ley sobre procedimientos de convenciones colectivas y de esta ley de asociaciones profesionales sindicales.

Es decir, que el Poder Ejecutivo proyectó durante el ministerio de Alderete un texto que es prácticamente el mismo que aprobamos en este Senado de la Nación. El mensaje con que acompañó el presidente de la República este proyecto que regulaba el funcionamiento de las asociaciones profesionales de trabajadores, auspiciaba íntegramente la iniciativa del Senado con modificaciones que no eran sustanciales; textualmente expresaba que "el proyecto de ley sobre asociaciones sindicales de trabajadores que recientemente obtuviera la media sanción del Honorable Senado de la Nación, a punto de haberse el constituido en el principal documento de consulta para la elaboración del que ahora hace suyo y remite el Poder Ejecutivo nacional". Llegó ese proyecto a Diputados cuando ya estaba en consideración la iniciativa aprobada por el Senado. Es decir, el tratamiento parlamentario estaba cumplido de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional. En la Cámara de Diputados, sobre la base del proyecto de ley aprobado por este Senado, se sancionó un texto que, de acuerdo con lo que se usa decir en esta etapa de deformación del idioma, se llamó texto "consensuado". Así fue manifestado por los sucesivos oradores que intervinieron en el debate,

admitiendo algunas sugerencias incluidas en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Al hablar de texto "consensuado" se quería decir que todo el mundo se había puesto de acuerdo. Eso no fue verdad porque hubieron algunas disidencias expresadas por los partidos minoritarios. De cualquier modo, el justicialismo y la Unión Cívica Radical, fundamentalmente, se habían puesto de acuerdo sobre el texto y modificaron así la sanción anterior que había dado el Senado, produciendo una norma que en aquel momento se consideró definitiva porque, precisamente, se había llegado a un acuerdo político. El consenso significaba que tanto radicales como peronistas interpretaban el viejo anhelo de dotar al país de una ley de asociaciones profesionales. Para los peronistas, además, eso significaba, específicamente, la interpretación de las aspiraciones manifestadas por la Confederación General del Trabajo, por lo cual dieron esa sanción.

En consecuencia, así fue remitido al Senado para su revisión ese texto definitivo. Ahora bien, ¿qué significaba esa revisión a cargo nuestro? Sobre la base de la sanción del Senado, dicha revisión significaba que nosotros, constitucionalmente, no teníamos más caminos que los que marca el artículo 71 de nuestra Carta Magna. Es decir, o insistimos en la sanción del texto primitivo o aprobamos la sanción de la Cámara de Diputados que nos viene en revisión; constitucionalmente no podemos introducirle modificaciones. En síntesis, se aprueba un texto o el otro. Esto es lo que dice el artículo 71 de la Constitución, que no voy a leer porque todos los señores senadores lo conocen perfectamente. Esa norma no admite ninguna interpretación que desvíe lo que yo estoy afirmando en este momento.

Sé que en conversaciones de tipo político y social, digamos así, se ha mencionado que existe la posibilidad de sustituir ese texto que nos viene en revisión por otro distinto; también se dice que esta alternativa estaría avalada por la opinión de un constitucionalista radical, el doctor Vanossi. Me he tomado el trabajo de revisar íntegramente la obra constitucional del doctor Vanossi y quiero decir, para desvirtuar completamente ese comentario, que no procede de él dicha supuesta alternativa sino que proviene de otra gente que está interpretando de un modo distinto el artículo 71 de la Constitución. Reitero que no he encontrado una sola palabra del doctor Vanossi que autorice a que en estas circunstancias que se nos presentan hoy podamos hacer otra cosa que no sea votar el texto primitivo de nuestra sanción o bien la sanción de la Cámara de Diputados.

No voy a leer lo que dice ese constitucionalista, pero voy a recordar que él mismo presentó un proyecto de ley a fin de interpretar correctamente los artículos 71 y 72 de la Constitución. En esa iniciativa indicó con toda precisión que la interpretación constitucional que debe darse al artículo 71 es, precisamente, respetar la mecánica establecida por esa norma.

De manera que hoy nos encontramos con que, en lugar de tratar la sanción de la Cámara de Diputados venida en revisión, por razones del llamado consenso y por conveniencias políticas nos vemos ante la posibilidad de dejar de lado lo que reglamenta el artículo 71 de la Constitución, considerando entonces un proyecto diferente, es decir, un nuevo proyecto.

Resumiendo: lo que vino de Diputados pasó a comisión; la comisión no se expidió ni lo va a hacer, quedando congelada esa iniciativa en su seno. Entonces, se arma un nuevo proyecto, con lo cual, palmariamente, en mi opinión constitucional de este asunto, significa una violación al artículo 71 ya mencionado.

Este es mi concepto; ésta es mi interpretación que difiere con la que han dado mis compañeros de bancada, que me han autorizado para que deje a salvo mi punto de vista constitucional, porque creo que de esta manera se va a sentar un precedente que en este momento puede parecer favorable —y seguramente lo es para que el país esté dotado y las fuerzas de trabajo tengan el estatuto legítimo y legal que les corresponde para sus relaciones en esta sociedad— pero pienso ¿a qué costo estamos haciendo esto? Al costo de un futuro impredecible porque entonces este Senado estaría dispuesto a dejar de lado lo que la Constitución dice sustituyendo la mecánica del artículo 71 por otra arbitrada para satisfacer requerimientos que han sido puestos de manifiesto por el sector empresarial de la República en reuniones que hemos tenido y todos conocemos.

En definitiva, las objeciones se reducen a tres cláusulas cuya importancia a mi modo de ver es mínima, diría de mínimo "minimorum", en un latín macarrónico.

Creo que no estamos obrando de acuerdo con lo que nosotros nos hemos comprometido, que es a respetar la Constitución. Pienso —permítanme que caiga en el pequeño detalle— que son situaciones insignificantes que no entiendo por qué tenemos que admitir dejando de lado la regulación constitucional del asunto.

Se va a modificar el inciso d) del artículo 5º que se refiere a las demás medidas de acción directa que pueden tomar los gremios de trabajadores y consecuentemente el artículo 16, inciso i),

que se refiere a que el Estatuto de las Asociaciones de Trabajadores...

**Sr. Presidente.**— La Presidencia recuerda al señor senador por Jujuy que se encuentra en consideración una moción de tratamiento sobre tablas y está entrando a la consideración del proyecto.

**Sr. Martiarena.**— Tengo que dar los fundamentos de por qué me voy a oponer, fijando mi posición personal, a la moción de tratamiento sobre tablas de un proyecto, que no es lo que corresponde.

**Sr. Presidente.**— La Presidencia solicita al señor senador que se limite a la moción de tratamiento sobre tablas y no entre al tratamiento del proyecto, porque si no desvirtuaríamos el procedimiento.

**Sr. Martiarena.**— Me quiero referir al proyecto que está en la mesa, en el que se hacen modificaciones a algunos artículos.

**Sr. Presidente.**— Pero corresponde que previamente se considere la moción de tratamiento sobre tablas.

**Sr. Martiarena.**— De acuerdo, señor presidente, me voy a adecuar a esa interpretación reglamentaria.

Continúa señalando que se trata de modificaciones al tema que dejó indicado, al número de representantes de los gremios en las empresas y a la cuestión denominada de la prejudicialidad.

Me he referido a estos temas para dejar constancia de que el valor legal de esas modificaciones no justifica de ninguna manera que abandonemos los principios.

Este mismo criterio es el que se muestra en el título con que ha sido presentado a los señores senadores de la Nación esta cuestión en el boletín impreso donde figura la sanción de la Cámara de Diputados y en el que se establece que se devuelve con modificaciones el proyecto de ley que fuera pasado en revisión. Eso es lo que correspondía; es la verdadera y real situación constitucional.

Aquí se sancionó un proyecto; en la otra Cámara lo modificaron; vuelve aquí modificado y nosotros tenemos que determinar si mantenemos nuestra sanción o aceptamos las modificaciones.

Para el supuesto de que se desestime este planteo y se insista en el tratamiento del proyecto presentado en el Senado, me reservo el derecho de referirme a las normas que sufren modificaciones para demostrar precisamente esta premisa que he dejado sentada, por la que meritualmente que no vale la pena, por tres normas que regulan situaciones particulares en la disposición legal que nos apartemos de lo que estatuye la Constitución Argentina en el artículo 71.

Se ha mencionado en algún ámbito que esto lo debemos hacer porque hay un precedente, y se indica que el precedente sería el que ha creado la Cámara de Diputados de la Nación al tratar la ley de defensa nacional, la que se apartó del texto aprobado por el Senado, lo mandó a comisión, lo congeló en comisión y ha presentado un texto nuevo y diferente que nos manda para su revisión.

Creo que estamos equivocando el camino, y pienso que con este criterio se corre el riesgo de que en cualquier situación de emergencia o de intereses creados pueda alguien en algún momento invocar la inconstitucionalidad de la ley, porque se ha violado el trámite impuesto por la Constitución para el dictado de la misma.

De manera que dejo sentada mi posición, mi interpretación, y estimo que con esto creo un resguardo, no para una opinión personal arbitrada en este momento, sino un resguardo para el sentido de la legislación en cualquier instante del futuro.

**Sr. Presidente.**— Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.**— Señor presidente: intervendré muy brevemente para fundamentar el porqué de mi apoyo al tratamiento de este nuevo proyecto.

No quisiera que quede sin respuesta lo manifestado por el señor senador por Jujuy. Debo reconocer que sus fundamentos son válidos y que tornan esta cuestión por lo menos opinable. Debo también reconocer que este tema ha motivado una profunda reflexión de mi parte y que en su momento tuve serias dudas sobre si este procedimiento es válido desde el punto de vista constitucional o no.

He llegado a la conclusión, y lo voy a decir muy rápidamente, sin entrar en consideraciones de tipo constitucional, de que este procedimiento que estamos ahora utilizando no viole ningún precepto de nuestro orden jurídico fundamental. Es verdad que los artículos 71 y 72 de la Constitución establecen un procedimiento para la sanción de las leyes, pero también es cierto que el que estamos utilizando ahora no entra en colisión con estas normas constitucionales.

Creo que puedo ejemplificar el tema de forma que veamos cómo sí podemos acudir a este procedimiento. Digo: si esta Cámara o la Cámara de Diputados están facultadas para hacer cada un proyecto por su no tratamiento; es decir, si nosotros por el no tratamiento de un proyecto podemos dejarlo morir de muerte natural, ¿cuál es el obstáculo que existe en que por el tratamiento de este proyecto demos una

muerte más rápida y podamos pasar a considerarlo, evitando la prolongación de esa agonía, poniéndole fin ahora con la sanción de este nuevo proyecto? Permítaseme esta licencia al hacer la comparación de la muerte natural por el transcurso del tiempo.

Se ha invocado el artículo 101 del reglamento, que autoriza a los miembros de una comisión a presentar proyectos por unanimidad, en cuyo caso los mismos pasan directamente al orden del día. No creo que éste sea el fundamento válido que pueda cubrir todo el espectro de dudas que crea el procedimiento. Estimo que algún antecedente puede encontrarse, para que acudamos a este método, en el tratamiento de la ley de defensa en la Cámara de Diputados, la que será considerada aquí próximamente. Es importante que tengamos presente ese proyecto de ley de defensa, porque si hoy no aceptamos el procedimiento tampoco lo podremos hacer en ese caso. Es decir, me permito advertir a los señores senadores que lo que estamos resolviendo ahora va a sentar un precedente para cuando tengamos que tratar en este mismo recinto la ley de defensa.

En definitiva, creo que no hay ninguna consecuencia perjudicial desde el punto de vista práctico. Lo que importa fundamentalmente es que la Cámara no pierda su carácter de Cámara de origen. Porque aquí es donde entran a jugar los artículos 71 y 72 de la Constitución. Cuando hace algunos momentos defendíamos nuestra condición de Cámara de origen con respecto al proyecto de ley del señor senador por San Juan sobre los feriados, lo hacíamos no tanto por una cuestión de paternidad, que es un poco anecdótica, sino porque los artículos 71 y 72 de la Constitución establecen distintas consecuencias según qué Cámara es la de origen y cuál la revisora. Debemos recordar que la Cámara de origen puede insistir por simple mayoría en una sanción primitiva. En cambio, la Cámara revisora necesita para hacerlo la aprobación por dos tercios. Esta es la consecuencia práctica más importante de ser Cámara de origen o Cámara revisora.

En el caso que hoy nos convoca indudablemente la Cámara de Senadores está conservando su carácter de Cámara de origen, porque el trámite se inicia en ella a raíz del proyecto presentado por el señor senador Britos. En este caso, como este proyecto también se origina en la Cámara de Senadores, estamos conservando el carácter de Cámara de origen, y el señor senador Britos, en un acto de generosidad, no hace cuestión por la paternidad del proyecto, tal como lo manifestó hace algunos momentos.

**Sr. Mauhum.** — ¿Me permite, señor senador?

**Sr. Menem.** — Sí, señor senador.

**Sr. Mauhum.** — ¿Cuál es la Cámara de origen en el proyecto de ley de defensa?

**Sr. Menem.** — En el proyecto de ley de defensa la Cámara de origen es la de Diputados, y va a seguir conservando este carácter siempre y cuando la Cámara de Senadores acepte el tratamiento de este proyecto como si viniera en primera revisión.

En definitiva, señor presidente, admito que el tema es opinable. Es una cuestión novedosa; no encontré antecedentes parlamentarios al respecto. Pero pienso que así como en casos de duda se suele acudir a ciertos principios (*in dubio pro operario, in dubio pro reo*), aquí tenemos que pronunciarnos en favor de la validez de un procedimiento que ha sido obtenido por consenso mayoritario y que nos va a permitir llevar adelante una ley que está reclamando la clase trabajadora y que viene muy demorada y cuya sanción nos va a permitir solucionar muy rápidamente estos problemas. No nos enredemos con un procedimiento parlamentario que no está violado, y que sí nos va a permitir superar esta cuestión que se ha planteado por la demora del tratamiento de un proyecto de ley largamente esperado por la clase trabajadora y por la sociedad.

**Sr. Martiarena.** — ¿Me permite una reflexión, señor senador?

**Sr. Menem.** — Sí, señor senador.

**Sr. Martiarena.** — Precisamente, creo que la practicidad está dada en adecuar el tratamiento del proyecto a lo que establece el artículo 71 de la Constitución, porque mi proposición para ese caso es que aprobemos íntegramente y sin modificaciones la sanción de la Cámara de Diputados, con lo cual esta noche habría una ley dictada por nosotros, ya que no introduciríamos ninguna modificación al texto de Diputados. Esto se me había quedado en el tintero y explica el sentido práctico de mi posición.

**Sr. Menem.** — Lo único que podría manifestar al respecto es que ese temperamento no cuenta con consenso. En cambio, hay una aprobación prácticamente unánime del cuerpo para este segundo procedimiento, en virtud del cual nos hemos puesto de acuerdo sobre todos los temas, inclusive sobre estos tres puntos controvertidos a los cuales hace referencia el señor senador por Jujuy.

Dejo así debidamente expresadas las razones por las cuales voy a votar favorablemente por

este procedimiento consistente en tratar esto como un nuevo proyecto de ley, dejando por supuesto aclarado que ésta es la Cámara de origen y que el proyecto se inspira fundamentalmente en el que oportunamente presentara el señor senador por San Luis.

**Sr. Juárez.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Juárez.** — Señor presidente: el Honorable Senado de la Nación tiene en este momento a su consideración un tema aparentemente práctico, aparentemente viable para satisfacer comunes aspiraciones que motivan esta deliberación y que han originado un acuerdo de ambas bancadas.

Pero más allá de nuestras mejores intenciones, debemos ser plenamente conscientes —los hombres de derecho, especialmente— de que en este momento el Senado está por inaugurar una legislación nueva. Por eso realmente hago el encomio del rigorismo hermenéutico constitucional al que se apegó fuertemente el senador por Jujuy, que me hace meditar mucho sobre la determinación que adopté para apoyar este tratamiento sobre tablas.

Se trata, nada más ni nada menos, en el fondo y en la forma, de saber si violamos la Constitución de la Nación o no. Esto es así en el fondo. Es decir que el problema es delicado —yo diría grave—, desde el punto de vista institucional, por más que aparentemente se diluya la cuestión en la modulación liviana de algunas disidencias también livianas, en algún articulillo, que es lo que motiva estas consideraciones.

Como hombre de derecho, hubiese deseado que se cumpliera acabadamente con el trámite que marca la Constitución Nacional y que, como dice el señor senador Martiarena, hubiéramos nosotros arribado a la solución práctica e incuestionable desde este punto de vista en el sentido de aprobar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Pero lamentablemente, han pasado casi tres meses y estas aparentes minucias no han resultado ser tales desde el momento en que ambas bancadas no han podido ponerse de acuerdo sobre este tema, fundamentalmente, en el fondo.

Así es como esta noche nos abocamos a la sanción de una legislación novedosa, original. No se trata de entrar en colisión con las cláusulas que la Constitución impone reglamentando el trámite parlamentario, pero sí diría que en lugar de una colisión se trata de considerar la elusión de las prescripciones taxativas de nuestra Carta Fundamental. Simplemente, titila en

mi espíritu jurídico la intranquilidad de saber si en el fondo esta elusión puede representar una colisión o no. Creo que en este trámite inédito lo que tratamos de hacer no es enfrentár la disposición constitucional sino soslayarla, que es una cosa distinta, sin herirla o vulnerarla.

Muy bien dijo el señor senador Menem que si una comisión puede dejar sosegado un asunto por no considerarlo, podría interpretarse también que se estaría en condiciones de darle vida a un nuevo proyecto que lo sustituya.

Pero el tema es de mucha trascendencia institucional. Por eso vuelvo a decir que pongo de relieve esta preocupación institucional e institucionalizadora que campea en la formación jurídica del señor senador Martiarena.

Pero esta elusión que pretendemos hacer debe ir más allá de la practicidad —creo yo—, para fundarla jurídicamente con sustento y seriedad.

Y para fundarla me referiré, en este momento, a que ha venido a mi memoria un viejo adagio latino que puede inspirar sabiamente las motivaciones de la justicia, de la justicia con mayúsculas. Este adagio que aprendí en mi curso de derecho romano dice así: *Salus populi suprema lex est*; significa que la salud del pueblo es la suprema ley, la ley de las leyes. La salud del pueblo es la ley y es el espíritu que a veces inspira las decisiones del más alto tribunal argentino, de la Corte Suprema de Justicia, para brindar interpretaciones elásticas a los principios rígidos de la Constitución Nacional.

Y hay otro proverbio que no es latino y que viene al caso repetir. Dice así: "La letra mata, el espíritu vindica". Y cierto es que aquí de lo que se trata es nada más y nada menos que de la salud del pueblo, la *salus populi*. Se trata de la salud del pueblo representado por esa clase trabajadora a la que hemos prometido reivindicar y defender, la que está en este momento en zozobra requiriendo imperiosamente esta sanción para poder articularse orgánicamente.

Hay cientos de sindicatos, que en este momento carecen de este dispositivo para organizarse, de acuerdo con la voluntad de sus afiliados.

Quiero puntualizar muy acabadamente el fundamento claro y preciso de una votación que avisoro favorable al tratamiento sobre tablas. La quiero yo y deseo, como hombre de derecho que soy —en alguna oportunidad he presidido la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Senado—, no incurrir en elasticidades que se hagan costumbre y terminen por deformar la Constitución de la Nación.

Por ello deseo enfatizar que, a mi juicio, éste es un caso de verdadera y real emergencia, en donde está comprometida esa salud del pueblo, y que pretendo que esto no sirva de precedente fácil para algunos acuerdos igualmente fáciles que puedan surgir en el futuro, tratando nuevamente, y en forma reiterada, de eludir las prescripciones constitucionales.

Yo hubiese deseado que este Senado no hubiera tenido la necesidad de recurrir a este acuerdo consensual, porque estaríamos en paz con nuestro sentido de respeto a las cláusulas constitucionales. Pero hay una razón muy de fondo que impone esta interpretación, fundamentada en el proverbio y en el adagio que acabo de enunciar. No es, entonces, que nosotros convengamos en tratar este asunto sobre tablas dejando de lado el proyecto originario y su modificación en Diputados. No podemos sentar el precedente funesto de nuestra ligereza para tratar las cláusulas constitucionales que nos rigen, como sería si lo fundáramos nada más que en esta especie de conveniente consenso para considerar un tema que es trascendental y que hoy explica, sostiene y da razón a este tratamiento. Pero que no sirva este precedente que hoy por primera vez en su historia parlamentaria va a sentar el Senado para crear una costumbre que pueda llegar a trastornar el sistema mismo de la formación de las leyes.

Por eso digo que hoy esto sí está justificado ante la imposibilidad de sacar adelante en la forma normal que prescribe la Constitución la sanción de esta ley. Hay una clase trabajadora que no puede esperar más, que no puede esperar ser sumida en la incertidumbre de una nueva discusión en Diputados. Por ello, en este momento el consenso es el fundamento sólido de un principio jurídico, que es el que da la razón a la aplicación de la ley y de la Constitución misma. ¿Acaso nosotros, como hombres de derecho, no hemos visto muchas veces la interpretación que de la Constitución y sus cláusulas hace el más alto tribunal de la Nación, dándoles un sentido flexible, elástico y en ocasiones imprevisibles? Hoy es el Senado quien va a hacer de intérprete de esta rigidez para darle elasticidad en nombre de la salud del pueblo y de una urgencia realmente justificada, fundamental e ineludible, diría yo.

Con estas palabras quiero justificar la sana inquietud institucional del senador Martiarena y al mismo tiempo fundamentar este trámite excepcionalísimo de excepción. Ojalá solamente en los casos en que está en juego la salud del pueblo tengamos nosotros que adoptar estos criterios que soslayan las cláusulas de la Constitución Nacional.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Bravo Herrera.** — Las razones dadas por el señor senador Martiarena me han convencido. Por lo tanto, voy a pedir que se tenga por retirada mi firma del proyecto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Brasesco.** — Creo necesario hacer algunas reflexiones, comenzando por la coincidencia total con los argumentos que ha dado el señor senador Menem.

Pero yo asumo mi responsabilidad porque he sido uno de los senadores que han trabajado afanosamente por tratar de crear armonía social en el país. Creo que el bien jurídico y político protegido en este proyecto de ley que va a tratar el Senado es la armonía social. Fue preocupación en los inicios, allá lejos y hace tiempo, de estas conversaciones del que habla y del señor senador Menem, el aspecto constitucional. Cuando el senador que habla invocó la opinión del doctor Vanossi, no lo hizo porque la leyó, sino porque el doctor Vanossi existe, vive y es diputado nacional. El diputado Vanossi no solamente opinó personalmente como legislador y como hombre de consulta de quienes recurrimos a él para abrirnos camino. Teniendo en cuenta la seriedad y honradez de nuestras proposiciones aun cuando unos pudiéramos estar equivocados y otros acertados, junto con diversos juristas, él también ya opinó sobre la viabilidad de este procedimiento en un hecho trascendente de la política argentina como es el proyecto de defensa nacional. A través de la Mesa de Consenso, con la participación de casi todas las fuerzas políticas del país, con sus coincidencias y sus discrepancias, se llegó a la conclusión de que podía presentarse un nuevo proyecto en la Cámara de origen, la Cámara de Diputados, para tratar la ley de Defensa Nacional que nosotros tenemos que considerar cuando corresponda, aún teniendo en trámite un proyecto con sanción de Diputados y modificado por el Senado.

Estoy convencido, como abogado y como político, de que no violamos el capítulo quinto de la Constitución Nacional. Pero voy más allá de ello.

Dijo bien el señor senador Juárez cuando expresó que estamos transitando nuevos caminos. Yo recuerdo la historia de mi país, que sirve en este momento para ayudar a defender esta posición de la cual estoy convencido que es correcta.

Pienso en los filósofos y en los doctos que tuvimos en Buenos Aires desde 1820 hasta 1853 y me vienen también a la mente los López, los Quiroga, los Ramírez que estaban en las Provincias, y en los demás, los indoctos de mi país, que tuvieron la capacidad, con errores de ortografía, de hacer constituciones precarias, dentro del sistema representativo republicano y federal, en las distintas provincias creando las bases fundamentales de nuestra organización política.

Recuerdo también lo que me decían mis grandes profesores de derecho en el sentido de que el derecho nace a través de los hechos trascendentes cuando la sociedad lo necesita. Y la Argentina está atravesando en este momento, nos guste o no nos guste, por un proceso de transición.

Estamos en un proceso de consolidación de un sistema representativo, republicano y federal con todos los errores, los defectos, los encontronazos y los enfrentamientos. Estábamos asistiendo históricamente a un nuevo andar del país y se nos presentó esto. Un día —y es cierto lo que dice el señor senador Martiarena— en el Poder Ejecutivo se reunieron dirigentes gremiales con un ministro que pertenecía al Partido Justicialista, que era secretario de una federación de trabajadores avalada por la Confederación General del Trabajo, y se hizo un proyecto. La historia dirá si estuvo acertado o no.

El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados. En más de una oportunidad fui con el senador Britos a ver qué pasaba y a veces a discutir con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Estaba el proyecto del senador Britos, el cual, por otra parte, cuando se trató en la Cámara de Senadores, se aprobó de acuerdo con el dictamen de la comisión en mayoría. En ese momento no hubo dictamen unánime, sino uno de mayoría y otro de minoría, y prácticamente no se discutió en particular porque los radicales habíamos decidido ajustarnos a nuestro proyecto que figuraba en el dictamen de minoría, que obra en el Diario de Sesiones de esa fecha.

Se trataron varios proyectos de ley con media sanción, algunos de los cuales nosotros los hemos aprobado con modificaciones y otros los estamos estudiando porque el consenso de la Cámara de Diputados, el consenso de las fuerzas políticas e inclusive el que presta la Confederación General del Trabajo en esa oportunidad no satisfacen las necesidades de este momento histórico y por eso es necesario estudiarlo.

Recuerdo, y disculpen si no es la oportunidad, que son las razones políticas, sociales y de hecho históricas, las que van a fundar la creación de un procedimiento, también histórico, que le dará la jerarquía de excepcional, porque excepcional es el momento que vivimos.

En este país del que todos formamos parte nos encontramos un día con que lo sancionado por Senadores y revisado por Diputados en el tema asociaciones sindicales tenía disidencias en tres puntos fundamentales, algunas provenientes de sectores empresarios y otras de sectores políticos, pero que en última instancia nos enfrentaban. Por eso nos encontrábamos en una encrucijada y queríamos salir de ese pantano; en última instancia, esas disidencias reflejaban el pensamiento de una sociedad conflictuada. Buscábamos un acuerdo respecto de normas en las que filosóficamente ninguno coincidía, ni los justicialistas con su criterio, ni la CGT con sus pensamientos ni los radicales con nuestra doctrina, ni los liberales con sus concepciones. Pero buscábamos los mínimos comunes denominadores, para encontrar la posibilidad de trabajar en paz y con tranquilidad, y poder discutir en el futuro nuestras posiciones ideológicas, políticas, sociales o dogmáticas relacionadas con nuestra propia filosofía y que nos dan las características distintivas de las tendencias políticas en el quehacer argentino, en la actualidad.

El señor senador representante del Movimiento Popular Neuquino, don Elías Sapag, tenía una gran preocupación; habló con todos nosotros y planteó la necesidad de encontrar coincidencias y puntos comunes. Así comenzamos. Y esto fue un largo camino conflictuado; nos enojamos más de una vez. En esa sesión debatimos un problema —consecuencia de este peregrinaje— y nos volvimos a enojar. Este es sólo un eslabón del largo trajinar de este proyecto.

Durante este tiempo conversamos, estudiamos y meditamos mucho; vino el ministro de Trabajo Tonelli a informarnos. Por eso se buscó el consenso en la ley, en la Constitución y en la armonía social. Yo hablé con líderes políticos de nuestras máximas agrupaciones. El jueves pasado me entrevisté con el doctor Antonio Cafiero, presidente del Partido Justicialista, para solicitarle simplemente que nos ayudara a ponernos de acuerdo respecto de este tema; también conversé con el presidente de mi partido, el doctor Alfonsín, manifestándole igual inquietud; y hablé con el ministro de Trabajo para que nos comprendiera. Y hace tiempo lo hice con los hombres de la Confederación Ge-

neral del Trabajo y también con senadores y diputados —incluyendo a los de otras bancadas— respecto de la necesidad de encontrar puntos de coincidencia.

**Sr. Juárez.** — ¿Me permite una pequeña aclaración, señor senador?

**Sr. Brasesco.** — Sí, señor senador.

**Sr. Juárez.** — Para conocimiento de los integrantes de este cuerpo deseo informarles que mi partido me ha nominado e investido como órgano de relación con el Senado de la Nación.

**Sr. Brasesco.** — Le agradezco la aclaración, señor senador.

Simplemente narro todos estos acontecimientos para indicar que hemos transitado por el contacto político, por el contacto gremial y hemos mirado la Constitución. Frente a la excepcionalidad de las circunstancias y a la necesidad de consolidar la armonía social, hemos tenido la convicción, junto a los hombres de derecho que nos han brindado su consejo, y también la íntima satisfacción de saber que estamos caminando dentro de los carriles de la Constitución.

Aquí puede haber errores, defectos y omisiones, pero se ha trabajado con la Constitución y se la quiere cumplir y, como bien lo ha dicho el doctor Menem, se considera que no hay ninguna violación de su texto.

Por supuesto que toda interpretación jurídica de una norma constitucional merece ser respetada; me refiero principalmente a aquellas opiniones que no puedan coincidir con la nuestra. Pero también tengo la plena seguridad de que así lo han pensado los miembros de las bancadas del Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical y de los otros partidos representados en la Cámara de Diputados cuando ellos, en conjunto, han dado su aval tratando la ley de defensa nacional, que es el antecedente inmediato del caso que debatimos.

Con estas pocas palabras quiero simplemente dejar sentado que consideramos, en forma clara y terminante, que el tratamiento de este proyecto no vulnera desde ningún punto de vista las normas constitucionales y que por ello es procedente.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: voy a ser muy breve, pero no quiero dejar pasar por alto algunas preocupaciones que entiendo legítimas.

Felicito al señor senador por Salta por su preocupación, que sin duda alguna es sincera. También respeto otras expresiones que aquí se han

dado mostrando preocupación sobre la licitud constitucional que pudiera existir o no en la consideración sobre tablas de este nuevo proyecto de ley.

De ninguna manera quiero dejar de expresar lo que nosotros entendemos como nuestra verdad sobre este asunto. Debemos comenzar por admitir que en materia de Constitución, que es la ley de las leyes, sucede en cuanto a su interpretación lo que también se da con leyes o normas de carácter inferior. La Constitución, que debe ser sintética para abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles, puede ser materia de interpretación distinta ante circunstancias especiales no previstas.

Hemos visto que tanto en nuestro país como en los Estados Unidos de Norteamérica, al cambiar la composición de la Corte Suprema, la Constitución es interpretada de manera diferente. Hay un viejo fallo de la Corte norteamericana que dice que la Constitución es lo que los jueces dicen que es.

Creo, señor presidente, que es conveniente leer el artículo 71 de la Constitución, que aquí se ha invocado, señalándose su violación en caso de proceder con la metodología propuesta. Yo no creo que vayamos a violarlo, y esto no significa adelantar ninguna opinión sobre el fondo del asunto. Quiero sí decir que si lo leemos con atención —por lo menos ésta es mi opinión—, veremos que no estamos, con este nuevo proyecto que hoy se va a considerar, violando de manera alguna el espíritu de la Constitución nacional.

Me voy a permitir leer, entonces, el encabezamiento del artículo 71. Dice así: "Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año".

He escuchado con atención el ejemplo que puso el señor senador Menem, y me parece muy convincente porque los proyectos de ley pueden tratar de un asunto determinado, que es lo que ha ocurrido aquí. Pero lo que la Constitución veda, lo que la Constitución prescribe, si leemos literalmente este artículo 71, es que no puede tratarse un proyecto de ley desechado totalmente. Pero acá tenemos un proyecto de ley distinto.

Si la Constitución, en lugar de decir "...ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras..." dijera que ningún asunto desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año, en este caso sí —a mi juicio— nos encontraríamos con la imposibilidad constitucional de volver a tratarlo.

Pero no es éste el caso. Acá hay proyectos de ley que, aunque se refieren al mismo asunto, son distintos. Esto es, simplemente, lo que nos está ocurriendo esta noche. Podríamos no haber tratado ese proyecto de ley pero no está vedado ni está restringida la capacidad legisferante que tiene nuestra Cámara. Al admitir de hecho la suspensión o el no tratamiento del otro proyecto que está cuestionado no estamos de ninguna manera violando la Constitución porque tratamos ese mismo asunto en otro proyecto de ley.

Por lo tanto, según mi juicio, no estamos violando la Constitución; estamos ejerciendo un derecho legítimo, el de legislar en tiempo y modo oportunos de acuerdo con lo que nos dicta nuestra propia conciencia.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por San Luis.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Macris).** — (*Lee*).

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

#### TITULO PRELIMINAR

##### De la tutela de la libertad sindical

**Artículo 1º** — La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales.

**Art. 2º** — Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta ley.

**Art. 3º** — Entiéndese por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador.

**Art. 4º** — Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales:

- Constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales;
- Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafilarse;
- Reunirse y desarrollar actividades sindicales;
- Peticionar ante las autoridades y los empleadores;
- Participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos.

**Art. 5º** — Las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos:

- Determinar su nombre, no pudiendo utilizar los ya adoptados ni aquellos que pudieran inducir a error o confusión;

b) Determinar su objeto, ámbito de representación personal y de actuación territorial;

c) Adoptar el tipo de organización que estimen apropiado, aprobar sus estatutos y constituir asociaciones de grado superior, afiliarse a las ya constituidas o desafilarse;

d) Formular su programa de acción, y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar demás medidas legítimas de acción sindical.

**Art. 6º** — Los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación vigente.

**Art. 7º** — Las asociaciones sindicales no podrán establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o sexo, debiendo abstenerse de dar un trato discriminatorio a los afiliados.

Lo dispuesto regirá también respecto de la relación entre una asociación de grado superior y otra de grado inferior.

**Art. 8º** — Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Sus estatutos deberán garantizar:

- Una fluida comunicación entre los órganos internos de la asociación y sus afiliados;
- Que los delegados a los órganos deliberativos obren con mandato de sus representados y les informen luego, de su gestión;
- La efectiva participación de los afiliados en la vida de la asociación, garantizando la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales;
- La representación de las minorías en los cuerpos deliberativos.

**Art. 9º** — Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros.

Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales o convencionales.

#### I. — De los tipos de asociaciones sindicales

**Art. 10.** — Se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por:

- Trabajadores de una misma actividad o actividades afines;
- Trabajadores del mismo oficio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en actividades distintas;
- Trabajadores que presten servicios en una misma empresa.

Art. 11. — Las asociaciones sindicales pueden asumir algunas de las siguientes formas:

- a) Sindicatos o uniones;
- b) Federaciones, cuando agrupen asociaciones de primer grado;
- c) Confederaciones, cuando agrupen a las asociaciones contempladas en los incisos que preceden a éste.

## II. — De la afiliación y desafiliación

Art. 12. — Las asociaciones sindicales deberán admitir la libre afiliación, de acuerdo a esta ley y a sus estatutos, los que deberán conformarse a la misma.

Art. 13. — Las personas mayores de catorce años, sin necesidad de autorización, podrán afiliarse.

Art. 14. — En caso de jubilación, accidente, enfermedad, invalidez, desocupación o servicio militar, los afiliados no perderán por esas circunstancias el derecho de pertenecer a la asociación respectiva, pero gozarán de los derechos y estarán sujetos a las obligaciones que el estatuto establezca.

Art. 15. — El trabajador que dejare de pertenecer a una asociación sindical, no tendrá derecho al reintegro de las cuotas o aportes abonados. Lo dispuesto será aplicable a las relaciones entre asociaciones de diverso grado.

## III. — De los estatutos

Art. 16. — Los estatutos deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 8º y contener:

- a) Denominación, domicilio, objeto y zona de actuación;
- b) Actividad, oficio, profesión o categoría de los trabajadores que represente;
- c) Derechos y obligaciones de los afiliados, requisitos para su admisión y procedimiento para su separación que garanticen el derecho de defensa;
- d) Determinación de las autoridades y especificación de sus funciones con indicación de las que ejerzan su representación legal, duración de los mandatos, recaudos para su revocación y procedimientos para la designación y reemplazos de los directivos e integrantes de los congresos;
- e) Modo de constitución, administración y control del patrimonio social y su destino en caso de disolución, y régimen de cotizaciones de sus afiliados y contribuciones;
- f) Epoca y forma de presentación, aprobación y publicación de memorias y balances; órganos para su revisión y fiscalización;
- g) Régimen electoral que asegure la democracia interna de acuerdo con los principios de la presente ley, no pudiendo contener como exigencia para presentar listas de candidatos a órganos asociativos, avals que superen el tres por ciento (3 %) de sus afiliados;

h) Régimen de convocatoria y funcionamiento de asambleas y congresos;

i) Procedimiento para disponer medidas legítimas de acción sindical;

j) Procedimiento para la modificación de los estatutos y disolución de la asociación.

## IV. — Dirección y administración

Art. 17. — La dirección y administración serán ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de cinco (5) miembros, elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados o delegados congresales mediante el voto directo y secreto.

Los mandatos no podrán exceder de cuatro (4) años, teniendo derecho a ser reelegidos.

Art. 18. — Para integrar los órganos directivos, se requerirá:

- a) Mayoría de edad;
- b) No tener inhabilitaciones civiles ni penales;
- c) Estar afiliado, tener dos (2) años de antigüedad en la afiliación y encontrarse desempeñando la actividad durante dos (2) años.

El setenta y cinco por ciento (75 %) de los cargos directivos y representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos argentinos, el titular del cargo de mayor jerarquía y su reemplazo estatutario deberán ser ciudadanos argentinos.

## V. — De las asambleas o congresos

Art. 19. — Las asambleas y congresos deberán reunirse:

- a) En sesión ordinaria anualmente;
- b) En sesión extraordinaria, cuando los convoque el órgano directivo de la asociación, por propia decisión o a solicitud del número de afiliados o delegados congresales que fije el estatuto, el que no podrá ser superior al quince por ciento (15 %) en asamblea de afiliados y al treinta y tres por ciento (33 %) en asamblea de delegados congresales.

Art. 20. — Será privativo de las asambleas o congresos:

- a) Fijar criterios generales de actuación;
- b) Considerar los anteproyectos de convenciones colectivas de trabajo;
- c) Aprobar y modificar los estatutos, memorias y balances; la fusión con otras asociaciones, afiliación o desafiliación a asociaciones, nacionales o internacionales;
- d) Dar mandato a los delegados a congresos de asociaciones de grado superior y recibir el informe de su desempeño;
- e) Fijar el monto de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados.

## VI. — De la inscripción

Art. 21. — Las asociaciones presentarán ante la autoridad administrativa del trabajo solicitud de inscripción haciendo constar:

- a) Nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su fundación;
- b) Lista de afiliados;
- c) Nómina y nacionalidad de los integrantes de su organismo directivo;
- d) Estatutos.

Art. 22. — Cumplidos los recaudos del artículo anterior, la autoridad administrativa del trabajo, dentro de los noventa (90) días de presentada la solicitud, dispondrá la inscripción en el registro especial y la publicación, sin cargo, de la resolución que autorice la inscripción y extracto de los estatutos en el Boletín Oficial.

## VII. — De los derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales

Art. 23. — La asociación, a partir de su inscripción, adquirirá personería jurídica y tendrá los siguientes derechos:

- a) Peticionar y representar, a solicitud de parte, los intereses individuales de sus afiliados;
- b) Representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en la misma actividad o categoría asociación con personería gremial,
- c) Promover:
  - 1º La formación de sociedades cooperativas y mutuales,
  - 2º El perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad social.
  - 3º La educación general y la formación profesional de los trabajadores;
- d) Imponer cotizaciones a sus afiliados;
- e) Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa.

Art. 24. — Las asociaciones sindicales están obligadas a remitir o comunicar a la autoridad administrativa del trabajo:

- a) Los estatutos y sus modificaciones a los efectos del control de la legalidad;
- b) La integración de los órganos directivos y sus modificaciones;
- c) Dentro de los ciento veinte (120) días de cerrado el ejercicio, copia autenticada de la memoria, balance y nómina de afiliados;
- d) La convocatoria a elecciones para la renovación de sus órganos en los plazos estatutarios;
- e) Los libros de contabilidad y registros de afiliados a efectos de su rubricación.

## VIII. — De las asociaciones sindicales con personería gremial

Art. 25. — La asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa, obtendrá personería gremial, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

- a) Se encuentre inscrita de acuerdo a lo prescripto en esa ley y haya actuado durante un período no menor de seis (6) meses;
- b) Afilie a más del veinte por ciento (20 %) de los trabajadores que intente representar.

La calificación de más representativa se atribuirá a la asociación que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes, sobre la cantidad promedio de trabajadores que intente representar.

Los promedios se determinarán sobre los seis (6) meses anteriores a la solicitud.

Al reconocerse personería gremial, la autoridad administrativa del trabajo o judicial, deberá precisar el ámbito de representación personal y territorial. Estos no excederán de los establecidos en los estatutos, pero podrán ser reducidos si existiere superposición con otra asociación sindical.

Cuando los ámbitos pretendidos se superpongan con los de otra asociación sindical con personería gremial, no podrá reconocerse a la peticionante la amplitud de representación, sin antes dar intervención a la asociación afectada y proceder al cotejo necesario para determinar cuál es la más representativa conforme al procedimiento del artículo 28. La omisión de los recaudos indicados determinará la nulidad del acto administrativo o judicial.

Art. 26. — Cumplidos los recaudos la autoridad administrativa del trabajo dictará resolución dentro de los noventa (90) días.

Art. 27. — Otorgada la personería gremial se inscribirá la asociación en el registro que prevé esta ley, publicándose en el Boletín Oficial, sin cargo, la resolución administrativa y los estatutos.

Art. 28. — En caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con personería gremial, sólo podrá concederse igual personería a otra asociación, para actuar en la misma zona y actividad o categoría, en tanto que la cantidad de afiliados cotizantes de la peticionante, durante un período mínimo y continuado de seis (6) meses anteriores a su presentación, fuere considerablemente superior a la de la asociación con personería preexistente.

Presentado el requerimiento del mismo se dará traslado a la asociación con personería gremial por el término de veinte (20) días, a fin de que ejerza su defensa y ofrezca pruebas.

De la contestación se dará traslado por cinco (5) días a la peticionante. Las pruebas se sustanciarán con el control de ambas asociaciones.

Cuando se resolviera otorgar la personería a la solicitante, la que la poseía continuará como inscrita.

La personería peticionada se acordará sin necesidad del trámite previsto en este artículo, cuando mediere

conformidad expresa del máximo órgano deliberativo de la asociación que la poseía.

Art. 29. — Sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa, cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión.

Art. 30. — Cuando la asociación sindical de trabajadores con personería gremial invista la forma de unión, asociación o sindicato de actividad y la peticionante hubiera adoptado la forma de sindicato de oficio, profesión o categoría, la personería podrá concedérsele si existieran intereses sindicales diferenciados como para justificar una representación específica y se cumplieren los requisitos exigidos por el artículo 25, y siempre que la unión o sindicato preexistente no comprenda en su personería la representación de dichos trabajadores.

Art. 31. — Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial:

- a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores;
- b) Participar en instituciones de planificación y control de conformidad con lo que dispongan las normas respectivas;
- c) Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social;
- d) Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores;
- e) Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las cooperativas y mutualidades;
- f) Administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar en la administración de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo.

#### IX. — De las federaciones y confederaciones

Art. 32. — Las federaciones y confederaciones más representativas adquirirán personería gremial en las condiciones del artículo 25.

Art. 33. — Se considerarán federaciones más representativas, las que estén integradas por asociaciones de primer grado que afilien a la mayor cantidad de los trabajadores cotizantes comprendidos en su ámbito.

Se considerarán confederaciones más representativas las que afilien a entidades con personería gremial que cuenten con la mayor cantidad de trabajadores cotizantes.

Art. 34. — Las federaciones con personería gremial podrán ejercer los derechos que la presente ley acuerda a las asociaciones de primer grado con personería gremial, con las limitaciones que en relación a los respectivos sindicatos y federaciones establezcan los estatutos de las mismas.

Por su parte, las asociaciones de segundo y tercer grado podrán representar a las entidades de grado inferior adheridas a ellas, en toda tramitación de índole administrativa, pudiendo a tal efecto deducir y proseguir los

recursos que fuese conveniente interponer y adoptar las medidas que hubiere menester para la mejor defensa de los derechos de las mismas.

Art. 35. — Las federaciones con personería gremial podrán asumir la representación de los trabajadores de la actividad o categoría por ellas representadas, en aquellas zonas o empresas donde no actuare una asociación sindical de primer grado con personería gremial.

Art. 36. — El máximo órgano deliberativo de las asociaciones sindicales de grado superior podrá disponer la intervención de las de grado inferior sólo cuando los estatutos consagren esta facultad y por las causas que dichos estatutos determinen, garantizando el debido proceso. Esta resolución será recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

#### X. — Del patrimonio de las asociaciones sindicales

Art. 37. — El patrimonio de las asociaciones sindicales de trabajadores estará constituido por:

- a) Las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y las contribuciones de solidaridad que se pacten en los términos de la ley de convenciones colectivas;
- b) Los bienes adquiridos y sus frutos;
- c) Las donaciones, legados, aportes y recursos no prohibidos por esta ley.

Art. 38. — Los empleadores estarán obligados a actuar como "agentes de retención" de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial.

Para que la obligación indicada sea exigible, deberá mediar una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará a solicitud de la asociación sindical interesada. El ministerio citado deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días de recibida la misma. Si así no lo hiciera, se tendrá por tácitamente dispuesta la retención.

El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como "agente de retención", o —en su caso— de efectuar en tiempo propio el pago de lo retenido, tornará a aquél en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de pleno derecho.

Art. 39. — Los actos y bienes de las asociaciones sindicales con personería gremial y destinados al ejercicio específico de las funciones propias previstas en los artículos 5 y 23, estarán exentos de toda tasa, gravamen, contribución o impuesto. La exención es automática y por la sola obtención de dicha personería gremial.

El Poder Ejecutivo nacional gestionará con los gobiernos provinciales y por su intermedio de las municipalidades, que recepten en su régimen fiscal, el principio admitido en este artículo.

#### XI — De la representación sindical en la empresa

Art. 40. — Los delegados del personal, las comisiones internas y organismos similares, ejercerán en los lugares

de trabajo y según el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados la siguiente representación:

- a) De los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa del trabajo cuando ésta actúe de oficio en los sitios mencionados y ante la asociación sindical;
- b) De la asociación sindical ante el empleador y el trabajador.

Art. 41. — Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere:

- a) Estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por ésta, en el lugar donde se presten los servicios o con relación al cual esté afectado y en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer. La autoridad de aplicación podrá autorizar, a pedido de la asociación sindical, la celebración en lugar y horas distintos, cuando existieren circunstancias atendibles que lo justifiquen.

Quando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el representante, no existiera una asociación sindical con personería gremial, la función podrá ser cumplida por afiliados a una simplemente inscrita.

En todos los casos se deberá contar con una antigüedad mínima en la afiliación de un (1) año;

- b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo y revistar al servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección.

En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá contar con una antigüedad mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando por la índole de la actividad en las que presten servicios los trabajadores a representar, la relación laboral comience y termine con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación de servicio para el que fueron contratados o cuando el vínculo configure un contrato de trabajo de temporada.

Art. 42. — El mandato de los delegados no podrá exceder de dos (2) años y podrá ser revocado mediante asamblea de sus mandantes convocada por el órgano directivo de la asociación sindical, por propia decisión o a petición del diez por ciento (10 %) del total de los representados. Asimismo, en el caso que lo prevean los estatutos el mandato de los delegados podrá ser revocado por determinación votada por los dos tercios de la asamblea o del congreso de la asociación sindical. El delegado cuestionado deberá tener la posibilidad cierta de ejercitar su defensa.

Art. 43. — Quienes ejerzan las funciones a que se refiere el artículo 40 de esta ley, tendrán derecho a:

- a) Verificar la aplicación de las normas legales o convencionales, pudiendo participar en las ins-

pecciones que disponga la autoridad administrativa del trabajo;

- b) Reunirse periódicamente con el empleador o su representante;
- c) Presentar ante los empleadores o sus representantes las reclamaciones de los trabajadores en cuyo nombre actúen, previa autorización de la asociación sindical respectiva.

Art. 44. — Sin perjuicio de lo acordado en convenciones colectivas de trabajo, los empleadores estarán obligados a:

- a) Facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los delegados del personal en la medida en que, habida cuenta de la cantidad de trabajadores ocupados y la modalidad de la prestación de los servicios, las características del establecimiento lo tornen necesario;
- b) Concretar las reuniones periódicas con esos delegados asistiendo personalmente o haciéndose representar;
- c) Conceder a cada uno de los delegados del personal, para el ejercicio de sus funciones, un crédito de horas mensuales retribuidas de conformidad con lo que se disponga en la convención colectiva aplicable.

Art. 45. — A falta de normas en las convenciones colectivas o en otros acuerdos, el número mínimo de trabajadores que representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será:

- a) De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante;
- b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes;
- c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) representante más cada cien (100) trabajadores, que excedan de cien (100) a los que deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior.

En los establecimientos que tengan más de un turno de trabajo habrá un (1) delegado por turno como mínimo.

Quando la representación sindical esté compuesta por tres o más trabajadores, funcionará como cuerpo colegiado.

Sus decisiones se adoptarán en la forma que determinen los estatutos.

Art. 46. — La reglamentación de lo relativo a los delegados del personal deberá posibilitar una adecuada tutela de los intereses y derechos de los trabajadores teniendo en cuenta la diversidad de sectores, turnos y demás circunstancias de hecho que hagan a la organización de la explotación o del servicio.

## XII. — De la tutela sindical

**Art. 47.** — Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento sumarísimo establecido en el artículo 498 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical.

**Art. 48.** — Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos, dejarán de prestar servicios, tendrán derecho a gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de un (1) año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido.

El tiempo de desempeño de dichas funciones, será considerado período de trabajo a todos los efectos, excepto para determinar promedios de remuneraciones.

Los representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de sus mandatos y hasta un año más, salvo que mediare justa causa.

**Art. 49.** — Para que surta efecto la garantía antes establecida se deberán observar los siguientes requisitos:

- a) Que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales;
- b) Que haya sido comunicada al empleador. La comunicación se probará mediante telegrama o carta documento u otra forma escrita.

**Art. 50.** — A partir de su postulación para un cargo de representación sindical, cualquiera sea dicha representación, el trabajador no podrá ser despedido, suspendido sin justa causa, ni modificadas sus condiciones de trabajo, por el término de seis (6) meses. Esta protección cesará para aquellos trabajadores cuya postulación no hubiera sido oficializada según el procedimiento electoral aplicable y desde el momento de determinarse definitivamente dicha falta de oficialización. La asociación sindical deberá comunicar al empleador el nombre de los postulantes; lo propio podrán hacer los candidatos.

**Art. 51.** — La estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o de suspensión general de las tareas del mismo. Cuando no se trate de una suspensión general de actividades, pero se proceda a reducir personal por vía de suspensiones o despidos y deba aten-

derse al orden de antigüedad, se excluirá para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la estabilidad instituida en esta ley.

**Art. 52.** — Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser despedidos, suspendidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme el procedimiento establecido en el artículo 47. El juez o tribunal interviniente, a pedido del empleador, dentro del plazo de cinco (5) días podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiese ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa.

La violación por parte del empleador de las garantías establecidas en los artículos citados en el párrafo anterior, dará derecho al afectado a demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación en su puesto, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo.

Si se decidiere la reinstalación, el juez podrá aplicar al empleador que no cumpliera con la decisión firme, las disposiciones del artículo 666 bis del Código Civil, durante el período de vigencia de su estabilidad.

El trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo, podrá optar por considerar extinguido el vínculo laboral en virtud de la decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir, además de indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior.

Si el trabajador fuese un candidato no electo tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún no agotado, el importe de un año más de remuneraciones.

La promoción de las acciones por reinstalación o por restablecimiento de las condiciones de trabajo a las que refieren los párrafos anteriores interrumpe la prescripción de las acciones por cobro de indemnización y salarios caídos allí previstas. El curso de la prescripción comenzará una vez que recayera pronunciamiento firme en cualquiera de los supuestos.

## XIII. — De las prácticas desleales

**Art. 53.** — Serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleadores, o en su caso, de las asociaciones profesionales que los representan:

- a) Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores;

- b) Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente de este tipo;
- c) Obstruir, dificultar o impedir la afiliación de los trabajadores a una de las asociaciones por ésta reguladas;
- d) Promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a determinada asociación sindical;
- e) Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades sindicales o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados a juzgamiento de las prácticas desleales;
- f) Rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para hacerlo o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación;
- g) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal, con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos a que se refiere esta ley;
- h) Negarse a reservar el empleo o no permitir que el trabajador reanude la prestación de los servicios cuando hubiese terminado de estar en uso de la licencia por desempeño de funciones gremiales;
- i) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los representantes sindicales que gocen de estabilidad de acuerdo con los términos establecidos por este régimen, cuando las causas del despido, suspensión o modificación no sean de aplicación general o simultánea a todo el personal;
- j) Practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los derechos sindicales tutelados por este régimen;
- k) Negarse a suministrar la nómina del personal a los efectos de la elección de los delegados del mismo en los lugares de trabajo.

Art. 54. — La asociación sindical de trabajadores o el damnificado, conjunta o indistintamente, podrán promover querrela por práctica desleal ante el juez o tribunal competente.

Art. 55. —

1. Las prácticas desleales se sancionarán con multas, que serán fijadas de acuerdo con los artículos 4º y siguiente de la ley 18.694 de infracciones a las leyes de trabajo, salvo las modificaciones que aquí se establecen.

En el supuesto de prácticas desleales múltiples, o de reincidencia, la multa podrá elevarse hasta el quíntuplo del máximo previsto en la ley 18.694.

2. Cuando la práctica desleal fuera cometida por entidades representativas de empleadores, la multa será fijada razonablemente por el juez

hasta un máximo del equivalente al veinte por ciento de los ingresos provenientes de las cuotas que deban pagar los afiliados en el mes en que se cometió la infracción.

Los importes de las multas serán actualizados a la fecha del efectivo pago de acuerdo con las disposiciones sobre índice de actualización de los créditos laborales. Cuando la práctica desleal pudiera ser reparada mediante el cese de la medida que la hubiere producido o la realización de los actos que resulten idóneos, conforme a la decisión calificadora, y el infractor mantuviera las medidas o dejare de cumplir los actos tendientes a la cesación de sus efectos, el importe originario se incrementará automáticamente en un diez por ciento por cada cinco días de mora, mientras se mantenga el incumplimiento del empleador o entidad representativa de los empleadores.

Sin perjuicio de ello, el juez, a petición de parte, podrá también aplicar lo dispuesto por el artículo 666 bis del Código Civil, quedando los importes que así se establezcan en favor del damnificado.

3. El importe de las multas será percibido por la autoridad administrativa del trabajo, e ingresado en una cuenta especial, y será destinado al mejoramiento de los servicios de inspección del trabajo, a cuyo fin la autoridad administrativa tomará intervención en el expediente judicial, previa citación del juez.
4. Cuando la práctica desleal fuere reparada mediante el cese de los actos motivantes, dentro del plazo que al efecto establezca la decisión judicial, el importe de la sanción podrá reducirse hasta el cincuenta por ciento.

#### XIV. — De la autoridad de aplicación

Art. 56. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley y estará facultado para:

1. Inscribir asociaciones, otorgarles personería gremial y llevar los registros respectivos.
2. Requerir a las asociaciones sindicales que dejen sin efecto las medidas que importen:

a) Violación de las disposiciones legales o estatutarias;

b) Incumplimiento a disposiciones dictadas por la autoridad competente en el ejercicio de facultades legales.

3. Peticionar en sede judicial la suspensión o cancelación de una personería gremial o la intervención de una asociación sindical, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de las intimaciones a que se refiere el inciso 2º de este artículo;

b) Cuando haya comprobado que en las asociaciones se ha incurrido en graves irregularidades administrativas. En el proceso judicial será parte la asociación sindical afectada. No obstante lo antes prescrito, cuando existiera peligro de serios perjuicios a la asociación sindical o a sus miembros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación podrá solicitar judicialmente medidas cautelares a fin que se disponga la suspensión en el ejercicio de sus funciones de quienes integran el órgano de conducción y se designe un funcionario con facultades para ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades que determinan se adopte esa medida cautelar.

4. Disponer la convocatoria a elecciones de los cuerpos que en las asociaciones sindicales de trabajadores tienen a su cargo el gobierno, la administración y la fiscalización de los actos que realicen estos últimos, como así también ejecutar los demás actos que hubiere menester para que mediante el proceso electoral se designen a los integrantes de esos cuerpos. Al efecto asimismo podrá nombrar las personas que deban ejecutar esos actos. Todo ello cuando el órgano de la asociación facultado para ejecutarlo, después que hubiese sido estimado para que lo hiciera, dentro de un lapso determinado, incumpliera el requerimiento.

En caso de que se produjere un estado de afección con relación a la comisión directiva de una asociación sindical de trabajadores o al órgano que tenga asignadas las funciones propias de un cuerpo de conducción, y en tanto en los estatutos de la asociación de que se trate o en los de la federación de la que ésta forme parte, no se haya previsto el modo de regularizar la situación, la autoridad de aplicación también podrá designar un funcionario para que efectúe lo que sea necesario para regularizar la situación. Por su parte si el órgano encargado de convocar a reunión de la asamblea de la asociación o al congreso de la misma, no lo hubiere hecho en el tiempo propio, y ese órgano no dé cumplimiento a la intimación que deberá cursarse para que lo efectúe, la autoridad de aplicación estará facultada para hacerlo para adoptar las demás medidas que correspondan para que la reunión tenga lugar.

Art. 57. — En tanto no se presente alguna de las situaciones antes previstas, la autoridad administrativa del trabajo no podrá intervenir en la dirección y administración de las asociaciones sindicales a que se refiere esta ley, y en especial restringir el manejo de los fondos sindicales.

Art. 58. — El control de las asociaciones sindicales, aunque hubieren obtenido personería jurídica en virtud de las disposiciones del derecho común, estará a cargo exclusivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

Art. 59. — Para someter las cuestiones de encuadramiento sindical a la autoridad administrativa, las asociaciones interesadas deberán agotar previamente la vía asociacional, mediante el pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que se encuentren adheridas, o a la que estén adheridas las federaciones que integren.

Si el diferendo no hubiera sido resuelto dentro de los sesenta (60) días hábiles, cualquiera de las asociaciones sindicales en conflicto, podrá someter la cuestión a conocimiento y resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el que deberá pronunciarse dentro de los sesenta (60) días hábiles, rigiendo en caso de silencio lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 19.549 y su reglamentación. Agotado el procedimiento administrativo, quedará expedita la acción judicial prevista en el artículo 62, inciso e) de la presente ley.

La resolución de encuadramiento, emane de la autoridad administrativa del trabajo o de la vía asociacional, será directamente recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La resolución que ponga fin al conflicto de encuadramiento sindical sólo tendrá por efecto determinar la aptitud representativa de la asociación gremial respectiva con relación al ámbito en conflicto.

Art. 60. — Sin perjuicio de lo que dispongan los estatutos, en los diferendos que puedan plantearse entre los afiliados a una asociación sindical de trabajadores y ésta, o entre una asociación de grado inferior y otra de grado superior será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 61. — Todas las resoluciones definitivas de la autoridad administrativa del trabajo en la materia regulada por esta ley, una vez agotada la instancia administrativa, son impugnables ante la justicia, por vía de recurso de apelación o de acción sumaria, según los casos, y en la forma establecida en los artículos 62 y 63 de la presente ley.

Art. 62. — Será competencia exclusiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo conocer los siguientes casos:

- a) Las acciones que promueva la autoridad administrativa del trabajo;
- b) Los recursos contra resoluciones administrativas definitivas que decidan sobre otorgamiento de personería gremial, encuadramiento sindical u otros actos administrativos de igual carácter, una vez agotada la instancia administrativa;
- c) La demanda por denegatoria tácita de una personería gremial;
- d) La demanda por denegatoria tácita de una inscripción;

e) Las acciones de encuadramiento sindical que se promuevan por haber vencido el plazo establecido para que se pronuncie la autoridad administrativa, sin que ésta lo hubiera hecho;

f) Los recursos previstos en el artículo 36 de esta ley.

Las acciones de los incisos a), c), d) y e) del párrafo anterior se sustanciarán por las normas del proceso sumario del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En este proceso la Cámara podrá ordenar las medidas para mejor proveer que considere convenientes. Asimismo proveerá la producción de las pruebas ofrecidas por las partes que sean conducentes, pudiendo disponer su recepción por el juzgado de primera instancia que corresponda, el que deberá elevar las actuaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de finalizada su sustanciación.

Las acciones previstas en los incisos c) y d) de este artículo deberán deducirse dentro de los ciento veinte (120) días hábiles del vencimiento del plazo otorgado a la autoridad administrativa para resolver.

Tratándose de recursos, éstos deberán ser fundados e interponerse ante la autoridad administrativa, dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la resolución. Dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la interposición del recurso, la autoridad administrativa deberá remitir a esa Cámara las respectivas actuaciones. Cuando la decisión recurrida afecte los alcances de una personería, radicado el expediente en sede judicial, deberá darse traslado a las asociaciones afectadas por el término de cinco (5) días.

Art. 63. —

1. Los jueces o tribunales con competencia en la laboral en las respectivas jurisdicciones conocerán en:

a) Las cuestiones referentes a prácticas desleales;

b) Las acciones previstas en el artículo 52;

c) En las acciones previstas en el artículo 47.

2. Estas acciones se sustanciarán por el procedimiento sumario previsto en la legislación local

Art. 64. — Las asociaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones de la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada su reglamentación, la que deberá ser dictada dentro de los noventa (90) días por el Poder Ejecutivo nacional.

Mientras no se realice la mencionada adecuación y su aprobación por la autoridad administrativa, prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la presente ley sobre las normas estatutarias, en cuanto pudieren oponerse.

Art. 65. — La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Art. 66. — Derógase la ley de facto 22.105 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art. 67. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Antonio T. Berhongaray. — Horacio F. Bravo Herrera. — Alberto J. Rodríguez Saá. — Eduardo Menem. — Antonio O. Nápoli. — Oraldo N. Britos. — Luis A. J. Brasesco. — Adolfo Gass. — Héctor J. Velázquez. — Edison Otero.

**FUNDAMENTOS**

Señor presidente:

El presente proyecto de ley que se pone a consideración del cuerpo y que cuenta con el aval de la totalidad de los senadores integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social presentes, toma como principal antecedente el presentado por el señor senador Britos, que fuera revisado por la Honorable Cámara de Diputados.

En un tema de tanta importancia para el sistema democrático, resulta útil contar con el consenso de las fuerzas políticas y organizaciones sociales.

Múltiples fueron las reuniones realizadas no sólo con la presencia de los senadores miembros de la comisión, sino con representantes de todas las bancadas que integran este alto cuerpo.

También fueron escuchados los interlocutores sociales, representados por los trabajadores, la Confederación General del Trabajo y numerosos sindicatos; y por los empresarios y sus organizaciones más representativas.

En su elaboración se ha tenido en cuenta la experiencia histórica de nuestro país y la decisión inequívoca de los trabajadores de fortalecer una estructura sindical que tenga como objetivo la unidad del movimiento obrero.

Conjuntamente con esa experiencia se ha tomado en la mesa de análisis la comparación con las legislaciones vigentes en la mayoría de los países del mundo, los convenios internacionales y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de sus principales órganos, especialmente del "Comité de Libertad Sindical" y de la comisión de expertos.

También se tuvo en cuenta la legislación que rige en nuestro país, especialmente las leyes 20.615 y 14.455 y los proyectos que tuvieron estado parlamentario que serán mencionados por el miembro informante de la comisión.

Se trata de un proyecto innovador que tutela la libertad sindical, la autonomía de las asociaciones sindicales y la democracia participativa en su funcionamiento interno.

Se programa una estructura sindical que propicie la unidad otorgando personería gremial al sindicato más representativo que otorga el derecho exclusivo de pactar convenios colectivos de trabajo.

Se prevé con amplitud de miras el objeto y fines de los sindicatos.

Por primera vez en la legislación se establece el esquema de los derechos de representación de delegados; comisiones internas u órganos similares; las facultades que tienen de verificar la aplicación de las normas la-

borales, de reunirse con los empleados y de presentar reclamos de los trabajadores.

Se establece la obligación de los empresarios de facilitar su funcionamiento y de otorgar un crédito horario de conformidad con lo que se pacte en las convenciones colectivas de trabajo.

La tutela de la libertad sindical no sólo abarca a los representantes electos sino a todos los trabajadores, reglamentándose de conformidad con el artículo 14 bis el derecho a la estabilidad de los mencionados representantes.

A los fines de lograr un consenso, se realizaron modificaciones parciales en el artículo 5º del presente proyecto que se refiere a las medidas legítimas de acción sindical, tomando el antecedente de la Constitución Nacional de 1949.

También se modificó el artículo 45 en el que se establece el número de delegados y otras modificaciones para perfeccionar su texto original pero respetando en lo sustancial las ideas que se dieron origen en el proyecto del senador Britos, tomando en cuenta la revisión de la Cámara de Diputados.

No podemos olvidar que fue Hipólito Yrigoyen el que elevó un proyecto para la formación de los sindicatos y que fue el presidente de los argentinos Juan Domingo Perón quien promovió y logró que se sancionara la primera legislación que lo regulara.

Por estos breves fundamentos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.

*Antonio T. Berhongaray. — Horacio F. Bravo Herrera. — Alberto J. Rodríguez Sad. — Eduardo Menem. — Antonio O. Nápoli. — Oraldo N. Britos. — Luis A. J. Brasesco. — Adolfo Cass. — Héctor J. Velázquez. — Edison Otero.*

**Sr. Presidente.** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Señor presidente: he escuchado con mucha tranquilidad los antecedentes con que se ha considerado previamente el tratamiento sobre tablas de este proyecto y meditado profundamente en el sentido de que a pesar de que este tema lleva casi setenta años, las cosas no han cambiado.

Me siento un poco Vito Dumas en esta sesión, lo mismo que expresaba Carlos Rodríguez, un diputado radical, en 1919, en sus fundamentos.

Mucho se aprende en la universidad y se ha hablado de la Constitución y de su respeto, pero yo digo: tenemos la misma Constitución de 1853, y ¿qué se hizo en este país cuando se explotaba al hombre, cuando las jornadas excedían las ocho horas y la Constitución decía que "había que promover el bienestar general, asegurar la libertad, el trabajo y la vivienda digna"?

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Jorge D. Solana.

**Sr. Britos.** — La Constitución se violaba desprotegiendo a ese hombre, a ese ciudadano común. Y pasaron los tiempos. En 1919 Yrigoyen nos envía el primer mensaje y no lo hace graciosamente sino que lo tiene que enviar por la inquietud que sentían los trabajadores para que se los respetara como seres humanos. Esa inquietud, naturalmente, no favoreció en aquellos tiempos a la oligarquía, la que tenía sus representantes no sólo en el Senado sino también en la Cámara de Diputados. Y ahí se quedaban los proyectos. Ahí se quedaba el compromiso que Yrigoyen había tomado con ese pueblo. Entonces ese pueblo tenía que continuar explotado más allá de que hubiera depositado su voto de ciudadano con mucha fe en ese caudillo que le había prometido reivindicación. Es ahí, señor presidente, que nos encontramos también con un proyecto de asociaciones sindicales producido por el señor diputado Carlos Rodríguez. Pero a mí, lo que me llama la atención es algo que, después de muchos años, podría rubricar con mi firma. Decía en una de las partes de sus fundamentos —y tengámoslo bien en cuenta—: "Las multitudes ignoran las fuerzas filosóficas que las empujan, pero sienten y sufren los vicios, los defectos de esta civilización brillante, que no le puede ofrecer un mayor bienestar que a los antiguos proletarios. Los universitarios —decía el diputado Rodríguez y tomemos bien en cuenta que estábamos en 1919— saben, sí, de aquellas modernas corrientes filosóficas, pero ignoran la rapidez con que se difunden y alumbran el alma virgen y oscura de las multitudes, porque no sufren todo el rigor de la injusticia y de la miseria." Eso lo decía un diputado de la Nación en 1919.

Pasaron los tiempos y pareciera que esa ignorancia la siguen teniendo los que evidentemente pasan un mejor bienestar. Y nosotros, aun en los procesos constitucionales, estamos permanentemente con los trabajadores a la espera de la justicia.

Han pasado doce años. Todas nuestras inquietudes traducidas en las leyes de carácter social fueron veintiocho; todas vetadas. Y nadie, nadie en este recinto, solicitó rever una sola de esas situaciones. Nadie dijo: Nos vamos a solidarizar con el Estatuto del Empleado Bancario, por ejemplo. Nadie dijo: Vamos a rever qué pasó con la ley 9.688, de accidentes, para actualizar los montos de indemnización cuando a un compañero le ocurría un accidente. Se dijo: "Esto es de los trabajadores; no importa. Más adelante les vamos a hacer un nuevo proyecto". Pero no hicieron los proyectos, y ahí estamos: doce años, cinco meses, esperando.

Yo quiero la Constitución. ¿Cómo no voy a querer la Constitución si cada vez que se ha violado los trabajadores son los que han pagado las consecuencias? ¿O quiénes desaparecieron del 76 en adelante? Denunciamos la vez pasada que perdimos más de seis mil delegados de fábricas, de empresas. Y ahora nos encontramos con un sindicalismo de hombres viejos y jóvenes y nos falta esa clase de dirigentes, la clase intermedia. ¿Y qué se ha hecho con esto?

Hemos ido perdiendo la libertad y la autonomía y nos estamos acostumbrando al favor de los funcionarios o al favor de los ministros, porque a veces nuestros dirigentes sindicales tienen que recurrir a ellos para tratar de dar respuesta a sus afiliados.

Esa es la situación a que hemos llegado. No me he entregado mansamente con este proyecto, porque esta iniciativa no es de 1987. Quiero decirles a mis pares que esta iniciativa data de junio de 1984. Y al concluir los dos años tuve que enviar un nuevo proyecto para tratar de lograr su consideración.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Edison Otero.

**Sr. Britos.** — Y fue así que en 1936 este cuerpo dio su sanción. En la Cámara de Diputados se tomó un proyecto del gobierno y el del senador que habla y se los convirtió en un solo proyecto.

¿Qué ocurre con nosotros, que asumimos compromisos públicamente ante nuestros conciudadanos cuando buscamos los votos, y les prometemos a los trabajadores un futuro mejor, con sueldos y salarios dignos, y cuando llegamos acá no sabemos cómo cambiarles las cosas, porque nos parece que empiezan a tocarse algunos intereses que, si no son nuestros, son de nuestros parientes?

Así arrancan ideas como la que expresara hace poco la Unión Industrial Argentina, cuando decía que por culpa de estas leyes el país no iba a crecer. Y fíjense: hace doce años y pico que no está esta ley. Que venga alguien con un centímetro a medir cuánto creció el país desde aquel 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, cuando estos señores de la Unión Industrial Argentina manejaron totalmente la economía del país, buscando vender dinero caro, explotando al país, quedándose con los mejores sacrificios de los trabajadores. Y ahora muchos de ellos, que son los nietos de los que propi-

ciaron el golpe del 30 contra don Hipólito Yrigoyen, vienen a decir que esta ley va a perjudicar al país.

Esta ley no les da nada más que autonomía y libertad a los sindicatos. Tiende a dar esa libertad, una libertad que nosotros aceptamos, porque puede ser que un trabajador, con estos derechos, vaya a discutir mano a mano con su patrón un convenio laboral. Pero si nosotros no ponemos en vigencia esta norma, mal puede regir la ley 14.250, porque en poco tiempo más los patronos van a desconocer lo que convengan ante el Ministerio de Trabajo, por más que el señor ministro, en un acto de buena fe, les haya dicho a nuestros compañeros que él reconoce la legitimidad de la organización gremial.

Pero si esas organizaciones no se encuadran en la ley 22.105, que dejó la dictadura militar, ¿quién las va a reconocer, cuando todos sabemos que en 1988 más de trescientas organizaciones gremiales van a tener sus elecciones? ¿A qué conduce seguir esperando tanto tiempo?

Yo quisiera encuadrarme perfectamente en la Constitución, y he venido peleando con el radicalismo y con otros sectores para que nos entendieran. Sabía que mi voz tal vez no iba a ser lo suficientemente fuerte como para sensibilizarlos... Y he buscado en mi movimiento, el movimiento peronista, que me interpretó a través de Perón cuando en el año 1943, mediante un decreto, nos dio esta ley y el 2 de octubre de 1945 estableció por medio de un decreto ley la libertad y autonomía sindicales.

De ahí en adelante ocurrió lo que muchos no quieren analizar: la consecuencia de ese 2 de octubre de 1945 fue que nuestro jefe, nuestro conductor, el general Juan Domingo Perón, fuera a parar a Martín García con sus huesos. Esto fue lo que posibilitó la jornada cívico-política más importante de la Argentina: el 17 de octubre de 1945.

Fíjense ustedes que cada gobierno constitucional que ha querido hacer una ley de este tipo ha pagado consecuencias muy caras. No sé si las tendremos que pagar, pero bien vale la pena. Haría esto uno y mil veces, porque no puede ser que se siga explotando a los trabajadores. No estamos contra el capital, pero sí estamos con la distribución equitativa de la riqueza, que es lo que no se quiere hacer, porque los trabajadores tienen capacidad suficiente para poder discutir todos estos problemas.

Señor presidente: no me ha sido muy fácil cambiar ideas para posibilitar una salida mediante este proyecto de ley. No me ha sido muy

fácil porque esto me ha llevado muchos días, pero bien vale este pequeño sacrificio, porque me siento mal en una sociedad en donde unos pocos estamos bien y muchos millones están mal.

Perón decía que nadie se realiza en una comunidad que no se ha realizado. Cuando estos temas se discuten entre los que están bien, parece una cuestión de psicólogos, que a cada rato nos dicen que tenemos que sentirnos mejor, pero la realidad es otra. No nos podemos sentir bien porque nuestros derechos no son en este momento los que deberíamos tener en una vida institucional y democrática como la que tiene este país.

Es por eso, señor presidente, que hemos cambiado, redacciones y he cedido al igual que otros compañeros con referencia a dos puntos de este proyecto. Pero también hemos insistido fundamentalmente en la estabilidad del delegado. Lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo, porque es el primer eslabón de la organización gremial. Mientras a este compañero no se lo respete, no se va a respetar a la organización.

En tres oportunidades, como delegado de la Unión Ferroviaria, en mi trabajo, fui cesanteado. Gracias a la organización se me devolvió la posibilidad de poder seguir trabajando. ¡Cómo no lo voy a defender si sé que es el hombre clave, el que puede ejercer la posibilidad de unir a los propios trabajadores y defender sus intereses a nivel de base! ¡Cómo no lo vamos a preservar si un delegado no se hace, sino que nace así, porque primero que todo tiene que tener conciencia y sensibilidad gremial! Delegado no es cualquiera; debe poseerse una virtud que quizás la dé Dios. Es una virtud porque fundamentalmente esta persona representa solidaridad para un sector, quizás el más importante de la sociedad, el de los desposeídos, el de los trabajadores.

Por eso, señor presidente, sé que muchos colegas no están de acuerdo. No sé cuántos más van a retirar las firmas. No sé si mi voto va a navegar sólo en este recinto. Pero no importa, señor presidente, he cumplido con mis compañeros, con los hombres y mujeres de mi clase que han posibilitado llegar a este alto recinto.

Y espero también contar con la solidaridad de mis compañeros, porque no ha de ser la última oportunidad en que se plantee una reivindicación que, a gritos, piden todos los trabajadores argentinos (*Aplausos en las galerías*).

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: entramos a tratar el proyecto de ley de asociaciones sindicales.

Es necesario recapacitar sobre qué hemos hecho, cómo hemos trabajado, qué queremos y querríamos consagrar para el derecho positivo argentino. Tanto los justicialistas como los radicales y las otras organizaciones políticas tenemos larga historia en este quehacer.

Nadie discute los méritos, afanes, planteos y luchas que la historia va marcando en el camino de los tiempos; y aparecen los hombres políticos queriendo defender no solamente el panorama de un equilibrio social, sino también los derechos de una clase social que se va perfilando.

Nadie ignora —todos lo sabemos— que allá, en aquellos primeros de mayo, en los orígenes de ese festejo en la República Argentina, hablaban hombres con otra lengua y expresaban sus ideas en otro idioma.

Quizás allí estaban muchos abuelos o bisabuelos nuestros; eran los hombres que llegaban a este país que les abría los brazos. Y eran las víctimas de la lucha de clases y de la persecución de la Europa industrial. De allí vienen los radicales, peronistas, socialistas, comunistas y los liberales, inclusive. No constituimos un pueblo que nació a la sombra de los virreinos edificados sobre el oro y en cortes suntuosas que disputaban con la corte de España en riquezas y esplendor. Nosotros provenimos del Virreinato del Río de la Plata en donde el conquistador, el colonizador, le gustara o no, tuvo que meter su mano y pie en el barro, porque acá había trabajo y libertad pero no riquezas; y tampoco se podía cimentar el nacimiento de una oligarquía aristocrática basada en la explotación del indio en el trabajo esclavizado en las minas, como en otros países de Latinoamérica.

Por eso quizás haya algún hombre que esté en contra de este proyecto, en contra de los derechos del trabajador, que tenga algún abuelo que fue víctima de la persecución y de la incompreensión. Por ello tenemos algo en común: estamos hechos con el mismo barro y, por qué no decirlo, con la misma bosta. Y así se va formando la argamasa del ser argentino y de nuestro país.

Así como el justicialismo tiene su historia, sus héroes, sus hombres y mártires que venerar, que respetamos, nosotros también los tenemos, como lo han dicho en este debate senadores del justicialismo. Y no sólo a don Hipólito; podemos hablar también de don Leandro. Pero yo no voy a ir muy atrás, sino que voy a recordar, porque es justo que así lo haga en nombre de mi partido —y sé que también en nombre de quienes están aquí—, a un hombre como Cri-

sólogo Larralde. Estoy seguro de que si viviera estaría con su bondad y firmeza empujándonos a que este debate se acortara y aprobáramos la ley inmediatamente.

Todos hemos tenido nuestras preocupaciones y nuestras luchas. Todos tenemos nuestros muertos y nuestros teóricos del derecho. Porque el justicialismo, al lado de los grandes dirigentes trabajadores, tuvo a Sampay. Los radicales tuvimos a Lebensohn, a los constituyentes del año 1933 en la provincia de Entre Ríos, quienes consagraron como derecho constitucional provincial el de asociarse, además de los tribunales paritarios de conciliación obligatoria, el salario vital, móvil y mínimo, la inembargabilidad del hogar y los derechos sociales, que Sampay elogió en un libro dedicado exclusivamente a la Constitución de Entre Ríos. También está presente Leonidas Anastasio.

Tuvimos nuestros hombres de derecho, nuestros dirigentes obreros y los servidores anónimos que fueron muertos en la calle por las ideas que nosotros sustentamos.

No me voy a olvidar jamás que cuando los radicales y los justicialistas nos mirábamos con desprecio y a veces con odio había dos hombres con los cuales he tenido la suerte de dialogar en el tiempo. Uno era un joven justicialista llamado Lorenzo Pepe y el otro un viejo radical de nombre Scipione. En la época en que nos enfrentábamos despiadadamente en el terreno político, ellos trabajaban afanosamente en su gremio con sus discrepancias, su personalidad y su propio perfil, dándose la mano y buscando las coincidencias fundamentales para que un gremio tan importante en el país como la Unión Ferroviaria fuera adelante.

Los dirigentes gremiales de origen radical, socialista y justicialista se abrazaron ante que los dirigentes políticos porque conocían el drama que venía de muy abajo y nos ayudaron a nosotros a comprender el abrazo de Perón y Balbín en ese gesto magnífico que creó una nueva conciencia nacional. Hoy discrepamos vehemente pero en ambientes espirituales muy distinto a aquellos del 24 de febrero de 1946 en adelante.

Por eso, cuando se trató el proyecto de ley de reordenamiento sindical, al comienzo de este período constitucional, en medio de algarabías, gritos y discursos violentos comenzamos este trajinar para coincidir en la discrepancia, que luego de caer y levantarnos tanto radicales y justicialistas nos fue enseñando que éste es el proceso para buscar mínimos comunes denominadores a fin de que después, quizá dentro de cuatro, cinco o seis años, en la luminosidad de una vigorosa democracia, ya inmovible, po-

damos discutir en profundidad nuestras posiciones dogmáticas, filosóficas y políticas.

A mí me tocó, señor presidente, fijar la posición histórica de la Unión Cívica Radical. Ese pensamiento que dimos en ese debate, que plasamos en el fundamento de nuestro voto sosteniendo la sanción de la Cámara de Diputados, conforma nuestra filosofía, que ratificamos en este momento y de la cual hacemos profesión de fe doctrinaria para seguir luchando en los tiempos y, democráticamente, conversar o rectificarlos si estamos en el error. Pero creemos en el sindicato único dentro de la democracia y de la pluralidad y tenemos mínimos comunes denominadores ya inmovibles entre las corrientes políticas del radicalismo, del justicialismo y de muchas otras doctrinas políticas del país.

El justicialismo fijó su posición y lo hizo a través de su miembro informante. Era su posición filosófica, política y dogmática, la cual siguen sosteniendo.

Hoy entramos en un proceso que a lo mejor muchos no comprenden porque estamos ratificando nuestras posiciones, nuestra filosofía y nuestra identidad, pero también hemos tenido que buscar las soluciones instrumentales de coyuntura para poder seguir adelante.

Señor presidente: esto empezó con un proyecto del senador Britos, que cuando estaba por caducar fue reeditado. Se discutió y hubo dos dictámenes de comisión. Nosotros dimos nuestra posición y suscribimos un dictamen en minoría, coincidente con nuestra opinión y la del Poder Ejecutivo. La democracia parlamentaria lo votó y el proyecto pasó a la Cámara de Diputados.

Luego de un largo proceso a través del cual el Poder Ejecutivo había enviado otros proyectos de ley, como el vinculado con la coestión, el atinente al derecho de información, el referido a convenciones colectivas de trabajo, que se discutió en comisión en la Cámara de Diputados y quedó en punto muerto, llegó un día en que ocurrió ese hecho político que ya se ha indicado, el de la presencia del ministro Alderete. Y ello fue así porque nosotros somos políticos que estamos trabajando en la conducción de un gobierno no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el Legislativo y que tenemos la responsabilidad de intentar mejorar la Nación política y jurídicamente organizada, que es el Estado.

Se empezó a trabajar sobre todos los proyectos que mencioné. Hubo problemas sindicales y políticos y planteos en los distintos sectores

que hacen a la vida del trabajo y el capital. Pero empezaron a formalizarse distintos proyectos, de los cuales casi todos están aprobados. Por ejemplo, en este momento se encuentran reunidas las paritarias porque esos proyectos imperfectos, que no se ajustaron a nuestras posiciones dogmáticas, están funcionando y posibilitando el acuerdo social entre las organizaciones gremiales y empresarias.

De alguna manera también se están tratando los problemas vinculados con la negociación colectiva de los estatales y asimismo está funcionando el Consejo Nacional del Salario.

Falta la ley de asociaciones sindicales. Sabemos lo que pasó en la Cámara de Diputados, cómo se aprobó y llegó a esta Cámara.

Nosotros hemos discutido, no nos hemos puesto de acuerdo respecto de algunos puntos. Dolorosamente, unos y otros hemos tenido que resignar posiciones hasta encontrar la canaleta —como decimos nosotros— por donde corre el agua del entendimiento de las distintas posiciones políticas. Fuimos y somos conscientes de la necesidad de concretar un instrumento normativo. Conversamos muchas veces; como ya indiqué se realizaron varias reuniones a pedido del señor senador Sapag para encontrar soluciones.

Hemos transitado por el camino de la incompreensión; desde todos lados nos han castigado porque buscamos lo más difícil, que es el acuerdo, ya que lo más fácil es la discrepancia.

Así hemos creado un instrumento imperfecto, un instrumento que posiblemente —estoy seguro— no satisface a nadie. Si un justicialista estudia la historia doctrinaria y busca el proyecto de máxima de Oraldo Britos, no le gustará; si un radical lee su historia y analiza la posición de la ley de reordenamiento sindical, tampoco le gustará; lo mismo le ocurrirá a un liberal. Pero todos, aun en las discrepancias y en el no gustarnos determinados puntos, hemos encontrado un denominador común. Para muchos podrán ser simplezas, pero muchas simplezas que en el mundo no se atendieron dieron origen a grandes tempestades. Nosotros hemos tenido la suerte de que las simplezas nos conmovieron y así encontramos algunos caminos de coincidencia.

Hacía mucho tiempo que habíamos encontrado algunas coincidencias; hacía mucho que tocábamos la punta de nuestros dedos para estrecharnos las manos, pero siempre existía un inconveniente. No obstante esto todos los que estamos sentados en estas bancas tuvimos la grandeza de alma para buscar soluciones.

Y sí. Cuando hablamos de medidas de acción directa era una simpleza, y sabíamos que esto provocaba de alguna forma no solamente a los

sectores que nos han atacado y a los que ha hecho mención el señor senador Oraldo Britos, sino también a otros sectores de la opinión pública que no se conformaban con algunas explicaciones.

Entonces buscamos en el terreno de las coincidencias ajustarnos a la concepción de derecho al buen criterio de tipo sindical y a la jurisprudencia de nuestros tribunales. Así llegamos a la coincidencia de reemplazar medidas de acción directa por medidas legítimas de acción sindical. Y ésta es una simpleza, señor presidente. ¡Bendita sea la simpleza! Pero esta simpleza estaba consagrada en la Constitución de 1949; y la jurisprudencia de nuestros tribunales, que puede ser contradictoria o no, a través del tiempo coincidió siempre en que las medidas de acción directa eran medidas legítimas de acción sindical, y que todo lo ilegítimo no era cubierto por lo que se denominaban medidas de acción directa.

Es decir que nosotros hemos clarificado a la opinión pública sobre este punto y también acerca del lenguaje que utilizamos, pero no hemos modificado el concepto ni el fundamento de lo que significan las medidas de acción directa dentro de lo que consideran la doctrina del derecho laboral y sindical, la concepción internacional del derecho y lo que sostiene la Organización Internacional del Trabajo. Quizás hemos buscado la frase menos conflictiva, la más clara, de modo que podamos saber que todo lo que es legítimo está dentro de este ordenamiento legal. Tuvimos que caminar mucho para llegar a este acuerdo, pero lo logramos.

También tuvimos que hablar bastante sobre la cantidad de delegados. Acerca de este punto, es necesario hacer una aclaración concreta. La vida sindical tiene un célula fundamental para su existencia, y es el delegado interno de fábrica o de la comisión interna. No podemos concebir desde ningún punto de vista un derecho sindical que no tenga presente a ese mundo que transita y convive diariamente dentro del establecimiento fabril, donde el delegado cumple una de las funciones específicas más importantes en la defensa de los derechos de los trabajadores, constituyendo uno de los elementos más indispensables para mantener en ese ámbito la armonía social.

Esa persona, el delegado, está en contacto permanente con sus compañeros de trabajo y es el vocero para hablar con el capataz o el gerente o bien el que va a participar en la comisión interna de fábrica. Es el hombre que va a hacer mover al derecho laboral; es el que le va a dar vida; es la corporación presente en un hombre de carne y hueso que permanentemente se con-

vierte en el vigía, el tutor, el protector y defensor de los derechos de los trabajadores.

Decía que teníamos que conciliar el número de esos delegados. Se nos habían planteado muchos problemas porque estamos viviendo en la transición y tenemos que buscar ciertos y determinados puntos de coincidencia. Debo decir que nosotros, los radicales y los justicialistas, con relación a este tema del número de delegados internos, hemos tenido grandes coincidencias y muy pocas diferencias. Esto es así ya sea que consideremos el decreto ley 23.852/45 —que nada decía acerca de la reserva de empleo—, la ley 14.455, la ley 20.615 o el acuerdo a que llegamos con Britos cuando, en un momento determinado, quisimos encontrar una solución a la ley de reordenamiento sindical. También es así, si consideramos el decreto 969/66 de nuestro presidente Illia, que expresó la posición ideológica del radicalismo y que nosotros defendemos, aunque obviamente fue criticada y atacada por el justicialismo sobre la base de su doctrina y de los perfiles propios que a veces nos diferencian y que, en este momento, también cada uno de nosotros mantiene a pesar de que hemos buscado la conciliación.

En suma, lo que quiero decir es que no nos preocupa el número de delegados previstos en la ley Britos, en el despacho de la comisión en minoría o en lo que pudo haber resuelto la Cámara de Diputados. Buscamos los puntos de acuerdo necesarios y los puentes imprescindibles para que ese número no perjudicara un libre y pacífico transitar por la mecánica de producción de la empresa dentro de la armonía social y para que los derechos de los trabajadores estuviesen claramente protegidos, por medio de la presencia de un número determinado de delegados.

Así llegamos a ese punto de coincidencia. Luego, tratamos lo que se ha llamado la prejudicialidad, lo que se ha denominado mal como fuero sindical, aspecto en el que tuvimos que buscar las coincidencias y conciliaciones entre la estabilidad seria y garantizada del delegado gremial y un equilibrio serio y medurado con el poder de dirección y disciplinario del empresario. Nosotros tuvimos nuestra posición y ésta no es la que hemos consensuado en el artículo correspondiente.

Nuestra posición era que el empresario podía separarlos sin perjuicio de que el empleado delegado podía recurrir a la justicia, en un término perentorio y resolverse la presencia o no en el lugar de trabajo.

También observamos al estudiar este artículo que los conflictos de los delegados internos o

los dirigentes gremiales con los empresarios son insignificantes a través de la historia. Prácticamente los porcentajes son muy pequeños. Al mismo tiempo, observamos que con la modificación que se introduce dentro del planteo de la mayoría, el asunto podía compatibilizarse. Y lo logramos hoy a la tarde, después de las 17 horas, luego que comenzara a sonar el timbre para llamar a esta sesión. Pero ello no fue consecuencia de una improvisación de minutos sino que fue el fruto y la consecuencia de un largo caminar, de un trajinar prolongado que nos permitió llegar a este punto.

Si nos ponemos a estudiar los puntos vinculados a hechos importantes que se tratan en este proyecto de ley, y lo hacemos analizando el proyecto denominado Britos, el dictamen de comisión en minoría que fue confeccionado por el que habla, en la oportunidad en que se debatió ese proyecto y luego el texto enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación a la Cámara de Diputados, vamos a darnos cuenta de que son más las coincidencias en temas como el derecho de los trabajadores, el derecho de huelga, confederaciones, jubilaciones, democracia interna, etcétera, que las discrepancias. De esa forma llegamos a concretar este proyecto de alternativa.

Es necesario hacer algunas reflexiones porque es una obligación moral. Debemos afirmar que estamos trabajando dentro de la coyuntura, buscando instrumentos idóneos en la coincidencia para posibilitar la consolidación del sistema democrático, representativo, republicano y federal.

No estamos legislando como queremos. No estamos haciendo la ley que nosotros deseamos. No está acá ninguno de los sectores políticos plasmando el pensamiento de su partido. Nosotros hemos sostenido y seguiremos sosteniendo puntos importantes referidos a nuestra vida política en cuanto al quehacer sindical argentino. Nosotros sostuvimos permanentemente la representación de las minorías en los órganos ejecutivos y la sostenemos. Hemos considerado que la representación de las minorías por el sistema de lista incompleta no perjudica desde ningún punto de vista la efectividad de los órganos ejecutivos de las organizaciones gremiales. La hemos sostenido y la seguimos sosteniendo. Pero buscamos puntos comunes de coincidencia.

Alcanzamos consenso en la Cámara de Diputados y lo hemos respetado acá, en este proyecto para que repita aquello en que se ha coincidido. Nosotros consideramos siempre que la representación de las minorías es la base funda-

mental del sistema representativo y republicano que ha consagrado nuestra Constitución, que no lo ha hecho simplemente para el ejercicio del poder político sino también para el ejercicio del poder social. Nosotros hacemos la formal promesa de seguir luchando para que en tiempos mejores, dentro de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte años, podamos estar en condiciones de acordar entre nosotros la representación de las minorías en los órganos ejecutivos.

Hoy hemos llegado a un gran avance, porque nuestro proyecto está dentro de las concepciones globales del convenio internacional de libertades sindicales y de garantías del sindicalismo y la consagración del pluralismo sindical. Es bueno que los argentinos recordemos que sostenemos el sindicato único. En Europa el nombre de sindicato único con personería gremial se da al más representativo. Cuando hablamos de sindicato único, nos referimos a un sindicato democrático, porque el sindicato único en nuestro país es el que tiene la personería gremial. Todo ciudadano trabajador tiene la posibilidad de afiliarse o no para constituir otras asociaciones que podrán ser primero sociedades civiles y después tener la virtud de ser organizaciones gremiales con inscripción para luego discutir por las vías que fija la ley cuál es la más representativa de acuerdo con la cantidad de afiliados, pudiendo de esa forma obtener la personería gremial en desmedro de la otra que ha tenido menos afiliados y así sucesivamente, como ya ha ocurrido en más de una oportunidad en nuestro país. Hay planteos en este momento de la Unión Tranviarios Automotor y el Sindicato Único de Trabajadores de Pasajeros de la provincia de Entre Ríos, discutiéndose quién de los dos tiene la personería. Es decir, nosotros consagramos un sindicato único pero democrático porque se concede la personería gremial a una organización, pero el ministerio puede quitarla cuando aparece otra que tiene mayor cantidad de afiliados.

La interpretación que le da la Unión Cívica Radical al texto legal no es la de que aquello que no está prohibido está permitido. En todo el proceso de búsqueda de consenso en torno de esta ley, en la lectura de los distintos articulados que se fueron sucediendo, nuestra interpretación ha sido que las organizaciones gremiales actúan en el campo político. Pueden expresar y defender opiniones, actuar y valorizar, como lo hacen, en todo lo concerniente a la problemática política con mayúscula, de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. Pero también interpretamos que las organizaciones gremiales no pueden actuar partidariamente.

Esta es nuestra interpretación del texto legal, que hemos dado por consenso a través de diferentes artículos, proyectos y debates que se han sucedido en torno de esta problemática en los últimos tiempos.

También queremos expresar con suma claridad que la Unión Cívica Radical ha sostenido tres puntos históricos acerca de la ley de asociaciones sindicales. El primero es la unidad del movimiento de obrero, el segundo la organización democrática en los sindicatos y el tercero su caracterización como organizaciones con fines específicos. Por eso hemos sostenido, como lo acabo de hacer recién, que es un error creer que los sindicatos deben ocuparse exclusivamente de temas laborales. Ello es parte de su misión, pero no comprende la totalidad de sus objetivos. En efecto, los sindicatos no deben estar ausentes en la problemática de la política nacional, del problema económico, de la defensa de una economía de producción, ni tampoco pueden dejar de intentar enderezar una economía que pretenda ser puramente financiera.

Consideramos que el sindicato debe estar opinando en materia educacional, sobre la ley de defensa de la Nación, en fin, sobre todos los aspectos que hacen a la vida social, económica y política de la Nación, como del campo internacional. Pero también debe tener la capacidad de distinguirse, en el concepto global de la problemática nacional e internacional, de la posición partidista que pueda tener cada uno de sus integrantes. Decimos esto interpretando el sentido de nuestra Constitución, nacida como consecuencia de la inmigración y del deseo de respetar las ideas políticas, económicas, sociales y religiosas de todos los habitantes de la Nación. De acuerdo con estos principios, no pueden hacerse en nuestro país diferencias raciales, religiosas ni políticas. Y así lo consagran todos los estatutos de las organizaciones gremiales.

Por eso consideramos que debe consagrarse el principio democrático del respeto de las ideas, por el que se sostiene la universalidad del sindicato, en donde se concentran hombres de distintas ideologías aun cuando pueda haber grandes mayorías que pertenezcan a un determinado partido político. De acuerdo con nuestra concepción nacional, nuestra posición argentina, creemos que el sindicato no tiene que identificarse con un partido político.

Esas son nuestras posiciones, esas son nuestras ideas, nuestras actitudes que permanentemente repetimos y queremos practicar.

Estas palabras no están dirigidas a la bancada mayoritaria, sino a nuestros afiliados, a los hom-

bres que nos votaron, a los que nos siguen, a aquellos que tenemos que entender como compañeros de partido, como correligionarios en el mostrador de la protesta diaria, en esa protesta diaria de la coincidencia, de las soluciones pragmáticas y de los principios filosóficos que forman nuestro fundamento político, tanto de unos como de otros.

Por eso nosotros hoy, cuando hablamos de estas cosas, lo hacemos con coherencia, porque no hemos abjurado de nada, como no han abjurado de nada los justicialistas ni los liberales, sino que coincidimos y hacemos defensa de nuestras profesiones de fe doctrinaria que vamos a seguir sosteniendo.

Esta es la ley que nosotros podemos hacer. Este es nuestro país. Así somos nosotros. Acá están nuestros defectos, aquí están nuestros errores. No podemos sancionar leyes mejores que nosotros. No podemos sancionar leyes mejores que nuestras incomprensiones, nuestros egoísmos. Pero también aprobamos leyes que son jirones de grandeza, de hombres que están caminando para hacer.

Entonces, si afrontamos el reto de la incomprensión y de la acusación, a más de uno de nosotros algunos nos podrán decir con muy buena fe pero errados: "Traidores de los principios que habéis sostenido desde hace más de ochenta años, ¿dónde está la representación de la minoría? ¿Dónde están esos principios que sostuvieron en 1983? ¿Dónde están esos planteos de democratización que nosotros exhibimos?" También les podrán decir a otros partidos políticos acá representados que hay muchas normas consagradas en este texto legal que no se ajustan a sus planteos de profundidad doctrinaria. Y les diremos: "Sí, señores, no somos apóstatas; no somos mercaderes de nuestras ideas, somos hombres de la democracia, que queremos leyes que quizás no nos gusten a todos, pero que las podamos hacer funcionar".

Nosotros preferimos un país imperfecto que vaya haciendo la democracia antes que el silencio de los gobiernos militares, que nacen —casualmente— de la terquedad, del entrechocar de las posiciones ideológicas cuando no encuentran en su tiempo histórico las coincidencias.

Quizás lo haya dicho varias veces en este recinto, pero lo voy a repetir. En el acto de clausura de la última campaña electoral del Partido Socialista Obrero Español, realizada en Madrid, Felipe González tuvo que decirle a su pueblo por qué estaba con el Tratado del Atlántico Norte, por qué ingresaba España a la Comuni-

dad Económica Europea y por qué levantaba ciertas y determinadas banderas que habían sido históricamente elementos fundamentales, en los cuales había asentado sus discrepancias con los sectores políticos de la derecha, del centro o no socialistas, de España.

Dijo una frase que me impresionó, si bien a otro le puede producir una sonrisa. Expresó lo siguiente: "Yo me he preocupado de estudiar la historia de las frustraciones de España y he llegado a la conclusión de que cuando las ideologías nuestras y nuestros planteos doctrinarios no van juntos al paso de los tiempos históricos, se llega a los fracasos y se vuelve cien años atrás". Y dijo también "que el arte del político es el de buscar las coincidencias que se pueden realizar para poder abrir caminos y fortalecer la democracia, llegando a las playas nuevas de un país mejor para discutir con gran tranquilidad en tiempos mejores nuestras grandes discrepancias doctrinarias, esto es ir por el buen camino." Pero cuando estamos haciendo el edificio de la convivencia para garantizar la paz y la tranquilidad de los chicos que están en los vientres de nuestras mujeres, debemos aprender a buscar las grandes transacciones que no pasan por las claudicaciones, sino que son las antecámaras de los grandes debates para arribar a las grandes realizaciones históricas, conforme a las ideologías o doctrinas que cada uno pueda tener.

Eso me quedó grabado y lo recordaba cuando corría por los pasillos de este Senado buscando coincidir; ocurre que a veces uno está nervioso, pierde las líneas de la educación, tiene ásperas discusiones con los compañeros de lucha a quienes quiere y aprecia, con los queridos compañeros de bancada que pertenecen a diferentes sectores, pero lo hace para recorrer ese buen camino.

Yo pensaba también en todo lo que teníamos que hacer porque, a este paso, deberemos hacer marchar las cosas, los que queremos vivir en paz y los que pretendemos que todo salga lo mejor posible, dentro de la cruda y desgraciada realidad de lo que somos.

Y vinieron la falta de quórum, las declaraciones ásperas, las puñaladas de las palabras ácidas, heridas y pedradas, las tiradas de barro. Pero todos aprendimos algo. Aprendimos la lección de los tiempos históricos. Todos los que estamos aquí sentados queremos un país mejor.

Y alguna vez, mientras nos despedábamos entre nosotros, los representantes de los grandes intereses oligárquicos, reaccionarios y golpistas del país, nos miraban desde las tribunas de la pasividad, observando cómo nosotros les íbamos a brindar en bandeja el poder político,

ejerciendo en nombre de nuestras rígidas posiciones una terquedad mezquina.

Así llegaron los golpes de Estado; el de 1930 y los otros que socavaron al país. En ese sentido, tenemos gran responsabilidad histórica los que nos enfrentamos; pero lo hicimos con honestidad. Unicamente pueden conciliar los que se enfrentan, y aprendimos a conciliar. Y en este proceso que, con seguridad, mañana puede ser criticado por esos que quieren ver fracasar al Parlamento, llegamos a esta conclusión, a este texto.

Y hoy estamos aquí. Con seguridad vamos a escuchar exposiciones extensas que van a fijar históricamente las distintas posiciones, tanto de la Unión Cívica Radical como del justicialismo y de los partidos provinciales. Todos queremos cumplir con la historia y con nuestra conciencia y dejar perfectamente en claro que buscamos estos mínimos comunes denominadores para arribar a una solución.

Así lo hemos hecho, señor presidente. No voy a abundar en detalles pero voy a pedir que se inserten como parte de mi exposición algunas cosas importantes para que se vea cómo hemos trabajado.

—Asentimiento <sup>1</sup>.

**Sr. Brasesco.** — Se trata de un cuadro comparativo entre el proyecto Britos, el despacho nuestro en minoría y el proyecto del Poder Ejecutivo; otro cuadro comparativo de lo que históricamente ha sido la cantidad de delegados que hemos asignado en distintos proyectos y planteos tanto los justicialistas como los hombres de la Unión Cívica Radical; y, finalmente, jurisprudencia producida por nuestros tribunales de lo que se ha denominado medidas de acción directa. No voy a pedir el agregado del dictamen de comisión en minoría de cuando discutimos originariamente el proyecto Britos porque se encuentra en el diario de sesiones.

He solicitado esta inserción simplemente para que se vea la coherencia dentro de la discrepancia y las coincidencias que hemos podido tener.

Con todo entusiasmo y una profunda alegría pido a este Senado la aprobación en general y en particular de este proyecto de ley. Es el proyecto de la imperfección pero es también el del esfuerzo mancomunado por coincidir para comenzar a transitar mejores caminos.

Invoco por ello a los hombres de mi partido que me enseñaron a ser frontal y a ser conse-

ciente con la filosofía de la Unión Cívica Radical, como Crisólogo Larralde; también a hombres como Scipione y Balbín, que me enseñaron que nuestras manos y las de los hombres de los otros partidos deben ir formando eslabones de unidad en el pueblo argentino; y a mi presidente, quien todos los días asume un compromiso íntimo ante la historia de querer que se le haga pedazos su nombre y su cuerpo con tal de consolidar el sistema de la democracia para que, así como hace poco este país vivió el júbilo del traspaso del poder de gobernadores a gobernadores electos, sobre la base de estos hechos que producen incomprensiones, pueda mañana transmitir el gobierno a quien resulte elegido.

En nombre de esos maestros, de Crisólogo Larralde, Scipione, Balbín y Alfonsín, que me enseñaron a ser férreo en la doctrina, intransigente en los principios y tolerante con los hombres, y a tener el objetivo fundamental en este momento de transición, de consolidar el sistema democrático, pido a este Honorable Senado que preste formal aprobación en general y en particular.

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor presidente: es para solicitar un cuarto intermedio, dado lo avanzado de la hora, hasta luego a las cinco de la tarde.

**Sr. Presidente (Otero).** — La moción de cuarto intermedio hay que votarla y en este momento no tenemos quórum. Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente (Otero).** — Hay quórum en el recinto. ¿Puede repetir su moción de cuarto intermedio, señor senador?

**Sr. Rodríguez Saá.** — Sí, señor presidente.

Los senadores del bloque radical quieren que el cuarto intermedio sea hasta luego a las 11 de la mañana. Yo no tengo inconveniente alguno en modificar mi moción en tal sentido.

**Sr. Presidente (Otero).** — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por San Luis.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Otero).** — En consecuencia, se pasa a cuarto intermedio hasta luego a las 11.

—Es la 1 y 9 del jueves 10 de marzo.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

## II

## INSERCIONES

1

Solicitada por el señor senador Solari Yrigoyen

*Ministerio de Educación y Justicia de la Nación  
Universidad Nacional de Cuyo  
Facultad de Derecho.*

Mendoza, 22 de diciembre de 1987.

Señor senador nacional doctor Hipólito Solari Yrigoyen  
Buenos Aires.

De mi mayor consideración:

En respuesta a su cordial solicitud, me es grato dirigirme a usted a fin de remitirle fotocopia del dictamen producido por el profesor Osvaldo José Lima.

Sin otro particular, salúdole con mi más distinguida consideración.

*Oscar Dimas Agüero.*

Mendoza, 15 de diciembre de 1987.

*Señor decano organizador Facultad de Derecho,  
Universidad Nacional de Cuyo.  
Doctor Oscar Dimas Agüero.  
Mendoza.*

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a objeto de emitir opinión sobre el proyecto "Régimen de participación laboral en las ganancias de las empresas" del que es autor el doctor Hipólito Solari Yrigoyen.

El proyecto llena un vacío legislativo y da cumplimiento a la cláusula constitucional sobre participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección.

En los fundamentos del proyecto se dan las sólidas razones que dan pie a la institución, por lo que sólo me referiré a algunos aspectos del proyecto.

Artículo 1º: Sería conveniente determinar un número mínimo de empleados a partir del cual rija el sistema,

pues en las pequeñas empresas la incidencia del factor trabajo difiere con la dinámica que es propia de las medianas y grandes empresas.

Artículo 3º: Las ganancias a distribuir deberán serlo una vez sacadas las reservas facultativas o con fines determinados, pues de lo contrario se limitan las posibilidades de expansión y modernización de las empresas.

Las mismas razones harían aconsejable compensar años de pérdidas con los de ganancia, pues de lo contrario, a la par de limitar el crecimiento, se dificultan las posibilidades de saneamiento de las mismas.

Artículos 6º a 10º: La creación del Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias implica un nuevo avance de la burocracia argentina.

Dado que se introduce por primera vez la institución en la Argentina y como toda nueva institución necesita un período de adaptación, tal vez sería más conveniente determinar un porcentaje fijo y razonable a distribuir y no crear un complicado sistema a los mismos fines.

Artículo 14: Establecer el mismo derecho a un trabajador de temporada con respecto al permanente, implica una injusticia con relación al segundo. Sería lógico y razonable computar con respecto al trabajador de temporada sólo el lapso efectivamente trabajado.

Artículo 16: Es bueno el sistema del inciso a) de este artículo, pero convendría mejorarlo en el sentido de hacer perder el derecho cuando las ausencias injustificadas lleguen a cierto tope, pues en esa forma la participación en las utilidades, en ese aspecto —inciso a)—, hará asimismo las veces de premio a la asistencia para el empleado cumplidor, que verá acrecentada su participación por el porcentaje perdido por aquel remiso en el cumplimiento de sus obligaciones.

Saludo al señor decano con distinguida consideración.

*Osvaldo J. Lima.*

2

Solicitada por el señor senador Brasesco

Tema	Proyecto Britos/86	Proyecto Brasesco/86	Proyecto Poder Ejecutivo/87
Derecho de los trabajadores	Artículo 4º, inciso e), elegir sus representantes.	Artículo 3º, inciso e), agregar: participar en la vida interna de la asociación. ... Ser elegido y postular candidatos.	Artículo 4º, inciso e), igual al proyecto Brasesco.
Derecho de huelga	Artículo 5º, inciso d), ... ejercer los derechos de huelga, negociación colectiva, participación y demás medidas de acción directa. Artículo 16, inciso f), adopción de medidas de acción directa.	Artículo 4º, inciso d), ejercer los derechos de huelga, negociación colectiva y participación. Artículo 9º, inciso f), procedimiento para el ejercicio del derecho de huelga y determinación del órgano estatutario para declararla.	Artículo 5º, inciso d), igual al proyecto Britos. Artículo 16, inciso i), procedimiento para disponer medidas de acción directa.

Tema	Proyecto Britos/86	Proyecto Brasesco/86	Proyecto Poder Ejecutivo/87
Confederaciones	Artículo 11, inciso c), ... que agrupen federaciones o uniones.	Artículo 5º, inciso c), que agrupen entidades de grado inferior.	Artículo 11, inciso c), similar al proyecto Britos.
Jubilados	Art. 14, última frase, mantienen su condición de afiliados.	Artículo 6º, inciso 4º, ... mantienen la condición sólo con derecho a servicios sociales, asistenciales, culturales, conforme a los estatutos.	Artículo 14, similar al proyecto Britos. Mantienen la condición de afiliados, con todos los derechos y obligaciones que establecen los estatutos.
Democracia interna	Artículo 8º, inciso c).  Artículo 16, inciso g).	Artículo 9º, inciso 1), apartado d), agrega que las seccionales y delegaciones tendrán autonomía en la recaudación y administración de los recursos. Artículo 9º, inciso g), ley y reglamentación.	Artículo 8º, inciso c), igual al proyecto Britos. Se quita la palabra "delegaciones". Artículo 16, inciso g), agrega la no exigencia de avales superiores al 3 % de los afiliados.
Término del mandato	Artículo 17, último párrafo, no exceden de 4 años, con derecho a la reelección.	Artículo 10, última frase, no exceden de 3 años. Nada dice de la reelección.	Artículo 17, similar al proyecto Britos.
Requisito para ser directivo	Artículo 18, inciso b). Artículo 18, inciso c), actividad durante 2 años.	Artículo 11, inciso b), agrega: ni encontrarse procesado ni sujeto a condena pendiente de cumplimiento por delito doloso. Artículo 11, inciso c), afiliación con 2 años anteriores.	Artículo 18, inciso b), no tener inhibiciones civiles ni penas. Artículo 18, inciso c), tener 2 años de afiliación y encontrarse desempeñando actividad con 2 años.
Asambleas extraordinarias	Artículo 19, inciso b), a solicitud del 10 % de afiliados.	Artículo 12, inciso b), reduce al 5 %.	Artículo 19, inciso b), cambian los porcentajes; se elevan al 15 % en asamblea de afiliados y al 33 % en asamblea de delegados congresales.
Atribuciones asambleas	Artículo 20, no lo considera. Artículo 20, inciso d), fijar monto de cuotas y de contribuciones ordinarias y extraordinarias. Artículo 20, inciso e), dar apoyo a partidos políticos o a candidatos.	Artículo 13, inciso a), agrega: fijar criterios generales de actuación, definir líneas de acción sindical... Artículo 13, inciso e), sólo cotizaciones ordinarias y extraordinarias. No se contempla.	Artículo 20, inciso a), queda "fijar criterios generales de actuación"; se quita "definir líneas de acción sindical". Artículo 20, inciso e), igual proyecto Brasesco. No se contempla.
Publicación estatutos de simplemente inscripta Facultades de simplemente inscripta	Artículo 22, dispone inscripción en 60 días. Publicación en Boletín Oficial. Artículo 23, incisos a) y b). a) Representar los intereses individuales a petición de parte. b) Representar los intereses colectivos cuando no haya sindicato con personería gremial.	Artículo 15, en 45 días. No se especifica el órgano de publicación.  Artículo 16, incisos b) y c). b) Representar los intereses individuales. c) Igual a b) de Britos.	Artículo 22, inscripción en 90 días. Publicación en el Boletín Oficial.  Artículo 23, inciso a). a) Similar a proyecto Britos. b) Igual a proyecto Britos, agregando "categoría".
Derechos exclusivos de las asociaciones con personería gremial	Artículo 31, inciso c). c) Decretar medidas de acción directa. Artículo 31, inciso f). f) Administrar obras sociales.	Artículo 20, se omite. Se omite.	Artículo 31, se omite. Artículo 31, inciso f), se amplía el proyecto Britos, a la participación en la administración de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo.

Tema	Proyecto Britos/86	Proyecto Brasesco/86	Proyecto Poder Ejecutivo/87
Representación minorías	No se contempla.	Artículo 21, inciso 1º, apartado b), ... en los órganos de dirección, cuando supere el 20 % de los votos emitidos.	Artículo 8º, inciso d), la única mención es en este artículo donde la representación de las minorías se circunscribe a los cuerpos deliberativos.
Acceso a libro de afiliados, padrón electoral y registraciones contables	No se contempla.	Artículo 21, inciso 1º, apartado c).	No se contempla.
Avales	No se contempla.	Artículo 21, inciso 2º).	Artículo 16, inciso g), no puede superar el 3 % de los afiliados la exigencia para presentación de listas.
Aportes de afiliaciones a sindicatos de 2º y 3º grado	Artículo 37.	No se contempla.	No se contempla.
Sindicato de oficio, profesión, categoría	Artículo 30, intereses diferenciados.	Artículo 22, inciso 3º, intereses diferenciados.	Artículo 30, intereses diferenciados y "siempre que la unión o sindicato preexistente no comprenda en su personería la representación de dichos trabajadores".
Intervención	Artículo 36, si los estatutos consagran esta facultad.	Artículo 26, no pueden intervenir.	Artículo 36, el máximo órgano deliberativo, si los estatutos consagran esta facultad
Patrimonio	Artículo 38, inciso a). a) Cotizaciones y contribuciones. Artículo 39, prevé los del artículo 38, inciso a) y otros aportes a las asociaciones de cualquier grado. Ver con artículo 9º, último párrafo.	Artículo 27, inciso 1º, apartado a). a) Cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y contribuciones de solidaridad. Artículo 28, no se contempla, salvo las que correspondan a las de primer grado.	Artículo 37, incisos a), b) y c), igual proyecto Brasesco. Artículo 38, obligación de retener cuotas de afiliación y otros aportes que deban tributarse a las asociaciones con personería gremial.
Exención impositiva	Artículo 40, servicios de obras sanitarias.	Artículo 27, inciso 3º, no se contempla. Especifica "destinados a la actividad sindical"	Artículo 39, similar al proyecto Britos. Se amplía la gestión del Poder Ejecutivo hacia las provincias.
Delegados de personal, comisiones internas o similares	Artículo 41, inciso a), representan ante la autoridad administrativa del trabajo.	Artículo 30, no lo contempla.	Artículo 40, igual al proyecto Britos; en el inciso a) se especifica "cuando la autoridad administrativa actúe de oficio en los sitios mencionados".
Requisitos para ser representante	Artículo 42, inciso b), elección por los trabajadores comprendidos en el ámbito de actuación del sindicato.	Artículo 31, elección por los trabajadores afiliados y no afiliados.	Artículo 41, inciso a), "por el voto de los trabajadores cuya representación deba ejercer".  "Antigüedad afiliación: 1 año".

Tema	Proyecto Britos/86	Proyecto Brasesco/88	Proyecto Poder Ejecutivo/87
	Artículo 42, inciso c), sustituye la antigüedad en la afiliación por la empresa, cuando son trabajos a plazo determinado de temporada o eventual.	No se contempla.	Artículo 41, inciso b).
		Artículo 31, inciso 2º), las listas deberán ser presentadas por el síndico o por un número de afiliados igual al de los cargos a cubrir.	No se contempla.
		Artículo 31, inciso 3º), nulidad de las cláusulas estatutarias o convencionales, que establezcan requisitos más restrictivos.	No se contempla. (Salvo artículo 16, inciso g.)
Revocación de mandatos	Artículo 43, por asamblea convocada por el 10 % de afiliados y con derecho a defensa del representante. Mandato: 2 años.	Artículo 32, por voto directo y secreto por elección dispuesta por asamblea convocada por el 5 % de afiliados. Mandato: 2 años y reelección.	Artículo 42, la primera parte igual al P. Britos. Se agrega: "...cuando lo prevean los estatutos se podrá revocar por los 2/3 de la asamblea o del congreso de la asociación". Mandato: 2 años. (Nada dice de reelección.)
Actuación representantes	Artículo 44, se reglamenta por convenio.	No se contempla.	Artículo 46, se habla de regulación de la tarea de los delegados pero no se establece si es por reglamentación o por convenios. (Por deducción sería por convenios.)
Derecho de los representantes	Artículo 45, incisos a) y e), pueden pedir la intervención de la autoridad administrativa del trabajo.	Artículo 33, no lo contempla, inciso d) "sugerencias y reclamaciones".	Artículo 43, inciso a), verificar las normas y participar en las inspecciones que disponga la autoridad administrativa. Artículo 43, inciso c), presentar las reclamaciones de los trabajadores previa autorización del sindicato.
	Artículo 45, inciso b), detalla en 3 apartados los derechos a la información.	Artículo 33, inciso b), remite a la ley de participación informativa y consultiva (mensaje del Poder Ejecutivo nacional 1.317).	No se contempla.
	Artículo 45, inciso d), control del poder disciplinario y de despidos y suspensiones por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor.	Artículo 33, se omite. (Está en el proyecto y mensaje 1.317 del Poder Ejecutivo nacional.)	No se contempla.
Horas de crédito	Artículo 46, inciso e), acumulables.	Artículo 34, inciso c), reduce el número de horas con respecto al P. Britos.	Artículo 44, inciso c), no habla de acumulables y deriva a lo que establezca la convención colectiva.

Tema	Proyecto Britos/86	Proyecto Brasesco/86	Proyecto Poder Ejecutivo/87
Cantidad de representantes	Artículo 47, cantidad igual al decreto 969/66.	Artículo 29, inciso a), reduce el número con respecto al P. Britos y al decreto 969/66. No habla de lo acordado en convenios colectivos.	Artículo 45, habla de lo acordado en convenios colectivos.
Licencia gremial	Artículo 49, licencia por desempeño en cargos políticos. No se contempla.	Artículo 36, inciso b), licencia por desempeño de cargos electivos. La estabilidad cede ante justa causa de despido.	Artículo 48, licencia en cargos electivos, cargos políticos en poderes públicos. La estabilidad cede ante justa causa de despido.
Despido de trabajadores	Artículo 52, se prohíben los despidos <i>de todos</i> los trabajadores y las modificaciones de las condiciones de trabajo durante la convocatoria a elecciones. Artículo 53, postulación; 1 año.	No lo contempla. Artículo 39, oficialización; salvo justa causa de despido.	Artículo 52, no se contempla una fórmula tan amplia. Artículo 50, postulación, por 6 meses, salvo justa causa.
Estabilidad de los fundadores	Artículo 54, estabilidad por 1 año.	No se contempla.	No se contempla.
Exclusión de la tutela de estabilidad	Artículo 56, procede si hay resolución judicial, siendo amplia y total la exclusión.	Artículo 40, exclusión transitoria, previéndose como medida cautelar emanada de la justicia.	Artículo 52, los trabajadores amparados en los artículos 48 y 50 no podrán ser despedidos, suspendidos, ni modificarse condiciones de trabajo sin resolución judicial que los excluya de la garantía del artículo 47.  El juez puede disponer la suspensión como medida cautelar.
Prácticas desleales	Artículo 57, inciso e), rehusarse a negociar colectivamente o provocar su dilación.  Inciso d), medidas de acción directa.  Artículo 57, inciso f), despedir, suspender, modificar condiciones de trabajo para vulnerar los derechos de esta ley.  Inciso g), no reservar el empleo o no reincorporar al mismo.  Inciso i), trato discriminatorio.	Artículo 42, inciso e), rehusarse a negociar colectivamente y de buena fe.  Inciso d), lo contempla si está previsto en la ley.  Inciso f), "que gocen de estabilidad"...  No se contempla.  Incluido en el inciso d), del artículo 42.	Artículo 53, inciso f), igual a P. Britos.  Inciso e), "medidas de acción directa, agrega acusación, testimonio, intervención...".  Inciso g), igual P. Britos.  Inciso h), similar P. Britos.  Inciso j), igual P. Britos. (En general bastante específico el capítulo.)

Tema	Proyecto Britos/86	Proyecto Brasesco/86	Proyecto Poder Ejecutivo/87
Intervención de la autoridad administrativa	Artículo 58, prohíbe la intervención y en especial la restricción en el manejo de fondos.  Artículo 59, 3º, inciso b). No se contempla.	Artículo 21, inciso c) y artículo 45, inciso 5º), en caso de impedirse al afiliado el acceso a los registros contables, la autoridad administrativa a pedido del 5 % de los afiliados, puede obtener amparo ante el juez, por vía del procedimiento para medidas cautelares.  No se contempla.	Artículo 57, igual P. Britos.  Artículo 56, 3º, inciso b), cuando haya comprobación de graves irregularidades administrativas, el Ministerio de Trabajo podrá disponer medidas cautelares en sede administrativa.  Artículo 56, 4º, "disponer la convocatoria a elecciones de los cuerpos que tienen a cargo la dirección, administración...".
Resolución de diferendos	Artículo 62, resuelve la autoridad administrativa agotada la vía asociacional.	Artículo 23, inciso 1º, resuelve la justicia luego de agotada la vía asociacional.	Artículo 60, asociación — autoridad administrativa — justicia ley 19.549.
Querella por práctica desleal	Artículo 68, la puede interponer el damnificado a la asociación sindical.	Artículo 44, la interpone sólo la asociación sindical.	Artículo 54, igual P. Britos, <i>pero no establece tiempo</i> .
Prescripción de acciones	Artículo 69, por cobro de indemnizaciones y salarios.	No se contempla.	Artículo 52 (última parte).
Querella como acción facultativa	Artículo 70.	No se contempla.	No se contempla.
Consecuencias de las prácticas desleales	Artículo 71, inciso a). Inciso b), reincorporación del despedido o suspendido o restablecimiento de las condiciones de trabajo modificadas.	No se contempla. Artículo 40, inciso 1º), el trabajador puede demandar judicialmente la reinstalación en el puesto de trabajo o el restablecimiento de las condiciones de trabajo.	No se contempla. Artículo 52, se puede demandar judicialmente la reinstalación o el restablecimiento de condiciones.  Situación — despido indirecto.
Multa por práctica desleal	Artículo 72, por incumplimiento de la resolución judicial 10 % por cada 5 días de mora.  No se contempla.	Artículo 43.  No se contempla.	Artículo 55, inciso 1º), fijadas de acuerdo a la ley 18.694.  Inciso 2º), contempla a las entidades de empleadores.
Normas operativas	No se contempla.	No se contempla.	Artículo 65, son operativas, salvo que los artículos se remitan expresamente a la reglamentación.

## DELEGADOS SINDICALES

1) Decreto ley 23.852/45: (Nada dice.) Artículo 3: reserva de empleo.

2) Decreto ley 9.270/56: (Nada dice.) Artículo 18: reserva de empleo.

3) Ley 14.455/58: (Reglamentada por decreto ley 669/66.) Artículo 18: a falta de disposiciones expre-

sas en las convenciones colectivas, el número máximo total de ..... no podrá exceder: 5 a 15 trabajadores, 1 representante; 16 a 40 trabajadores, 2 representantes; 41 a 70 trabajadores, 3 representantes; 71 trabajadores en adelante, 1 representante más por cada 50 trabajadores.

4) Ley 20.615/73: (Reglamentada por decreto 1.045/74). Artículo 12 (50): A falta de disposiciones ex-

presas en las convenciones colectivas, el número máximo total de ..... no podrá exceder: 5 a 15 trabajadores, 1 representante; de 16 a 40 trabajadores, 2 representantes; de 41 a 70 trabajadores, 3 representantes; de 71 trabajadores en adelante, 1 representante por cada cincuenta (50) trabajadores. Habla la ley de delegados y subdelegados de personal.

5) Ley 22.105 (artículo 49): Reglamentación (artículo 19) y decreto posterior.

6) Acuerdo Britos-Brasesco (ley reordenamiento sindical): 5 a 15 trabajadores, 1 delegado; 16 a 40 trabajadores, 2 delegados y 1 subdelegado; 41 a 70 trabajadores, 3 delegados y 1 subdelegado; 71 trabajadores en adelante, 1 delegado titular por cada 50 trabajadores. Se tuvo en cuenta el decreto 969/68 y el decreto 1.045/74.

7) Proyecto Britos (artículo 47): Sin perjuicio de lo acordado en convenios u otras normas, el número mínimo de representantes será: 5 a 15 trabajadores, 1 representante; 16 a 40 trabajadores, 2 representantes; 41 a 70 trabajadores, 3 representantes; 71 trabajadores en adelante, 1 representantes por cada 50 trabajadores.

8) Proyecto Brasesco (artículo 29): No habla de convenios.

De 10 a 50 trabajadores, 1 representante; de 51 a 100 trabajadores, 2 representantes; de 101 a 300, 2 representantes más por cada 50 trabajadores que excedan de los primeros 100; de 301 trabajadores en adelante, 6 representantes, más uno por cada 100 trabajadores que excedan de los primeros 300.

9) Proyecto Poder Ejecutivo (artículo 45): A falta de normas en las Convenciones Colectivas ..... el número mínimo .... será: de 5 a 15 trabajadores, 1 representante; de 16 a 50 trabajadores, 2 representantes; de 51 a 100 trabajadores, 3 representantes; 101 trabajadores en adelante, 1 representante por cada 100 trabajadores.

## SINTESIS DE JURISPRUDENCIA

### INDICE ALFABETICO

- I. Abandono de tareas: 42, 43
- II. Acción directa: 11 a 20, 44 a 57
- III. Acción ilegal (ver Acción directa)
- IV. Acción ilícita (ver Acción directa)
- V. Arbitraje: 123 a 126
- VI. Brazos caídos (ver Paros parciales)
- VII. Calificación administrativa: 97 a 104
- VIII. Causa de despido: 75 a 78
- IX. Concertación: 2 a 4 (ver Medidas de acción directa)
- X. Conciliación (ver Arbitraje)
- XI. Derecho constitucional: 12, 42 a 57
- XII. Desgano (ver Trabajo a desgano)
- XIII. Despido: 71, 72 (ver Causa de despido)
- XIV. Discriminación: 102 a 104

- XV. Efectos de la calificación administrativa: 97 a 104
- XVI. Efectos sobre el contrato: 67 a 95
- XVII. Fábrica (ver Ocupación)
- XVIII. Fehaciente (ver Intimación)
- XIX. Huelga (ver Sumario analítico)
- XX. Huelga de solidaridad: 51 a 53
- XXI. Injuria: 73 a 74
- XXII. Injustificado (ver Despido)
- XXIII. Intimación: 42
- XXIV. Legítima: 32 a 36
- XXV. Ley 21.261: 105
- XXVI. Ley 21.400
- XXVII. Lock-out: 119 a 122
- XXVIII. Medidas de acción directa (ver Sumario analítico)
- XXIX. Ocupación: 54 a 57
- XXX. Paro (distinción con la huelga: ver Sumario analítico)
- XXXI. Paro ilícito (ver Medidas de acción directa que no constituyen huelga en sentido constitucional)
- XXXII. Paro parcial: 44 a 49
- XXXIII. Participación: 5 a 10
- XXXIV. Práctica deslegal: 96
- XXXV. Previa (ver Intimación)
- XXXVI. Reglamento (ver Trabajo a reglamento)
- XXXVII. Rehenes (ver Ocupación)
- XXXVIII. Remuneración: 69, 70
- XXXIX. Solidaridad (ver Huelga de solidaridad)
- XL. Suspensión de la relación laboral (ver Efectos sobre el contrato)
- XLI. Suspensión del derecho de huelga: 105 a 116
- XLII. Titular del derecho: 37, 38
- XLIII. Toma de rehenes (ver Ocupación)
- XLIV. Trabajo a desgano: 50
- XLV. Trabajo a reglamento (ver Trabajo a desgano).

## I. MEDIDAS DE ACCION DIRECTA

1. — La efectivización de medidas de acción directa debe ser precedida por un periodo en el que intervenga la autoridad administrativa laboral que en el orden nacional establece la ley 14.796 (CNTab., sala III, 28 de abril de 1978, "Bobinac, Elías c/La Prensa, S.C.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 478; T. y SS, 1978, página 415; L. T., tomo XXVI, página 847.

### I.1. Concentración

2. — Una medida de fuerza que abarca a más de mil personas entre personal técnico y obrero, no puede ser sino expresa o tácitamente concertada (CNTab.,

sala VI, 12 de septiembre de 1979, "Ferraris, Alfredo R. y otro c/Siam Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1161.

3. — La concertación de una medida de acción directa se configura no sólo cuando expresamente se ha instrumentado en un acta o un documento inscripto, sino también (en forma tácita) cuando se presenta la actitud concurrente de conductas coincidentes de un grupo de trabajadores que suspenden en forma simultánea la prestación laboral, paralizando las tareas (CNTrab., sala II, 11 de marzo de 1980, "Rodríguez, Héctor y otro c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 1322; L. T., tomo XXVIII, página 860.

4. — Aunque un paro no se haya decretado previa firma de un acta, no pierde el carácter de concertado en la medida en que haya existido un concierto o simultaneidad (CNTrab., sala III, 31 de octubre de 1979, "Flores Abad, Prudencio c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 225.

## 1.2. Participación

5. — La participación en el hecho de impedir, durante prácticamente todo el día, que alguien entre o salga del establecimiento, configura una violencia sobre las personas, que justifica el despido (CNTrab., sala VI, 28 de noviembre de 1975, "Herner, Luis R. c/Frigoríficos Argentinos, S.A."), T y SS, 1976, página 229.

6. — La participación en una medida de acción directa concertada y deliberada que contribuyó a la paralización de la producción, se encuentra prohibida y sancionada con el despido en los artículos 1º, inciso b) y 8º, *in fine* de la ley 21.400, razón por la cual no corresponde indemnización alguna (CNTrab., sala I, 26 de septiembre de 1978, "San Martín, Alfredo c/Chrysler Fevre Argentina, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 101; L. T., tomo XXVIII, página 364.

7. — Aun cuando los actores hubieran formado parte del personal que se abstuvo de trabajar, si no se demostró su intervención activa en los episodios habidos durante el transcurso del conflicto, el despido es injustificado (CNTrab., sala V, 7 de septiembre de 1979, "Álvarez López, Horacio A. y otro c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1270.

8. — El encuadramiento de la situación por el empleador y la especificidad de la inobservancia imputada a los actores, obsta al acogimiento de la defensa, pues la adjetivación de "activa" implica semántica y conceptualmente un accionar diligente, eficaz, concreto y despoja a la "participación" a secas de connotación injuriosa para el dador de trabajo (CNTrab., sala V, 7 de septiembre de 1979, "Álvarez López, Horacio A. y otro c/Siam Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1270; L. T., tomo XXVIII, página 364; T y SS, 1979, página 597.

9. — Aun en el caso en que el personal hubiera interpretado que le correspondía un premio a la productividad y la empresa no se lo hubiera pagado por interpretar lo contrario, ello no justifica una medida de fuerza sorpresiva, sin intervención de la organización sindical correspondiente, desoyéndose las intimaciones del Ministerio de Trabajo, y cuyo cese se produjera recién al intervenir las fuerzas de seguridad (CNTrab., sala II, 3 de noviembre de 1980, "Rodríguez, Héctor y otros c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 1322; L. T., tomo XXVIII, página 860.

10. — No es necesaria la demostración de la participación activa en un acto previsto por la ley 21.400, ya que la sola participación en la medida de fuerza basta para configurar la injuria (TTrab. Nº 1 Quilmes, 7 de agosto de 1980, "Cadel, Beatriz M. c/Complejo Textil Bernalesa S.R.L."), revista "Derecho del Trabajo", 1981, tomo XLI-A, página 277).

## 1.3. Acción directa ilícita o ilegal

11. — El hecho de participar en un movimiento de acción directa calificado ilícito o ilegal, importa de por sí injuria a los intereses del empleador que autoriza la cesantía; empero la empresa no puede hacer uso de ese derecho sin advertir al personal que adoptará esa medida en el caso que continúe esa acción (CNTrab., sala II, 30 de junio de 1971, "Gómez, Carlos A. y otros c/Usina Santa Brígida"), revista "Derecho del Trabajo", 1972, tomo XXXII, página 208.

12. — Ninguna disposición de una convención colectiva ni una torcida aplicación de la ley 14.250, pueden convalidar violaciones a otros derechos y garantías constitucionales de igual rango que el derecho de huelga que consagra el artículo 14 "nuevo" de la Constitución Nacional. La disposición de la convención colectiva (del personal aeronavegante) según la cual la actividad gremial o sindical del trabajador no podrá ser causal de cesantía, no excluye la facultad de despedir al dependiente que participó reiteradamente en medidas de fuerza ilegales (CNTrab., sala III, 29 de octubre de 1971, "Godí, Salvador c/Braniff Airways"), revista "Derecho del Trabajo", 1972, tomo XXXII, página 64.

13. — Si bien los delegados gremiales están obligados, por la representación que invisten, a la defensa de los derechos de los trabajadores, y debe garantizarse el libre ejercicio de su función, este principio no puede llevar a legitimar cualquier medida adoptada por el gremio y cumplida o hecha cumplir por el delegado a fin de obtener la satisfacción de reclamos de orden profesional (CNTrab., sala VI, 28 de febrero de 1975, "López, Francisco E. c/Alba Fábrica de Pinturas", T y SS, 1975, página 839.

14. — Participar en una huelga ilícita no constituye necesariamente, y en todos los casos "injuria" que justifique la disolución del contrato por culpa del trabajador (CNTrab., sala I, 15 de abril de 1977, "Salas, Paulino N. c/Fabina, S.A."), L. T., tomo XXV, página 650.

15. — Formar parte en una huelga ilegítima implica, en el plano de las relaciones individuales, un incumplimiento contractual que debe ser apreciado de acuerdo con las particulares circunstancias del caso y que podrán o no ser motivo justificado para el despido, de acuerdo con las pautas que establece la L. C. T. (artículo 263, t.o.) (CNTrab., sala III, 28 de abril de 1978, "Bobinac, Elías c/La Prensa, S.C.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 478; T y SS, 1978, página 415, L. T., tomo XXVI, página 847.

16. — La actitud del trabajador que organizó una medida de fuerza ilegítima, profiriendo amenazas o incitando al resto del personal a parar es un incumplimiento grave justificativo del despido (CNTrab., sala III, 28 de abril de 1978, "Bobinac, Elías c/La Prensa, S.C.A."), "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 478; T y SS, 1978, página 415; L. T., tomo XXVI, página 847.

17. — Cuando en el movimiento de fuerza no tuvo intervención la organización sindical, debe calificárselo de ilegítimo y no tiene amparo constitucional alguno (CNTrab., sala VI, 12 de septiembre de 1979, "Ferraris, Alfredo R. y otro c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1161.

18. — La ley 21.400 —de carácter excepcional— establece que la participación en una medida de acción directa prohibida, da derecho al empleador a resolver el contrato por justa causa, por implicar, dicha actitud, injuria grave (CNTrab., sala III, 31 de octubre de 1979, "Flores Abad, Prudencio, c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 225.

19. — Es ilegítima la medida de fuerza que se realizó violando la prohibición establecida por la ley 21.400 que, además, se materializó sin cumplirse los recaudos previstos por la ley 14.786 (CNTrab., sala III, 31 de octubre de 1979, "Flores Abad, Prudencio c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 225.

20. — Los trabajadores que participen en cualquier medida concertada de acción directa, paro, interrupción o disminución del ritmo de trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera operen en perjuicio de la producción, incurrir en casual de despido justificado, por aplicación de los artículos 1º y 8º de la ley 21.400 (CNTrab., sala II, 26 de noviembre de 1980, "Rodrigo, Oscar c/Duperial, S.A."), L. T. tomo XXIX, página 566.

### 1.3.1. *Paro ilícito*

21. — Si el trabajador reconoció haber obedecido la orden de parar las máquinas impartida por la comisión interna, su despido fue justificado (CNTrab., sala I, 28 de febrero de 1979, "Paiz, Justino J. y otros c/Kenia, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, t. XXXIX, página 929; L. T., tomo XXVIII, página 364.

22. — Basta la participación en un paro prohibido para que proceda el despido del trabajador en virtud de lo dispuesto por la ley 21.400, sin necesidad de interpelación previa (CNTrab., sala III, 31 de octubre de 1979, "Flores Abad, Prudencio c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", tomo XL, página 225.

23. — Es admisible el despido de un trabajador al día siguiente de su participación en la primera jornada de un paro de actividades que continuó por varios días más, no siendo necesaria intimación previa (artículos 1º, inciso b) y 8º, ley 21.400) (CNTrab., sala VIII, 22 de diciembre de 1980, "Leguiza, Angel S. c/Frenithe, S.A."), L. T., tomo XXIX, página 751.

24. — De conformidad con lo previsto por la ley 21.400, ninguna obligación existe de obtener calificación ilegal de un paro de actividades, pues éstos están lisa y llanamente prohibidos, así como tampoco existe obligación de la empresa de hacer referencia a norma expresa, siendo suficiente la consignación en el telegrama como "legislación vigente", que se presume conocida por todos los habitantes (CNTrab., sala II, sentencia 47.721, 26 de febrero de 1981, "Acosta, Miguel c/Fundiciones San Javier"; ídem, id. sentencia 48.736, 26 de junio de 1981, "Martínez, Atanasio R. c/ENTEL, s/ despido"), L. T., tomo XXIX, página 934 (*Jurisprudencia sintetizada por Francisco Silvano*).

25. — En orden a la aplicación de la ley 21.400, y atento que la misma consagra un régimen de excepción, facultando al Poder Ejecutivo en situación de emergencia —cuando se ha declarado el estado de sitio—, a suspender el ejercicio del derecho de huelga, consagrando en caso de violación de sus normas, un tipo de injuria (artículo 8º) que permite el despido sin derecho a indemnización, basta a tales efectos la participación del trabajador en un paro para despedirlo sin necesidad de interpelación previa (CNTrab., sala II, sentencia 46.705, 11 de marzo de 1980, "Rodríguez, Héctor y otros c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda."; ídem, id. sentencia 48.236, 26 de junio de 1981, "Martínez, Amansio R. c/ENTEL s/despido"), L. T.; tomo XXIX, página 934 (*Jurisprudencia sintetizada por Francisco Silvano*).

## II. HUELGA

26. — La huelga consiste en la abstención colectiva de trabajo por un fin profesional. A falta de una norma reglamentaria, entonces, no corresponde poner condiciones o requisitos adjetivos a ese concepto esencial (CNTrab., sala II, 27 de octubre de 1972, "Gervino, Domingo D. c/Soc. Colectiva La Prensa de Ezequiel C. Paz y Zelmira Paz de Anchorena"), L. T., tomo XXI, página 249.

27. — Cuando una huelga se produce por falta de pago de salarios, el empleador que no cumple el contrato debe contemplar prudentemente los incumplimientos de la otra parte (CNTrab., sala VI, 28 de febrero de 1974, "Abatemarco, Horacio H. c/Eureka, S.A."),

L. T., tomo XXII, página 655; T y SS, 1973/74, página 527.

28. — Conforme al artículo 243, LCT, ley 20.744, vigente a la fecha de los hechos, la huelga y otras medidas de acción directa sólo suspenden los efectos de la relación laboral por todo el período en que se extiendan. (CNTrab., sala IV, 31/5/77, "Barreto, Roberto W. y otros c/López, González, Raimondi y Asociados"), revista "Derecho del Trabajo", 1977, tomo XXXVII, página 791.

29. — Para que un acto de huelga (que incluye lo que normalmente se designa como "paro") sea legítimo, es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos de fondo y forma que constituyen una reglamentación razonable del principio establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional respecto de la garantía del derecho de huelga a favor de los gremios. En primer lugar, el titular de ese derecho de carácter colectivo es el sindicato, y debe ser declarada por la vía que establece el estatuto de la asociación profesional, lo que no ocurre en el caso de las llamadas "huelgas salvajes" que se llevan a cabo por propia decisión de los trabajadores o de los dirigentes de bases, como son los miembros de la comisión interna. (CNTrab., sala III, 28/4/78, "Bobinac, Elías c/La Prensa S.C.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 478; T. y S.S., 1978, página 415; L.T., tomo XXVI, página 847.

30. — Cuando en nuestro sistema legal tiene vigencia efectiva el derecho de huelga, cuya titularidad corresponde a los gremios, la protección reconocida a los huelguistas alcanza a los líderes del grupo —activistas— aunque actúen fuera de la órbita de la asociación profesional por tratarse de una coalición. (CNTrab., sala IV, 12/2/79, "Nardi, Héctor c/Compañía Nobleza de Tabacos S.A."), T y S, 1979, página 367.

31. — La declaración de inconstitucionalidad de una norma (en el caso artículo 11 de la ley 21.400) requiere no sólo la aserción de que la misma puede causar agravio constitucional, sino que se haya afirmado y acreditado, que así sucede en el caso. (CNTrab., sala VIII, 6/4/81, "Rodríguez Moreno, Rubén c/Sociedad Mixta Siderurgia Argentina"), revista "Derecho del Trabajo", 1981, tomo XLI-B, página 1064.

## II.1. Legítimo ejercicio

32. — Las asociaciones profesionales pueden por medio de la lucha sindical obtener una revisación anticipada de los convenios colectivos, pero esa sola circunstancia no implica que las medidas de fuerza puedan ser calificadas de ilegítimas. (CNTrab., sala II, 27/10/72, "Gerbino, Domingo D. c/Sociedad Colectiva La Prensa de Ezequiel C. Paz y Zelmira Paz de Anchorena"), L. T., tomo XXI, página 249.

33. — Reconocida por el empleador la insuficiencia del salario establecido en la convención colectiva —ante la alteración fundamental del costo de vida— no es

ilícita la huelga declarada para obtener su modificación. (CNTrab., sala II, 27/10/72, "Gerbino, Domingo D. c/Sociedad Colectiva La Prensa de Ezequiel C. Paz y Zelmira Paz de Anchorena"), L. T. tomo XXI, página 249.

34. — La existencia de deudas por remuneraciones justifica la decisión de los trabajadores de retener sus prestaciones hasta tanto los créditos no sean saldados. (CNTrab., sala VI, "Abatemarco, Horacio H. c/Eureka, S.A."), L. T., tomo XXII, página 655; T. y S.S., 1973/74, página 527.

35. — La ley 20.638 —que estableció la vigencia del decreto ley 16.936/66—, es sin lugar a dudas la reglamentación del legítimo ejercicio del derecho de huelga. (CNTrab., sala III, 19/9/74, "Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines"), revista "Derecho del Trabajo", 1975, tomo XXXV, página 305.

36. — Ante el total incumplimiento contractual de la empleadora, la negativa de los trabajadores a tomar tareas no es una medida de carácter ilícito, sino una autotutela individual autorizada incluso por el derecho civil (artículo 1201, Código Civil). En consecuencia, corresponde indemnizar al dependiente cuyo despido se produjo a raíz de su participación en una "huelga de brazos caídos", si la misma se debió a una situación de extrema necesidad. (CNTrab., sala I, 15/4/77, "Salas, Paulino N. c/Fabina, S.A."), T. y S.S., 1977, página 637; L. T., tomo XXV, página 650.

—Ver también en I, "Bobinac, Elías c/La Prensa, S.C.A.", revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 478, etcétera.

## II.2. Titular del derecho

—Ver en II, "Barreto, Roberto W. y otros c/López, González Raimondi y Asociados", revista "Derecho del Trabajo", 1977, tomo XXXVII, página 791.

37. — El derecho de huelga puede ser ejercido por un grupo de trabajadores no institucionalizado pues el artículo 14 bis de la Constitución Nacional al referirse a "gremios" lo ha hecho en tal sentido, sin establecer requisito alguno en cuanto a que los mismos pertenezcan a una organización profesional con personería gremial o simplemente inscrita. (CNTrab., sala IV, 31/5/77, "Barreto, Roberto W. y otros c/López, González, Raimondi y Asociados") revista "Derecho del Trabajo", 1977, tomo XXXVII, página 791, T. y S.S., 1978, página 25.

—Ver también en I, "Bobinac, Elías c/La Prensa S.C.A.", revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 478, etcétera.

—Ver también en II, "Nardi, Héctor c/Compañía Nobleza de Tabacos S.A.", T. y S.S., 1979, página 367.

38. — El titular del derecho de huelga es el sindicato y debe ser declarada por la vía que establece el estatuto de la asociación profesional, lo cual no ocurre

con las llamadas huelgas salvajes que se llevan a cabo por propia decisión de los trabajadores o dirigentes de bases, como los miembros de la comisión interna. Además, dicha medida al efectivizarse debe ir precedida por un período de intervención de la autoridad administrativa laboral en el orden nacional como lo establece la ley 14.788 (CNTrab., sala VI, 12/9/79, "Ferraris, Alfredo R. y otro c/Siam Sociedad Industrial Maquinarias Di Tella Limitada", revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1161).

—Ver también en II, "Rodríguez Moreno, Rubén c/Sociedad Mixta Siderurgia Argentina", revista "Derecho del Trabajo", 1981, tomo XLI-B, página 1064.

### II.3. Derechos constitucionales de igual rango

—Ver en I.3., "Godí, Salvador c/Braniff Airways", revista "Derecho del Trabajo", 1972, tomo XXXII, página 64.

### II.4. Distinción con el paro

39. — No cabe hacer distinciones entre la huelga y los llamados paros; en consecuencia, resultan arbitrarios los despidos practicados por haber participado en paros que tenían un fin profesional y se efectuaron observando el procedimiento previo de conciliación (CNTrab., sala II, 31/10/72, "Raymond, Antonio P. y otros c/Dirección Nacional de Fabricaciones Aeronáuticas"), revista "Derecho del Trabajo", 1973, tomo XXXIII, página 292.

40. — Debe distinguirse la huelga de los paros como medida de fuerza, ya que esta situación no está protegida ni por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ni por los artículos 13, 14 y 16 de la ley 6.014 (SC Buenos Aires, 7/8/79, "Almirón, Adolfo Aldo R. y otros c/Bertrán Hermanos y Compañía"), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1150; L. T., tomo XXVIII, página 268.

41. — El derecho de huelga protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional no comprende el paro parcial con ocupación del establecimiento (SC Buenos Aires, 10/9/78, "Maróni, Armando c/Vasa Vidriería Argentina s/horas extras", "Diario de Jurisprudencia Judicial", 28/3/79; L. T., tomo XXIX, página 935 (jurisprudencia sintetizada por Francisco Silvano).

## III. MEDIDAS DE ACCION DIRECTA QUE NO CONSTITUYEN HUELGA EN SENTIDO CONSTITUCIONAL

### III.1. Abandono de tareas

42. — Aunque la conducta de los trabajadores no se hubiera encuadrado en el artículo 244 de la LCT, ley 21.297, el abandono de tareas se encontraba legislado en el artículo 265 de la LCT, último párrafo, ley 20.744, que exigía previo al despido, la constitución en mora mediante intimación hecha en forma fehaciente, lo cual no se ha cumplido en autos (CNTrab., sala IV,

31/5/77, "Barreto, Roberto W. y otros c/López, González, Raimondi y Asociados", revista "Derecho del Trabajo", 1997, tomo XXXVII, página 791; T. y S.S., 1978, página 25.

43. — El abandono masivo de tareas y del lugar de trabajo antes de la finalización normal de la jornada con la consecuente paralización de servicios (sin permiso especial para hacerlo), hace incurrir al trabajador en violación de los deberes esenciales de colaboración, diligencia y solidaridad (CNTrab., sala I, 26/9/78, "San Martín, Alfredo c/Chrysler Fevre Argentina, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 101; L. T., tomo XXVIII, página 364,

### III.2. Paros parciales. Brazos caídos

44. — No resulta ilícito por razón de su forma el paro parcial que se cumple en el lugar de trabajo (CNTrab., sala II, 27/10/72, "Gerbino, Domingo D. c/Soc. Colectiva 'La Prensa', de Ezequiel C. Paz y Zelmira Paz de Anchorena"), L. T., tomo XXI, página 249.

45. — No debe confundirse, el paro de brazos caídos, que supone una actitud pasiva de los trabajadores, con la ocupación del establecimiento que implica una conducta activa (CNTrab., sala I, 15/4/77, "Salas, Paulino N. c/Fabina S.A."), L. T., tomo XXV, página 650.

46. — Si el paro de brazos caídos se debió a una situación de extrema necesidad traducida en la falta de pago de salarios por casi cuatro meses, no se justifica el despido del trabajador (CNTrab., sala I, 15/4/77, "Salas, Paulino N. c/Fabina S.A."), L. T., tomo XXV, página 650.

47. — El paro no es por sí mismo un acto de carácter ilícito o ilegal, aunque se manifiesta a través de la suspensión de las tareas con permanencia en el lugar de trabajo (CNTrab., sala III, 28/4/78, "Bobinac, Elías c/'La Prensa' S.C.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 478; T. y S.S., 1978, página 415; L. T., tomo XXVI, página 847.

48. — No resulta ilegítimo el paro con permanencia en el lugar de trabajo en la medida en que el trabajador no se alce contra la intimación de desocupación (CNTrab., sala III, 28/4/78, "Bobinac, Elías c/'La Prensa', S.C.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 478; T. y S.S., 1978, página 415; L. T., tomo XXVI, página 847.

49. — Los paros en el lugar de trabajo sin prestación de servicios, no configuran injuria suficiente para justificar el despido si el empleador, a su vez, era moroso en sus obligaciones, adeudaba remuneraciones y no intimó previamente al trabajador para que abandonara el establecimiento (CNTrab., sala VI, 28/3/79, "Osorio, Hugo A. c/Fabina S.A."), L. T., tomo XXVII, página 552 y tomo XXVIII, página 365.

—Ver también en I.1., "Flores Abad, Prudencio c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda.", revista "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 225.

—Ver también en II.4. "Maroni, Armando c/VASA Vidriería Argentina s/horas extras", L. T., tomo XXIX, página 936.

### III.3. Trabajo a desgano y a reglamento

50. — Admitido por el trabajador que la voluntaria baja de su rendimiento obedeció a un acuerdo celebrado por todos los operarios del establecimiento, con la naturaleza y características de una medida de fuerza, y decidida en respuesta a la suspensión de un adicional, tal actitud configura un comportamiento de aquellos prohibidos por la ley 21.400. (TTrab. Nº 2 Lanús, 23/2/70, "Passalacqua, Alberto c/Capea, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1030.

### III.4. Huelga de solidaridad

51. — Es ilegítima la huelga de solidaridad con trabajadores de otras actividades afectados por un cambio legislativo de sus condiciones de trabajo (en el caso los empleados marítimos se solidarizaron con los portuarios), pues el empleador resulta impotente para impedir que el legislador ejerza las atribuciones que le son privativas respecto del régimen laboral de otros sectores del trabajo dependiente, ajenos a él. (CNTrab., sala III, 10/9/71, "Coman, Daniel O. c/Flota Fluvial del Estado Argentino"), L. T., tomo XX, página 275.

52. — Es ilegal la huelga tendiente a lograr la reincorporación de un trabajador despedido con causa justificada. (CNTrab., sala VI, 29/3/73, "Errubi Velázquez, Félix c/Tercio, S.R.L."), L. T., tomo XXI, página 840.

53. — Si bien la huelga de solidaridad no es ilícita por sí, sino que su calificación está condicionada con relación a los hechos y personas con quienes la solidaridad es practicada, cabe considerarla ilegal cuando es declarada por solidaridad con el personal despedido por el empleador, pues en tales circunstancias no corresponde a un interés colectivo o gremial. El despido de un dirigente gremial por haber injuriado a la patronal o por otra causa distinta a las que enumera el artículo 42 de la ley 14.455 no constituye, por sí mismo, un conflicto colectivo, pues si el dirigente despedido estima que lo ha sido injustamente, debe acudir a los órganos jurisdiccionales para que así lo declaren. (SC Buenos Aires, 7/8/79, "Almirón, Aldo R. y otros c/Bertrán Hnos. y Cía."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1150.

### III.5. Ocupación de fábricas. Toma de rehenes

54. — En el caso de ocupación de la fábrica es justificado el despido de los trabajadores que no han probado no haber participado en dicha ocupación, o que no manifestaron expresamente su disconformidad o su imposibilidad de entrar o salir, o que no justificaron sus ausencias. (CNTrab., sala III, 19/2/73, "Sabatino, Antonio y otro c/Cometarsa, S.A."), revista "Derecho

del Trabajo", 1973, tomo XXXIII, página 423; T. y S.S., 1973/74, página 247.

55. — La ocupación por la fuerza del lugar de trabajo no constituye el ejercicio del derecho de huelga que protege el artículo 14 "nuevo" de la Ley Fundamental sino la violación de otro derecho constitucional de igual jerarquía: artículo 17. (CNTrab., sala III, 19/2/73, "Sabatino, Antonio y otro c/Cometarsa, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1973, tomo XXXIII, página 423; T. y S.S., 1973/74, página 247.

56. — Ante la actitud ilegítima que encierra la ocupación del establecimiento, a fin de no incurrir en la ruptura arbitraria del contrato de trabajo, el trabajador debe hacer saber al empleador, su disconformidad con el hecho, o bien la imposibilidad de entrar o salir del mismo o justificar su ausencia. (CNTrab., sala III, 19/2/73, "Sabatino, Antonio y otro c/Cometarsa, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1973, tomo XXXIII, página 423; T. y S.S., 1973/74, página 247.

57. — Es justificado el despido del dirigente gremial que participó personalmente en la ocupación de la fábrica y utilización de inflamables y tambores de explosivos, poniendo en peligro vida y bienes, resultando intrascendente al efecto, el hecho de haber obtenido sobreseimiento correccional, ya que una cosa es la injuria laboral y otra la conducta tipificante del delito. (CNTrab., sala VI, 28/2/75, "López, Francisco S. e/Alba Fábrica de Pinturas"), T. y S.S., 1975, página 839.

—Ver también en III.2. "Salas, Paulino N. c/Fabina, S.A.", L. T., tomo XXV, página 650

### IV. INTIMACION PREVIA

58. — La intimación previa de reintegrarse a las tareas no es requisito ineludible para decidir el despido de los trabajadores en huelga, debiendo determinarse la existencia de injuria según las circunstancias del caso. (CNTrab., sala III, 10 de septiembre de 1971, "Coman, Daniel O. c/Flota Fluvial del Estado Argentino"), L. T., tomo XX, página 275.

—Ver también en I.3. "Gómez, Carlos A. y otros c/Usina Santa Brígida", revista "Derecho del Trabajo", 1972, tomo XXXII, página 208.

59. — Con prescindencia de la legalidad o ilegalidad de la huelga, a falta de la intimación previa que la empleadora debió haber dirigido por cualquier medio a los trabajadores que participaron en ella antes del despido, hace que éste deba ser considerado, injustificado. (CNTrab., sala V, 29 de diciembre de 1971, "Rodríguez, Ramón C. y otros c/General Motors Argentina, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1972, tomo XXXII, página 379.

60. — La ley deja librado al criterio de los jueces establecer en cada situación de despido si los hechos o circunstancias que le dieron lugar ostentan suficiente gravedad como para configurar la justa causa de ruptura del contrato, no pudiendo aseverarse a priori que

un hecho determinado constituya en términos absolutos y en todos los casos una "injuria". Es arbitrario el despido fundado exclusivamente en la realización de paros parciales, si no existió intimación previa del patrono tendiente a la cesación de tales medidas. (CNTrab., sala VI, 17 de febrero de 1972, "Zoppi, Héctor H. y otros c/Sadema, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1972, tomo XXXII, página 552.

61. — Los efectos del despido que no tuvo ejecución en razón de la intimación hecha a la empresa por la autoridad de aplicación, en virtud de la ley 6.014 de la provincia de Buenos Aires, quedan suspendidos hasta la finalización del procedimiento obligatorio del conciliación. (CNTrab., sala II, 2 de marzo de 1973, "Dangas y otros c/Arando Industrial y Comercial S.A."), T. y S.S., 1973/74, página 453.

62. — La adhesión de los trabajadores a una medida ilegal de acción directa no configura por sí sola, injuria en los términos de la ley de despido. Para que éste proceda resulta indispensable la intimación previa de los trabajadores. (CNTrab., sala II, 2 de marzo de 1973, "Dangas y otros c/Arando Industrial y Comercial, S.A."), T. y S.S., 1973/74, página 453.

63. — Bajo el régimen de la ley 21.261 anterior a la sanción de la ley 21.400, la violación de la normativa suspensiva del artículo 1º por cualquiera de las formas de acción directa allí enunciadas no produce automáticamente la extinción de los contratos individuales de trabajo, en tanto no se hubiera practicado la previa intimación que debe efectuar la autoridad nacional de aplicación a los operarios participantes del acto de abstención colectiva de trabajo, general, pacífico y espontáneo, realizado en los lugares de trabajo (TTrab. Nº 1 Lanús, 20 de marzo de 1978, "Andreucci, Marco y otros c/Chrysler Fevre, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 591.

64. — Producido un conflicto colectivo en el año 1972, y atento la legislación vigente en esa época, pese a que la huelga sea ilegítima, la empresa no pudo despedir a sus obreros sin intimación previa a reanudar sus tareas, efectuada durante el curso de la huelga y desoída por los trabajadores. Si bien la declaración de ilegalidad de la medida no rescinde por sí el contrato de trabajo, el obrero que desoye la intimación del principal a reanudar sus tareas se hace pasible de despido por inobservancia arbitraria del mismo. (SC Buenos Aires, 7 de agosto de 1979, "Almirón, Aldo R. y otros c/Bertrán Hnos. y Cia."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1130.

65. — La ley 21.400 no requiere medida alguna de intimación previa para que procedan las sanciones que ella dispone. (CNTrab., sala VI, 12 de septiembre de 1979, "Ferraris, Alfredo R. y otro c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1161.

66. — En virtud de lo dispuesto por la ley 21.400 los trabajadores que participen en cualquiera de los actos previstos en su artículo 1º, inciso b), incurrirán en causal de despido justificado sin necesidad de intimación

previa, (CNTrab., sala II, 11 de marzo de 1980, "Rodríguez, Héctor y otros c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 1322.

—Ver también en I.3.1., "Flores Abad, Prudencio c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda.", revista "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 225.

—Ver también en I.3.1., "Leguiza, Angel S. c/Frenith, S.A." L.T. tomo XXIX, página 751.

—Ver también en I.3.1., "Rodríguez, Héctor y otros c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda.", L. T. tomo XXIX, página 934.

#### IV.E. Fehaciente

—Ver en III.1., "Barreto, Roberto W. y otros c/López, González, Raimondi y Asociados", revista "Derecho del Trabajo", 1977, tomo XXXVII, página 791, etcétera.

### V. EFECTOS DE LA HUELGA SOBRE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

67. — La ilegitimidad de una huelga no justifica sin más (automáticamente) el despido de los huelguistas ya que debe determinarse la entidad de la falta (ausencia no justificada), graduada en consideración a las circunstancias de los respectivos contratos de trabajo de los responsables de tal incumplimiento. De tal modo, aunque haya existido una falta (incumplimiento contractual) debe aún establecerse si tiene suficiente gravedad como para justificar la ruptura del contrato, según resulta de aplicar a estos casos la disposición del artículo 159 del Código de Comercio. (CNTrab., sala VI, 29 de marzo de 1973, "Errubi Velázquez, Félix c/Tercio, S.R.L."), L. T. tomo XXI, página 840.

#### V.1. Suspensión de la relación laboral

—Ver en II. "Barreto, Roberto W. y otros c/López, González, Raimondi y Asociados", revista "Derecho del Trabajo", 1977, tomo XXXVII, página 791.

68. — La finalidad del artículo 11 de la ley 21.400, no es otra que la de proteger la producción con miras a la tutela de la seguridad del Estado y aquella se vería afectada si se obligase a los empleadores a mantener *sine die* el congelamiento de vacantes dejadas por dependientes que se encuentran a disposición del Poder Ejecutivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Nacional. En consecuencia, la suspensión automática del contrato individual de trabajo a que se refiere el primer párrafo del artículo 11, podrá convertirse en cesantía una vez transcurridos los tres meses desde que se produjo el arresto. Con la libertad del trabajador, cesa la suspensión automática y el contrato retoma su vigor, y no parece que en tal caso subsista el propósito de la norma —evitar el congelamiento de la vacante—. El empleador pudo hacer cesar la relación laboral, era sólo una facultad que para hacerse efectiva

requería una decisión mientras duró el arresto, pero no conserva dicha facultad al desaparecer la imposibilidad de que el trabajador reanude sus prestaciones (del dictamen del Procurador General de la Nación al que adhiera la Corte). (CS, 23 de abril de 1981, "Romero, Ramón c/Swissair Líneas Aéreas Suizas s/despido"), L. T., tomo XXIX, página 934 (jurisprudencia sintetizada por Francisco Silvano).

## V.2. Remuneración por los días de huelga

69. — Los trabajadores no están obligados a cumplir sus tareas bajo normas distintas de las aplicables a la relación individual de trabajo, consecuentemente tienen derecho a los salarios de los paros producidos con motivo de la decisión patronal de modificar de modo arbitrario el contrato. (CNTrab., sala II, 27 de febrero de 1973, "Tamer, Marcos y otro c/Cia. Swift de La Plata"), L. T., tomo XXI, página 1034; T. y S.S., 1973/74, página 555.

70. — Si se reduce la remuneración del personal en forma proporcional a la disminución de la producción en el establecimiento como consecuencia de la medida de fuerza, los empleadores deberán comunicarlo a la autoridad de aplicación dentro de las 24 horas, poniendo a su disposición la documentación que acredite los extremos necesarios para establecer la procedencia de la medida y el porcentaje de reducción. La autoridad de aplicación ratificará la reducción, y esa decisión es apelable ante la Justicia Nacional del Trabajo dentro de los 10 días corridos. (CNTrab., sala I, 28 de febrero de 1979, "Paiz, Justino J. y otros s/Kenia S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 929; L. T., tomo XXVIII, página 364.

## V.3. Despido injustificado

—Ver en IV. "Zoppi, Héctor y otros c/Sadema S.A.", revista "Derecho del Trabajo", 1972, tomo XXXII, página 552.

—Ver también en II.4. "Raymond, Antonio F. y otros c/Dirección Nacional de Fabricaciones Aeronáuticas", revista "Derecho del Trabajo", 1973, tomo XXXIII, página 292.

71. — Una ausencia de dos días en razón de una huelga no puede ser considerada injuria suficiente como para justificar el despido de los huelguistas. (CNTrab., sala VI, 29/3/73, "Errubi Velázquez, Félix c/Tercio S.R.L."), L. T., tomo XXI, página 840.

72. — El incumplimiento traducido en un paro de brazos caídos, durante dos jornadas, efectuado por un trabajador con 20 años de antigüedad y buen comportamiento, originado en un considerable atraso en el pago de sus salarios, y que no fue intimado previamente a la reanudación de tareas, no configura justa causa de despido. (CNTrab., sala VI, 28/2/74, "Abatemarco, Horacio H. c/Eureka, S.A."), T. y S.S., 1973/74, página 527; L. T., tomo XXII, página 655.

—Ver también en II.1. "Salas, Paulino N. c/Fabina, S.A.", T. y S.S., 1977, página 637, etcétera.

—Ver también en III.2. "Salas, Paulino N. c/Fabina, S.A.", T. y S.S., 1977, página 637; L. T., tomo XXV, página 650.

—Ver también en III.2. "Osorio, Hugo A. c/Fabina, S.A.", L. T., tomo XXVII, página 552, etcétera.

—Ver también en I.2. "Alvarez López, Horacio A. y otro c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda.", revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1270.

## V.4. Injuria

—Ver en I.3. "Gómez, Carlos A. y otros c/Usina Santa Brígida", revista "Derecho del Trabajo", 1972, tomo XXXII, página 208.

—Ver también en IV. "Zoppi, Héctor H. y otros c/Sadema, S.A.", revista "Derecho del Trabajo", 1972, tomo XXXII, página 552.

—Ver también en IV. "Dangas y otros c/Arando Industrial y Comercial, S.A.", T. y S.S., 1973/74, página 453.

—Ver también en III.5. "López, Francisco S. c/Alba Fábrica de Pinturas", T. y S.S., 1975, página 839.

—Ver también en I.3. "Salas, Paulino N. c/Fabina, S.A.", L. T., tomo XXV, página 650.

73. — Si el hecho imputado al trabajador es grave e impide la prosecución del contrato (organización de un paro ilegítimo), es irrelevante el examen de sus antecedentes. (CNTrab., sala III, 28/4/78, "Bobinac, Elías c/La Prensa, S.C.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 478; T. y S.S., 1978, página 415; L. T., tomo XXVI, página 847.

—Ver también en I.3. "Flores Abad, Prudencio c/Maquinarias Di Tella Ltda.", rev. "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 225.

74. — El motivo determinante del paro no es factor relevante para juzgar sobre la justa causa del despido, pues ya sea que responda a un paro general como a una medida limitada al establecimiento particular, la participación en medidas de acción directa, siempre es injuriosa. (CNTrab., sala II, 26/11/80, "Rodrigo, Oscar c/Duperial, S.A."), L. T., XXIX, página 566.

## V.5. Causa de despido

—Ver en III.5. "Sabatino, Antonio y otro c/Cometarsa, S.A.", revista "Derecho del Trabajo", 1973, tomo XXXIII, página 423, etcétera.

—Ver en I.2., "Herner, Luis R. c/ Frigoríficos Argentinos, S.A.", T. y S.S., 1976, página 229.

—Ver en V.4. "Bobinac, Elías c/'La Prensa', S.C.A.", T. y S.S., 1978, página 415, etcétera.

—Ver en I.3.1., "Paiz, Justino J. y otros c/Kenia, S.A.", revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 929.

—Ver en IV., "Almirón, Aldo R. y otros c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda.", revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1150.

—Ver en I.3., "Flores Abad, Prudencio c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda.", revista "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 225.

—Ver en I.2., "Cadel, Beatriz M. c/Complejo Textil Bernalesa, S.R.L.", revista "Derecho del Trabajo", 1981, tomo XLI-A, página 277.

75. — La extrema severidad de la ley 21.400 se manifiesta en su artículo 8º, en el que dispone que los trabajadores que participen en cualquiera de los actos previstos en el artículo 1º, inciso b) perderán el derecho al cobro de remuneraciones o sufrirán una reducción proporcional, y además incurrirán en causal de despido justificado. Esta norma establece un vínculo directo y automático entre el incumplimiento de la prohibición del artículo 1º, inciso b) y la justificación del despido, y no da lugar a la apreciación prudencial según las modalidades de cada caso, a diferencia del artículo 242 de la L.C.T. (CNTrab., sala III, 31 de diciembre de 1980, "Puntano, Raúl c/Frigorífico Meatex"), L.T., tomo XXIX, página 378.

76. — Las cesantías aplicadas con motivo de un conflicto colectivo deben ser un medio para resolverlo y no un modo de ejecutar la separación coyuntural de algunos trabajadores. (CNTrab., sala VI, 25 de febrero de 1982, "Alonso, Juan O. c/Duperial, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1982, tomo XLII-B, página 730.

77. — Durante la vigencia de la ley 21.400 el solo hecho de participar en un acto de huelga ilícita habilita, independientemente de los antecedentes del trabajador, el despido justificado. (CNTrab., sala III, 15 de abril de 1982, "Moreno, Horacio c/Empresa Sniafa"), revista "Derecho del Trabajo", 1982, tomo XLII-B, página 875.

78. — Acreditados los hechos ocurridos, surge la actitud de incumplimiento contractual por parte del trabajador al haber tomado parte en una huelga ilícita lo que hace aplicable lo dispuesto en la ley 21.400 aun en caso de que en el telegrama de despido no se hubiera hecho mención de dicha norma. (CNTrab., sala III, 15 de abril de 1982, "Moreno, Horacio c/Empresa Sniafa"), revista "Derecho del Trabajo", 1982, tomo XLII-B, página 875.

#### V.6. Ley 21.400

79. — La ley 21.400 establece una injuria especial y excluye a la huelga en todas sus formas de la especie injuria genérica que contempla el artículo 242, texto ordenado L.C.T., privando a los jueces de la posibilidad de valorar en concreto la conducta de los trabajadores (CNTrab., sala IV, 29-12-78, "Di Tullio, Teresa R. c/Kenia S.A."), T. y S.S., 1979, página 313.

—Ver también en I.2., "San Martín, Alfredo c/Chrysler Fevre Argentina, S.A.", Rev. "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 101, etcétera.

80. — Si la simple reducción o pérdida del salario se encuentra revestida de tantas garantías, el despido, que es la más grave de las decisiones que se pueden adoptar, no puede resultar justificado por el solo hecho de encuadrarlo en las disposiciones de la ley 21.400 (CNTrab., sala I, 28-2-79, "Paiz, Justino J. y otros c/Kenia S.A."), Rev. "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 929, L.T., tomo XXVIII, página 364.

81. — Si no se ha demostrado la efectiva participación del actor en los hechos que se le imputan, ni en consecuencia en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 5º, 7º y 8º de la ley 21.400, no es aplicable el artículo 12 del citado ordenamiento. (CNTrab., sala I, 6-7-79, "Villalba Ruiz, Juan C. c/Kenia, S.A."), Rev. "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1015.

82. — Si se produjo un despido invocándose activa participación en actos previstos en la ley 21.400 a fin de eximirse del pago de las indemnizaciones legales, debe probarse no sólo el hecho de la participación en los actos ilegales, sino lo calificado de esta participación. (CNTrab., sala V, 7-9-79, "Alvarez López, Horacio A. y otro c/Siam Di Tella Ltda."), Rev. "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1270, T y SS, 1979 página 597, L.T.; tomo XXVIII, página 364.

83. — El artículo 8º de la ley 21.400 prescribe la causal de despido justificado para los trabajadores que participen en cualquiera de los actos previstos en el artículo 1º, inciso b) de la citada ley, por lo que el requisito de la concertación no es exigible en todos los casos enunciados en ese artículo. (CNTrab., sala VI, 12-9-79, "Ferraris, Alfredo R. y otro c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda."), Rev. "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1161.

84. — El último párrafo del artículo 8º de la ley 21.400, no puede ser aplicado a voluntad por el empleador, porque la decisión adoptada siempre está sujeta al control de razonabilidad en primer lugar, de la autoridad de aplicación y la decisión de ésta por el Poder Judicial. (CNTrab., sala I, 20-2-79, "Paz Justino J. y otros c/Kenia S.A."), Rev. "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 929, L.T., tomo XXVIII, página 364.

85. — La ley 21.400, que incorporó a nuestra legislación el tipo de injuria específica con respecto a la huelga, torna inaplicable a los despidos dispuestos en virtud de ella, toda la jurisprudencia elaborada en torno a la discriminación, antecedentes personales del huelguista y demás elementos de valoración que antes permitían el artículo 149 de la ley 11.729, artículo 242, texto ordenado, R.C.T., y artículo 243, L.C.T. (CNTrab., sala IV, 28-3-79, "Miranda, Pedro c/Chrysler Fevre Argentina, S.A."), L.T., tomo XXVIII, página 364.

86. — El cumplimiento de los recaudos exigidos por la ley 21.400 debe ser evaluado con criterio estricto en consideración al carácter excepcional de esa norma. (CNTrab., sala I, 26-6-79, "Attila c/Fiat Concord S.A."; sala I, 12-6-80, "D'Aloia, Dantel c/ENTEL"), L.T., tomo XXVIII, página 859.

—Ver también en IV, "Rodríguez, Héctor y otros c/ Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda.", Rev. "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 1322, etcétera.

87.—Frente a los términos categóricos de la ley 21.400 no cabe invocar la doctrina de la discriminación, puesto que para la citada ley, el solo hecho de participar en una medida de acción directa constituye injuria grave sancionable con el despido, no quedando margen para valorar si el mismo hecho cometido por dos o más trabajadores fue sancionado en manera distinta en uno y otro caso. (CNTrab., sala II, 11-3-80, "Rodríguez, Héctor y otros c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda.", Rev. "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 1322; L.T., tomo XXVIII, página 860.

—Ver también en I.3.1., "Flores Abad, Prudencia c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda.", Rev. "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 225.

—Ver también en I.3., "Flores Abad, Prudencia c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda.", Rev. "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 225.

88.—Si el despido se produjo por aplicación de la ley 21.400 es irrelevante que haya sido dispuesto dentro del plazo de garantía que establece el artículo 49 de la ley 20.615 por cuanto dicha estabilidad cesa automáticamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la citada ley 21.400. (CNTrab., sala III, 31-10-79, "Flores Abad, Prudencia c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda.", Rev. "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 225.

89.—Dentro del ámbito de aplicación de la ley 21.400 es inaplicable la doctrina de la discriminación arbitraria que recepta el artículo 81 de la L.C.T., según la cual el empleador no puede juzgar en forma distinta las mismas actitudes asumidas por varios empleados. (CNTrab., sala III, 31-10-79, "Flores Abad, Prudencia c/Siam Soc. Ind. Maquinarias Di Tella Ltda.", Rev. "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 225.

90.—Si la actora incurrió en la injuria específica prevista por la normativa vigente (artículo 1º, leyes 21.261 y 21.400) que autoriza al empleador a decidir el despido justificado del trabajador, si bien dicha legislación es de excepción y por ende, de aplicación restrictiva, en virtud del artículo 8º de la ley 21.400, es procedente el despido. (Tribunal del Trabajo Nº 1 Quilmes, 7-8-80, "Cadel, Beatriz M. c/Complejo Textil Bernalesa S.R.L.", Rev. "Derecho del Trabajo", 1981, tomo XLI-A, página 277.

91.—Si se configura la causal prevista por la ley 21.400, el empleador tiene la facultad de rescindir el contrato de cualquier trabajador que hubiera incurrido en dicha causal, pudiendo ejercerla o no concretamente en relación a cada uno, sin caer por ello en violación del principio de no discriminación contemplado en el artículo 81 de la L.C.T. (Tribunal del Trabajo Nº 1 Quilmes, 7-8-80, "Cadel, Beatriz M. c/Complejo Textil Bernalesa S.R.L.", Rev. "Derecho del Trabajo", 1981, tomo XLI-A, página 277.

92.—Atento lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 21.400 el empleador está facultado a despedir sin obligación de indemnizar luego de conservar por tres meses

el cargo, al empleado puesto a disposición del Poder Ejecutivo nacional. (CNTrab., sala VIII, 6-4-81, "Rodríguez Moreno, Rubén c/Sociedad Mixta Siderurgia Argentina", Rev. "Derecho del Trabajo", 1981, tomo XLI-B, página 1064.

—Ver también en V. 5., "Puntano, Raúl c/Frigrífico Meatex", L.T., tomo XXIX, página 378.

—Ver también en I.3., "Rodrigo, Oscar c/Duperial S.A.", L.T., tomo XXIX, página 566.

93.—La ley 21.400 califica la participación de los trabajadores en medidas de acción directa determinando una injuria específica sustrayendo a la evaluación de los jueces (artículo 242, L.2 C.T.), la conducta señalada. (CNTrab., sala II, 26-11-80, "Rodrigo, Oscar c/Duperial S.A.", L.T., tomo XXIX, página 566.

94.—Para la ley 21.400, el hecho de participar en una medida de acción directa implica una injuria grave, sancionada con el despido, sin que corresponda evaluar si el mismo hecho cometido por dos o más trabajadores fue sancionado de manera distinta en otro caso. (CNTrab., sala II, 26-11-80, "Rodrigo, Oscar c/Duperial S.A.", L.T., tomo XXIX, página 566.

—Ver también en I.3.1., "Leguiza, Angel S. c/Frenithe S.A.", L.T., tomo XXIX, página 751.

95.—La circunstancia de haberse invocado la ley 21.400 para disponer el despido, no autoriza por sí misma a reclamar daño moral. (CNTrab., sala VI, 26 de noviembre de 1980, "García, Carlos A. c/ENTEL", L.T., tomo XXIX, página 286.

—Ver también en I.3.1., "Martínez, Atanasio R. c/ENTEL s/despido", L.T., tomo XXIX, página 934 (Jurisprudencia sintetizada por Francisco Silvano).

—Ver también en I.3.1., ídem anterior, último sumario.

## V.7. Práctica desleal

96.—No constituye práctica desleal el despido del delegado sindical que hubiera participado en una medida de acción directa ilegal (CNTrab., sala V, 14 de marzo de 1972, "Asociación Argentina Empleados de la Marina Mercante c/Flota Fluvial del Estado", revista "Derecho del Trabajo", 1972, tomo XXXII, página 701.

—Ver también en III.5., "López, Francisco S. c/Alba Fábrica de Pinturas", T y SS, 1975, página 839.

## VI. EFECTOS DE LA CALIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA HUELGA

### VI.1. Falta de calificación administrativa

97.—Carece de adecuado sustento la sentencia que, a pesar de lo solicitado por la empleadora, omite pronunciarse con respecto a la ilicitud de la medida de fuerza en que participaron los trabajadores despedidos condenando a aquélla al pago de las indemnizaciones de despido. (CS, 2 de mayo de 1978, "Freccero, Remi A. c/F.A.M.M., S.R.L.", revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 967; T y SS 1978, página 459; L.T., tomo XXVI, página 840.

98.—Ante la falta de decisión administrativa, o cuando ésta es manifiestamente arbitraria, corresponde a los jueces de la causa la calificación de la licitud de una medida de fuerza. (CS, 2 de mayo de 1978, "Freccero, Remi A. c/F.A.M.M., S.R.L.", revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 967; T y SS, 1978, página 459; L.T., tomo XXVI, página 840.

99.—No configura pronunciamiento sobre la licitud de una medida de fuerza el hecho de haberse discriminado entre el personal que fue reincorporado. (CS, 2 de mayo de 1978, "Freccero, Remi A. c/F.A.M.M., S.R.L.", revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, p. 967; T y SS, 1978, página 459; L.T., tomo XXVI, página 840.

100.—A fin de juzgar sobre la procedencia de las indemnizaciones por despido reclamadas por los trabajadores partícipes de una huelga resulta necesario que medie calificación sobre la legitimidad de la medida de fuerza por los jueces de la causa, a falta de decisión administrativa o cuando ella sea manifiestamente arbitraria. (CS, 2 de mayo de 1978, "Freccero, Remi A. c/F.A.M.M., S.R.L.", revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 967; T y SS, 1978, página 459; L.T., tomo XXVI, página 840.

101.—No es necesaria la declaración del Poder Ejecutivo sobre la suspensión de medidas de fuerza a que se refiere el artículo 1º de la ley 21.400 por cuanto el artículo 14 de la misma ratifica el artículo 1º de la ley 21.261 que suspende el derecho de huelga y expresamente declara que no será necesaria la declaración referida en cuanto continúe vigente la mencionada ley 21.261. (CNTrab., sala VIII, 22 de diciembre de 1980, "Leguiza, Angel S. c/Frenithe, S.A.", L.T., tomo XXIX, página 751.

#### VI.2. Discriminación con los trabajadores huelguistas despedidos

102.—La reincorporación selectiva de un grupo de trabajadores despedidos por haber participado en una huelga declarada ilegal, configura discriminación injustificada en perjuicio de quienes no han recibido igual trato, lo que torna procedente el reclamo por parte de éstos de las indemnizaciones por despido injustificado. (CNTrab., sala III, 29 de septiembre de 1977, "Varela, Juan Carlos c/Cía Nobleza de Tabacos, S.A.", T y SS, 1977, página 767.

—Ver también en VI.1., "Freccero, Remi A. c/F.A.M.M., S.R.L."; T y SS, 1978, página 459, etcétera.

103.—La ley 21.400 constituye un régimen de emergencia y excepcional, que suspende en forma transitoria algunos derechos reconocidos constitucionalmente, por lo que frente al ordenamiento específico, no puede invocarse el trato discriminatorio como causal eximente de despido justificado. (CNTrab., sala VI, 12 de septiembre de 1979, "Ferraris, Alfredo R. y otro c/Siam Sociedad Industrial Maquinarias Di Tella Ltda.", revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1161.

104.—La legislación de emergencia no da cabida a los supuestos de discriminación, precisamente dado su

carácter de excepción y de los bienes protegidos (producción, seguridad y orden interno). (CNTrab., sala I, 26 de septiembre de 1978, "San Martín, Alfredo c/Chrysler Fevre Argentina, S.A.", revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 101.

—Ver también en V.6., "Rodríguez, Héctor y otros c/Siam Sociedad Industrial Maquinarias Di Tella Ltda.", revista "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 1322, etcétera.

—Ver también en V.6., "Flores Abad, Prudencio c/Siam Sociedad Industrial Maquinarias Di Tella Ltda.", revista "Derecho del Trabajo", 1980, XL, página 225.

—Ver también en V.6., "Cadel, Beatriz M. c/Complejo Textil Bernalesa, S.R.L.", revista "Derecho del Trabajo", 1981, tomo XLI-A, página 277.

—Ver también en V.6., "Rodrigo, Oscar c/Duperial, S.A.", L.T., tomo XXIX, página 566.

#### VII. SUSPENSION TRANSITORIA DEL DERECHO DE HUELGA. LEYES 21.261 y 21.400

—Ver en IV. "Andreucci, Marco y otros c/Chrysler Fevre, S.A.", revista "Derecho del Trabajo", 1978, tomo XXXVIII, página 591.

—Ver también en VI.2., "Ferraris, Alfredo R. y otro c/Siam Sociedad Industrial Maquinarias Di Tella Ltda.", revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1161.

—Ver también en III.3., "Passalacqua, Alberto c/Canapa S.A.", revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1030.

105.—Cuando existe negativa expresa, reiterada y cierta del trabajador a realizar su tarea, constituido en "mora" significaría realizar un trámite previo impropio de las circunstancias en que se encuentra la relación contractual. En el caso se consideró que la conducta observada por los actores, constituyó una medida de fuerza, que perseguía variaciones de su régimen laboral, medida ésta expresamente prohibida por la ley 21.261. (SC Buenos Aires, 20 de febrero de 1979, "Dufour, Jorge y otro c/Olivetti Argentina, S.A.", revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 925.

106.—El régimen legal de la ley 21.400, habla su razón de ser en la situación imperante al tiempo de la sanción, consciente de que configuraría una restricción de derechos de raigambre constitucional y cuya suspensión directa o determinación de exigencias para su ejercicio, se le asigna carácter temporal y dependiente de un acto expreso del Poder Ejecutivo que declare la necesidad de su aplicación. Por eso el legislador estableció la pauta de que el ejercicio del instrumento legal debe ser prudente. (CNTrab., sala V, 7 de septiembre de 1979, "Alvarez López, Horacio A. y otro c/Siam Sociedad Industrial Maquinarias Di Tella Ltda.", revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1270.

107.—A los efectos de la aplicación de la ley 21.400 no debe perderse de vista la gravedad, extensión y resonancia pública del conflicto, pues la finalidad de la ley fue la de disuadir actitudes lesivas a la seguridad del Estado y los requerimientos coyunturales de la economía nacional, o sea intereses generales y no del sector.

(CNTrab., sala V, 7 de septiembre de 1979, "Álvarez López, Horacio A. y otro c/Siam Sociedad Industrial Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1270.

108. — Por su carácter de legislación de emergencia no es inconstitucional la ley 21.400 que suspende transitoriamente las medidas de acción directa de los trabajadores y de los empleadores. (CNTrab., sala I, 26 de septiembre de 1978, "San Martín, Alfredo c/Chrysler Fevre Argentina, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 101.

109. — Si no hubo incidentes, ni agresiones, ni actitudes insolentes, destrucción, desaparición, atentado contra bienes de la empresa, ni se demostró que los actores fueran instigadores u organizadores, sino que, simplemente, todo consistió en suspender la realización de tareas, en permanecer en el establecimiento y reunirse en las ocasiones en que debieron informarse o escuchar exhortaciones o intimaciones a reanudar la labor, no existió activa participación en actos previstos en la ley 21.400. (CNTrab., sala V, 7 de septiembre de 1979, "Álvarez López, Horacio A. y otro c/Siam Sociedad Industrial Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 1270.

110. — No es inconstitucional la ley 21.400, dado que —habiendo sido dictada bajo el estado de sitio que prevé el artículo 23 de la Constitución Nacional— sus normas no son manifiestamente irrazonables y las sanciones que establece no son desproporcionadas con los fines perseguidos al dictarla. (CNTrab., sala IV, 28 de marzo de 1979, "Miranda, Pedro c/Chrysler Fevre Argentina, S.A."; íd., sala I, 26 de septiembre de 1978, "San Martín, Alfredo c/Chrysler Fevre Argentina, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1979, tomo XXXIX, página 101; L.T., tomo XXVIII, página 364.

111. — La ley 21.400 consagra un régimen de excepción en virtud del cual se faculta al Poder Ejecutivo, en situaciones de emergencia o cuando se ha declarado el estado de sitio, para suspender el ejercicio del derecho de huelga, y consagra, en caso de violación de su normativa, un tipo específico de injuria que permite el despido sin ningún tipo de indemnización. (CNTrab., sala II, 11 de marzo de 1980, "Rodríguez, Héctor y otros c/Siam Sociedad Industrial Maquinarias Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1980, tomo XL, página 1322; L.T., tomo XXVIII, página 860.

112. — Es improcedente la declaración de inconstitucionalidad de la ley 21.400, puesto que el derecho de huelga garantizado a los gremios por la Constitución Nacional, puede ser suspendido o restringido en casos de estado de sitio o de emergencia económica, no requiriéndose la declaración previa del Poder Ejecutivo en cada caso para determinar si existen en un momento y lugar dados situaciones de emergencia económica o social, bastando la decisión del Poder Legislativo para determinar la existencia de las especiales circunstancias que tornan aplicable la legislación excepcional. (CS, 21 de octubre de 1980, "Esteban R. H. c/Metal-Madera, S. R.L."), revista "Derecho del Trabajo", 1981, tomo XLI-A, página 27; L. T., tomo XXIX, página 177.

113. — A partir de la vigencia de la ley 21.261 se suspendió transitoriamente en todo el país el derecho

de huelga, y también toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución de trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera pudieran afectar la producción (TTrab. N° 1 Quilmes, 7 de agosto de 1980, "Cadel, Beatriz M. c/Complejo Textil Bernalesa, S.R.L."), revista "Derecho del Trabajo", 1981, tomo XLI-A, página 27.

— Ver también en II., "Rodríguez Moreno, Rubén c/ Sociedad Mixta Siderurgia Argentina", revista "Derecho del Trabajo", 1981, tomo XLI-B, página 1064.

114. — No es inconstitucional el artículo 1° de la ley 21.400 en cuanto suspende el derecho de huelga, pues en el artículo 23 de la Constitución Nacional, se autoriza, en situaciones de extrema gravedad que pongan en peligro la seguridad del Estado, la suspensión de las garantías constitucionales. (CNTrab., sala VIII, 22 de diciembre de 1980, "Leguiza, Angel S. c/Frenithe, S. A."), L.T., tomo XXIX, página 751.

115. — La ley 21.400 está actualmente en vigencia y está fuera de competencia judicial la decisión respecto de la posible superación de las circunstancias que dieron origen a la sanción de la citada norma. (CNTrab., sala VIII, 22 de diciembre de 1980, "Leguiza, Angel S. c/Frenithe, S.A."), L.T., tomo XXIX, página 751.

116. — Toda decisión sobre la conveniencia económico-social de la vigencia de las leyes de emergencia, es privativa del Poder Legislativo. (CNTrab., sala VIII, 22 de diciembre de 1980, "Leguiza, Angel S. c/Frenithe, S.A."), L.T., tomo XXIX, página 751.

— Ver también en VI.I., "Leguiza, Angel S. c/Frenithe, S.A.", L.T., tomo XXIX, página 751.

— Ver también en I.3.I., "Martínez, Atanasio R. c/ ENTEL s/despido", L.T., tomo XXIX, página 934 (Jurisprudencia sintetizada por Francisco Silvano).

117. — Si bien la ley 21.400 autoriza el despido por la participación de los trabajadores en cualquier medida de fuerza, este régimen normativo tiene la finalidad de asegurar el orden, la paz social y mantener la producción y no el de legitimar medidas abusivas e irrazonables por parte de los empleadores. (CNTrab., sala VI, 25 de febrero de 1982, "Alonso, Juan O. c/Duperial, S.A."), revista "Derecho del Trabajo", 1982, tomo XLII-B, página 730.

118. — La ley 21.400 en su artículo 8° prescribe la existencia de justa causa de despido cuando el prestador de servicios participa en alguna medida de acción directa, sin que el juzgador deba realizar valoración alguna respecto de la presencia o no de la injuria que la norma considera existente. (CS, 20 de abril de 1982, "Lazarte, Miguel D. c/Siam Di Tella Ltda."), revista "Derecho del Trabajo", 1982, tomo XLII-B, página 869.

## VIII. LOCK-OUT

119. — El derecho de "lock-out" ofensivo, no está reconocido como tal, a diferencia de lo que ocurre con el derecho de huelga. Lo más que pueden hacer al respecto los empleadores, es suspender observando las condiciones que fija el artículo 66 del decreto ley 33.302/45 y la interpretación de la jurisprudencia plenaria. (CNTrab., sala II, 27 de febrero de 1973, "Tamer, Marcos y otros c/Cia. Swift de La Plata"), T y SS, 1973/74, página 555; L.T., tomo XXI, página 1034.

120. — Es ofensivo el “lock-out” que buscaba como condición para su cese, obligar a la parte obrera a aceptar determinadas condiciones de trabajo, pese a que a la vez se disponga como respuesta a paros que se consideran ilícitos. (CNTrab., sala II, 27 de febrero de 1973, “Tamer, Marcos y otro c/Cía. Swift de La Plata”), T y SS, 1973/74, página 555; L.T., tomo XXI, página 1034.

121. — Frente a las medidas de fuerza (*como las huelgas rotativas*) el empleador puede recurrir a la llamada *contrahuelga* o “lock-out”. (CNTrab., sala III, 28 de abril de 1978, “Bobinac, Elías c/La Prensa, S.C.A.”), revista “Derecho del Trabajo”, 1978, tomo XXXVIII, página 478; T y S.S., 1978, página 415; L.T., tomo XXVI, página 847.

122. — Si la empresa recurrente no pretendió en ningún momento ejercer el “lock-out”, sus argumentos para fundar la invalidez de la ley de arbitraje obligatorio 16.936 en relación con el derecho de huelga y su protección constitucional deriven improcedentes, por no existir derecho concreto afectado por la norma. (CS. 30 de octubre de 1979, “Hilanderías Olmos, S. A.”), revista “Derecho del Trabajo”, 1980, tomo XL, página 475.

## IX. CONCILIACION Y ARBITRAJE

123. — Es improcedente la declaración de inconstitucionalidad contra la ley que regula el procedimiento para solucionar conflictos colectivos de trabajo conocida con el N° 16.936 y su modificatoria 20.638, puesto que, a esta altura del desarrollo del derecho del trabajo no puede siquiera cuestionarse la facultad del Estado para utilizar procedimientos como la conciliación y el arbitraje para canalizar los conflictos colectivos y trasladarlos

del campo de la utilización de la fuerza al campo del derecho, aun en casos en que todavía no se haya utilizado o haya sido imposible la negociación colectiva. (CNTrab., sala IV, 28 de septiembre de 1977, “Hilanderías Olmos S.A.”), revista “Derecho del Trabajo”, 1978, tomo XXXVIII, página 193, T. y S.S., 1978, página 313.

124. — La jurisdicción administrativa con control jurídico —por medio del recurso de nulidad previsto en el artículo 6º de la ley 16.936, o la acción de los artículos 23 y 34 de la ley 19.549— son los “jueces naturales que el ordenamiento jurídico determina para solucionar por la vía de la conciliación y el arbitraje, los conflictos colectivos de intereses y de derechos y, por ello, la ley mencionada no viola el artículo 18 de la Constitución Nacional. (CNTrab., sala IV, 28 de septiembre de 1977, “Hilanderías Olmos, S. A.”), revista “Derecho del Trabajo”, 1978, tomo XXXVIII, página 193; T y SS, 1978, página 313.

125. — Producido un conflicto colectivo de trabajo en el año 1972, debió observarse el procedimiento de la ley 6.014 que permitía a las partes concertar medidas de acción directa luego de cumplido el mecanismo legal. (SC Buenos Aires, 7 de agosto de 1979, “Almirón, Aldo R. y otros c/Bertrán Hermanos y Compañía”), revista “Derecho del Trabajo”, 1979, tomo XXXIX, página 268.

126. — La creación de una instancia arbitral obligatoria instituida por el artículo 2º de la ley 16.936 para dirimir conflictos colectivos laborales constituye un medio razonable buscado por el legislador para poner término y resolver situaciones que además de afectar a las partes en pugna, compromete la tranquilidad social perjudicando los intereses generales. (CS, 30 de octubre de 1979, “Hilandería Olmos, S. A.”), revista “Derecho del Trabajo”, 1980, tomo XL, página 475.